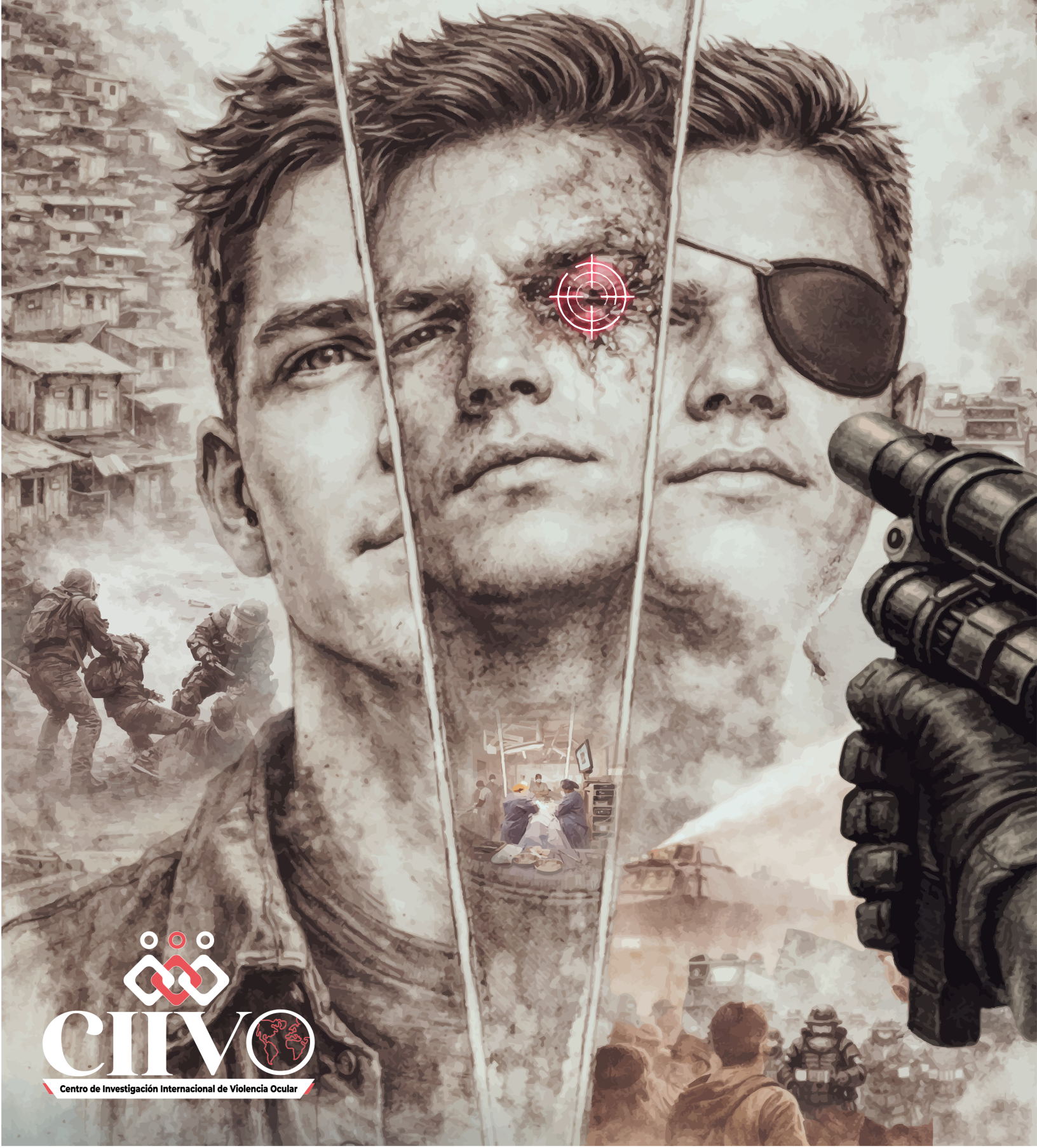


VER MÁS ALLÁ DE LA HERIDA



Elaborado por:

Juan Pablo Fonseca Roa
Andrés Juan Guerrero Rubiano
Lucía Guerrero Riviere
Juan Carlos Gonzalez Carpintero
Giovanny García Garrido
Daniel Alejandro Jaimes Serna

Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero de Open Society Foundations. Los puntos de vista aquí expuestos reflejan exclusivamente la opinión del Centro Investigación Internacional de Violencia Ocular (CIIVO), y, por tanto, no representa en ningún caso el punto de vista oficial de Open Society Foundations.

Bogotá, Colombia.

2026

Organizaciones que apoyaron el informe



Contenido

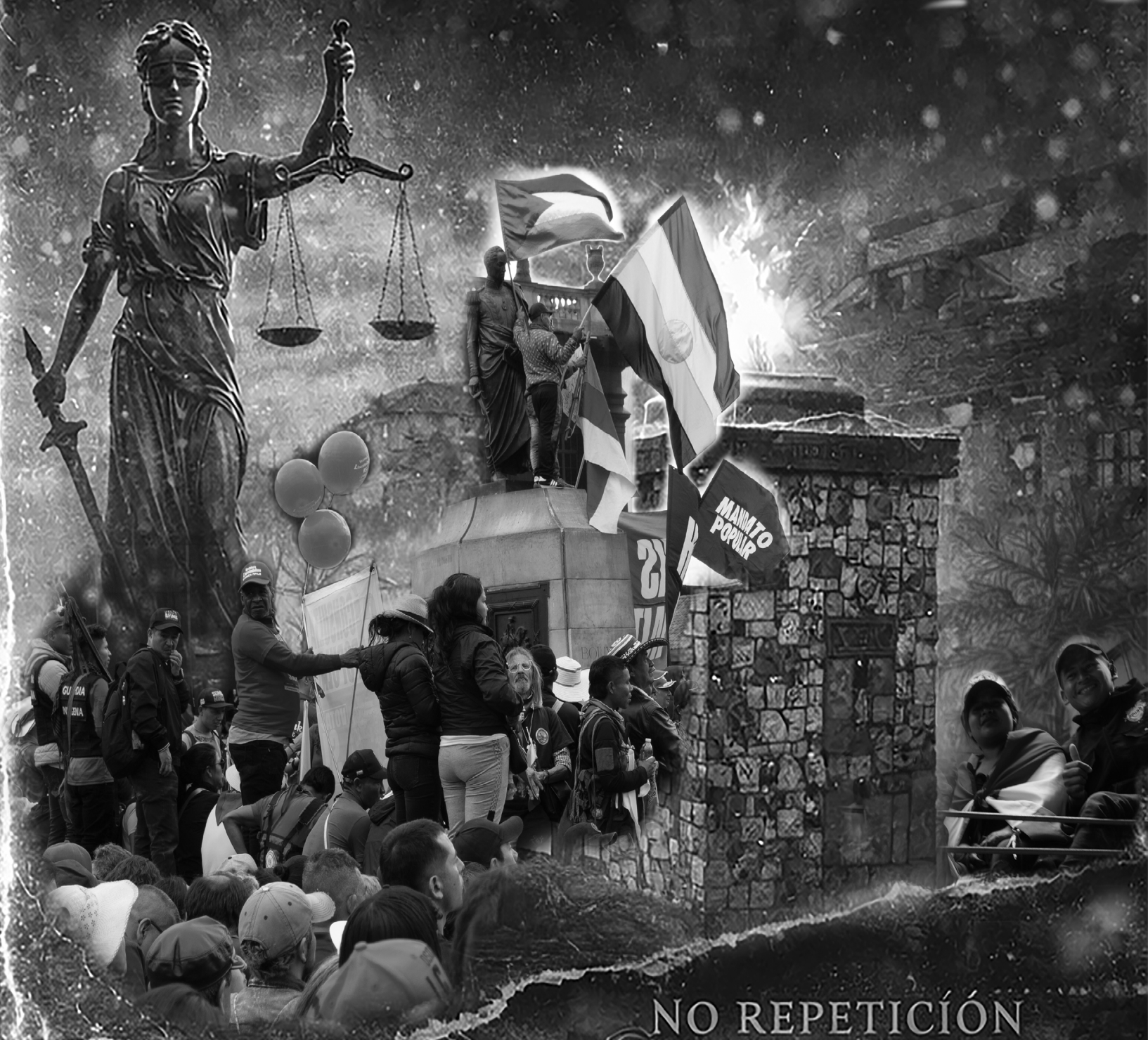
INTRODUCCIÓN	6
OBJETIVO GENERAL	10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
METODOLOGÍA	10
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CONCEPTUALES	16
CEGAR MIRADAS CRÍTICAS: LA VIOLENCIA OCULAR Y LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO	21
EL CASTIGO EJEMPLARIZANTE: LA LESIÓN OCULAR COMO LECCIÓN COLECTIVA	23
LAS RAÍCES CAPACITISTAS DEL USO DE LA DISCAPACIDAD COMO AMENAZA	25
IMPACTOS POSTRAUMÁTICOS	30
IMPACTOS IDENTITARIOS	30
IMPACTOS FAMILIARES	35
IMPACTOS RELACIONALES	41
IMPACTOS LABORALES	45
FORMAS DE REPARACIÓN	52
PROGRAMAS INTEGRALES Y COMPENSACIÓN ECONÓMICA	52
REPARACIÓN SIMBÓLICA, COLECTIVA, COMUNITARIA Y DE MEMORIA	53
VERDAD Y RESPONSABILIZACIÓN	55
NO REPETICIÓN	56
JUSTICIA	58
CONCLUSIONES	63
BIBLIOGRAFÍA	64
ANEXO-FRASES DE LOS SOBREVIVIENTES	66



VERDAD Y RESPONSABILIZACIÓN



JUSTICIA



NO REPETICIÓN



Introducción

Este informe tiene por objetivo definir y denunciar la violencia ocular como un acto sistemático de tortura ejecutado por el Estado en contextos de protesta social alrededor del mundo. Esta caracterización de la violencia ocular se sustenta con un análisis de distintos contextos políticos en los que se han registrado lesiones oculares masivas producto del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.

En particular, se busca contribuir de manera crítica al conocimiento existente en materia del uso de la fuerza en manifestaciones desde la perspectiva de los y las sobrevivientes de estas agresiones, quienes lideraron la preparación de este informe: son sus narrativas, experiencias, aspiraciones, y visiones para el futuro las que motivan y orientan esta investigación. Así, además de documentar, sistematizar y visibilizar las afectaciones multidimensionales que resultan de la violencia ocular, este informe busca que el público logre empatizar con los sobrevivientes, entender sus necesidades, y resuelva apoyar la lucha por la erradicación de este tipo de violencia.

Los hallazgos que se presentan a continuación ponen al centro y se nutren de las voces de quienes continúan enfrentando a diario las reverberaciones del impacto que marcó sus rostros. El enfoque principal es, pues, el análisis de los relatos de los y las sobrevivientes que se recogen en este informe, que permite identificar patrones claros en las repercusiones que ha dejado la violencia ocular en sus vidas, la de sus familias y, ante todo, en el ejercicio democrático y la participación política. Adicionalmente, se recogen los análisis de expertos defensores de derechos humanos a nivel nacional e internacional quienes han abordado el fenómeno de la violencia ocular desde distintas aristas en su ejercicio profesional. Estas contribuciones resaltan elementos teóricos, conceptuales, y técnicos que permiten comprender y afrontar las consecuencias de la violencia ocular dentro de un panorama más amplio y complejo en el que se imbrican la criminalización, señalamiento y represión de la protesta social. Por último, con el fin de formular recomendaciones concretas para garantizar la atención integral, reparación y no repetición, se documentan las acciones de resistencia y las prácticas de cuidado colectivos que han nacido en medio de la resiliencia de los y las sobrevivientes y sus familias. Buscamos de este modo contribuir a la preservación de la memoria colectiva sobre la violencia ocular y fomentar la solidaridad con los sobrevivientes, con miras a construir una conciencia social crítica que permita usar diversas estrategias para luchar contra este tipo de violencia. El informe



se divide en tres apartados: contextualización, impactos postraumáticos, y recomendaciones.

La primera parte propone algunas definiciones claves y contextualiza algunos de los escenarios de protestas en los cuales se ha hecho uso de la violencia ocular contra los manifestantes, incluyendo casos en Chile, Colombia, España, Bangladesh, Brasil, y EE. UU. Allí se hará hincapié en el uso desmedido de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado hacia los manifestantes, además de la perpetración de agresiones contra las personas sobrevivientes de violencia ocular, pues, como veremos a continuación, las violaciones a los derechos humanos no inician en el momento de la violencia ocular y tampoco terminan cuando la persona se “recupera” o se “estabiliza” médicamente.

La segunda parte caracteriza los impactos postraumáticos de la violencia ocular entre las personas sobrevivientes y sus redes de apoyo. Esta sección se fundamenta en las entrevistas realizadas con más de 35 sobrevivientes a esta violencia, quienes declararon cómo los impactos postraumáticos afectaron y continúan afectando diversos ámbitos de sus vidas. Dentro de los relatos que se lograron recoger y junto con recomendaciones de psicólogos/as experto/as en secuelas por agresiones oculares del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), se logró determinar cinco (5) categorías de análisis de impactos pos traumáticos, a saber: relaciones interpersonales, laborales, educativas, familiares e identitarias en términos de lo estético y de la autopercepción. Estas categorías forman la base de un análisis que permite establecer las necesidades de los sobrevivientes a partir de las secuelas que deja este tipo específico de tortura ejercida por el Estado.

Posteriormente, se exponen algunas prácticas de resistencia de sobrevivientes de trauma ocular, a partir del cuidado colectivo, retomas de algunos de los proyectos de vida, ejercicios colectivos de organización a partir de la experiencia mancomunada de las sobrevivientes y la exigencia para la restitución de derechos. Por último, a manera de conclusión, se proponen recomendaciones concretas a los Gobiernos para avanzar en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, a partir de los sentires de los sobrevivientes de violencia ocular, así como los conceptos expertos de los defensores de derecho humanos que aportan a estas exigencias a partir de sus disciplinas y saberes adquiridos en la lucha por la protección de los DD.HH.





VICTIMAS OCULARES

VICTIMAS

OCULARES

VICTIMAS

OCULARES

OCULARES

Objetivo General

- Definir y denunciar la violencia ocular como un acto sistemático y transnacional de tortura usado por el Estado para afectar los procesos de protesta

Objetivos específicos

- Visibilizar patrones comunes del uso ilegal de la fuerza en contextos de protesta
- Caracterizar las afectaciones permanentes en las víctimas a partir de los impactos postraumáticos asociados a la violencia ocular
- Generar exigencias que permitan la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Metodología

El presente informe es el resultado de un trabajo documental iniciado desde marzo de 2025, en el cual se realizaron 42 entrevistas: 35 a sobrevivientes de violencia ocular y 7 a defensores de derechos humanos expertos en distintas disciplinas y áreas del conocimiento (i.e., historia, derecho, antropología, psicología, medicina, entre otras). Las entrevistas se hicieron de manera presencial y virtual y tuvieron una duración de entre 10 y 60 minutos.

El proceso de contacto fue a través de organizaciones de derechos humanos de los diferentes países, específicamente Chile, Bangladesh, Ecuador, Perú, y EE. UU. Algunos de los investigadores de CIIVO ya tenían contacto con estas personas, lo cual hizo que fuese diligente el proceso de investigación preliminar. Posteriormente, se realizaron reuniones previas con algunos de los sobrevivientes, para explicar el objetivo de CIIVO. Asimismo, se explicó a los entrevistados la función de las entrevistas y su utilización en la realización de acciones de visibilización posteriores, entre ellas el presente informe.

A grandes rasgos, el método de investigación se encuentra ubicado en la hermenéutica, entendida como el “arte de interpretar”. Desde este enfoque de investigación se busca comprender a partir de las experiencias narradas por los sobrevivientes de violencia ocular las afectaciones y sus impactos postraumáticos permanentes. La interpretación a partir de este

enfoque es crucial, pues se busca analizar cada una de las respuestas brindadas desde una perspectiva de comprensión por los sentires del entrevistado, para así poder encontrar patrones comunes y profundizar en este tipo de violaciones a los derechos humanos como actos de tortura que dejan afectaciones permanentes en la vida de los sobrevivientes de violencia ocular.

Las preguntas que se utilizaron durante las entrevistas fueron desarrolladas mediante diálogos entre los investigadores de CIIVO y los apoyos psicosociales del Centro de Atención Psicosocial (CAPS). Esta colaboración permitió asegurar que las entrevistas fueran psicológicamente seguras para los y las sobrevivientes y, asimismo, dieran cabida a la complejidad y heterogeneidad de sus relatos. Además, a partir de su experticia trabajando con sobrevivientes de violencia estatal, logramos consensuar 5 categorías de análisis útiles para comprender los impactos postraumáticos por los cuales suelen pasar los sobrevivientes de violencia ocular. Estas 5 categorías tienen como eje transversal determinar las afectaciones en el tiempo, es decir, investigar el tipo de relaciones que se mantienen y trastocan antes, durante y después de la violencia ocular.



Tabla 1: Esquematización de las categorías de análisis. Elaboración propia.

Categoría	Función de la investigación.
Impactos Familiares	Está categoría indaga sobre las relaciones familiares de los sobrevivientes, puntualmente en los procesos de revictimización de algunas familias, así como procesos de reparación, apoyos, formas de sanar y las familias como sujetos afectados de esta acción.
Impactos Educativos	Está categoría indaga por los procesos educativos interrumpidos por las violencias oculares o la dificultad que representa continuarlos luego de estas agresiones.
Impactos Identitarios	Esta categoría es una de las más robustas del informe, dado que indaga sobre la identidad y la estética de los sobrevivientes de violencia ocular, es decir, su autopercepción, sus sueños y metas personales (proyecto de vida).
Impactos Relacionales	Aquí se abordan las relaciones socioafectivas de los sobrevivientes de violencia ocular, sus cambios, la percepción de su círculo social cercano y las formas de readaptación a este tipo de relaciones.
Impactos Laborales	Dentro de los impactos laborales se aborda en los sobrevivientes como ha sido su situación laboral, si han continuado trabajando, las barreras que impone la sociedad en ese sentido y su quehacer cotidiano en relación con sus prácticas laborales.
Diagnóstico	Aquí se agrupan los diferentes diagnósticos recibidos por los sobrevivientes de violencia ocular luego de su agresión, esto es fundamental para identificar sistematicidad en este tipo de agresiones.

El tipo de entrevista realizado fue semiestructurado. Preparamos una lista de preguntas guía a raíz del diálogo con CAPS, pero en la práctica las respuestas por parte de los sobrevivientes fueron amplias y en el desarrollo mismo de las entrevistas surgieron más preguntas, las cuales nos permitieron comprender muchos más elementos de la experiencia subjetiva de cada una de las personas entrevistadas. Por medio de estas preguntas emergentes se sumaron muchos más datos a las categorías de análisis expuestas anteriormente.



Posteriormente se procedió a sistematizar toda la información. Para ello contamos con la experiencia de dos egresados en ciencias políticas de la Universidad Nacional, quienes nos guiaron en la elaboración general del documento, pero también en la manera acertada de codificar la información y realizar el análisis cualitativo. En consecuencia, se usó una matriz de análisis propia, realizada a partir del programa Excel, con los criterios que se observan en la tabla 1. Adicionalmente, implementamos el programa de análisis de datos cualitativos Qual Coder gracias a la recomendación de la investigadora Estefany Castillo, a quien conocimos en el proceso de las entrevistas. Está aplicación resultó útil para agrupar y analizar bloques de información de acuerdo con las categorías enunciadas anteriormente.

El proceso de análisis coincide con la estructura misma del documento presentada anteriormente en la introducción. Es preciso tener en cuenta que en la elaboración de este documento participaron muchas voces, dentro de las que se destacan la voz de los y las sobrevivientes de lesiones oculares ocurridas en el marco de la protesta social en distintos países.





ANIMAL
DE
TRABAJO

ANIMAL
DE
TRABAJO

LO
QUE
GANAMOS EN
LAS CALLES,
LO
DEFENDEMOS
EN LAS
CALLES.



03-0292

BLES

Antecedentes históricos y conceptuales

Denominamos violencia ocular el acto sistemático de las fuerzas estatales de mutilar los ojos de las personas que se manifiestan. Tomando como base la evidencia que existe respecto al ejercicio de la fuerza pública en Colombia, sostenemos que esta clase de violencia se ejerce bajo el paradigma del enemigo interno que sugiere que toda persona que se opone al régimen hegemónico de algún país es un enemigo de la patria y representa un riesgo al orden público (Rincón Oñate, 2019; Casas Ramírez, 2019) con el fin de producir un castigo ejemplarizante.

En Colombia, la lógica del enemigo interno resulta de la Doctrina de Seguridad Nacional, que en los años 60 instauró el concepto del enemigo interno a lo largo y ancho de América Latina. Desde entonces, este legado contrainsurgente que se ha interiorizado y sedimentado ideológicamente entre las fuerzas estatales, particularmente aquellas que se especializan en el control de las protestas sociales (Casas Ramírez, 2019; Cruz, 2016). No se trata de un paradigma abstracto. Las balas de goma y latas de gas lacrimógeno que despliegan los cuerpos antidisturbios sobre la ciudadanía que protesta no son menos que la materialización de esta ideología; sobrevivir la violencia ocular no es menos que cargar en el cuerpo los rastros y esquirlas de la lógica del enemigo interno y vivir a diario el castigo ejemplarizante que instruye a otros sobre la inaceptabilidad de la protesta contra el statu quo. En este apartado, desarrollamos y ampliamos estos conceptos para considerar cómo pueden aplicarse a la historia más larga y compleja de la violencia ocular alrededor del mundo.

Para comenzar, es fundamental comprender que este tipo de agresiones no son casualidad: no dependen subjetivamente de un agente de policía que hizo mal uso de su arma, no resulta del actuar de algunas “manzanas podridas” que manchan la institución. Reducir las violaciones graves a los derechos humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza a un asunto de discreción o de sesgos implícitos es dejar de lado un conjunto más amplio de decisiones, paradigmas, y patrones estructurales que demuestran una sistematicidad y aluden a una responsabilidad institucional, no individual (Dymond, 2022; CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS, 2023; INCLO, PHR, & Omega Research Foundation, 2023).

La violencia ocular, además, no es un fenómeno reciente. Los primeros registros de ojos

mutilados a causa del uso de la fuerza por parte del Estado pueden rastrearse desde la segunda mitad del siglo XX. Vale la pena aclarar que estos registros iniciales coinciden con el surgimiento y creciente uso de las armas menos letales para el control de disturbios o de protestas ciudadanas, desarrolladas como una alternativa supuestamente más ‘segura’ y ‘humana’ al uso de la fuerza convencional. En sus inicios, los protocolos para el uso de estas armas eran prácticamente nulos, y generalmente eran los militares quienes causaban violencia ocular usándolas, particularmente en contextos coloniales (Velásquez Valenzuela, Fernández Carter, y Reynhout, 2021 ; Rocher, 2021).

Más específicamente, la violencia ocular como fenómeno de represión estatal surge de la mano con el uso de las armas ‘menos letales’ para enfrentar la protesta social. En 1970 en Irlanda del Norte, se conocieron los casos de Emma Groves y Richard Moore, quienes fueron cegados en ambos ojos por balas de goma disparadas por el ejército británico como forma de represión. Emma Groves recibió un disparo a menos de 8 metros en medio de un acto de resistencia pacífica: mientras soldados británicos hacían allanamientos en las casas vecinas, ella decidió reproducir en su tocadiscos la canción “Four Green Fields”, un himno a la dignidad y soberanía de su país frente a la invasión británica. Richard Moore, un niño de 10 años, también fue cegado por un disparo de balas de goma en Irlanda del Norte. A raíz de esto surgieron movimientos que lucharon por la eliminación de las balas de goma, como el United Campaign Against Plastic Bullets (en castellano, la campaña unida contra las balas de plástico), fundado en 1984. Para ampliar la información sobre el caso de Irlanda del norte, ver por ejemplo el reporte sobre violencia no-letal en territorio norirlandés recopilado por Curtis (1982) y el testimonio de Emma Groves en Calamati (2002).

Otro ejemplo de la violencia ocular en la segunda mitad del siglo XX se da en los levantamientos palestinos contra la ocupación israelí de sus territorios, o la Primera Intifada. Durante estas intifadas surge las primeras pesquisas sobre la sistematicidad de la violencia ocular, pues alrededor de 500 personas fueron heridas de gravedad en sus ojos, gracias al uso de las balas de goma por parte de las fuerzas israelíes en Gaza y Cisjordania. En un estudio médico publicado en la revista oftalmológica Eye, Jaouni y O’Shea (1997) dan cuenta de la gravedad de los sucesos ocurridos en la primera intifada. Varios heridos tuvieron que someterse a extirpaciones oculares (evisceraciones) para evitar complicaciones, mientras muchos otros quedaron en ceguera total. Estos hechos activaron alarmas internacionales y se identificó el



acto de “disparar a los ojos” como una estrategia de las fuerzas militares para causar temor en los manifestantes. Este patrón se repitió nuevamente durante la intervención a Gaza en 2014 y las manifestaciones masivas del 2018 y 2019 denominadas la Gran Marcha del Retomo (Guerrero Riviere y Obermaier, 2026). Tras la intensificación del conflicto que ha sufrido la región dese el 2023, se ha identificado también una preocupante tendencia respecto a la violencia ocular: la alta proporción de pacientes pediátricos que presentan trauma ocular grave (Hawwa et al, 2025).

Durante el apartheid en Sudáfrica también se registraron varios estallamientos oculares por balas de goma en contextos de protesta social, especialmente luego de que se introdujeran las balas de plástico en 1976 (por ejemplo, ver Cohen, 1985). Según informes históricos, la policía y el ejército apuntaron directamente a la cabeza de los manifestantes (cf. Amnistía Internacional & Omega Research Foundation, 2023). A pesar de esto, no se conocieron casos en donde la justicia haya investigado a los policías y militares presuntamente responsables de estas acciones. Solo después de culminado el apartheid se abrieron algunas investigaciones generales sobre violaciones a los derechos humanos durante el apartheid; sin embargo, ninguna de ellas se enfocó en la sistematicidad de la violencia ocular.

Egipto fue otro escenario de violaciones a los derechos humanos durante la primavera árabe. Tras la caída del presidente Hosni Mubarak en 2011, varios manifestantes se reunieron para rechazar la junta militar que tomó el poder. Es allí cuando Mahmoud Sobhi El Shinawi, un miembro de la fuerza pública que hacía parte de la represión a la protesta social, disparadirectamentealosojosdelosmanifestantesconsuescopeta.Susaccionesfuerongrabadasy recibió el apodo de “el francotirador de los ojos”, responsable de docenas de casos de violencia ocular entre manifestantes egipcios, que se suman a los más de 60 heridos oculares registrados por organizaciones de derechos humanos en el marco de estas protestas. Tiempo después, El Shinawi fue condenado a 3 años de prisión, y aunque la sentencia es considerada por muchos como algo leve y simbólico, lo cierto es que marca un precedente (a todas luces poco común) de condenar a un funcionario público por este tipo de agresiones (Tomlin, 2011).

En Sudamérica, casos como el de Chile (2019) y Colombia (2019, 2021) no fueron la excepción a este fenómeno de brutalidad policial. En Chile, durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, se registraron más de 500 mutilaciones oculares. En Colombia solo en la

ciudad de Bogotá se registraron más de 80 agresiones oculares durante el paro nacional del 2021, según el informe Represión en la mira elaborado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos (CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS, 2023). Las memorias compartidas por sobrevivientes chilenos manifiestan algunos de los casos más aberrantes de violaciones a los derechos humanos acontecidos durante estas jornadas de movilización:

“Está el caso de Mario Acuña: no sé si lo conoces. A él lo golpearon entre cinco o seis Carabineros en la calle, de noche, y le terminaron generando daños cerebrales y físicos.Mario actualmenteestápostradoencama”(Langarini,2025).

“Conozco el caso de un compañero periodista que perdió su ojo por el chorro de un guanaco 1. El agua, mezclada con soda cáustica y químicos, le quemó el rostro y le destruyó el ojo. Hay videos y pruebas, pero Pacto2 no quiso ayudarlo por motivos políticos: su perfil mediático “no convenía”. Hoy ese compañero sufre secuelas físicas y psicológicas severas, sin trabajo ni apoyo médico. Muchos casos son similares: los organismos del Estado y las instituciones sólo intervienen cuando hay cámaras o prensa. Alamayoría,simplemente,nos silencian”(Quinteros,2025).

Como evidencian estos relatos, en Chile ocurrieron casos particulares de violaciones a los derechos humanos, como la alteración de las armas de disuasión, especialmente los chorros de las tanquetas lanzadoras de agua. Estas armas generaron afectaciones directas a los manifestantes de manera reiterada, sistemática y premeditada, tal como lo demuestran algunos de los relatos de las personas sobrevivientes de violencia ocular. Además de la prevalencia de casos de heridas graves resultantes de las agresiones con estas tanquetas lanzadoras, resulta especialmente preocupante la práctica deliberada y reiterada de agregar distintos compuestos químicos que presentan peligros importantes para la salud pública, en contravención de las guías y lineamientos para el uso de esta clase de armas. Por ejemplo, un sobreviviente relata que:

1 En Chile, las tanquetas lanzadoras de agua son coloquialmente conocidas como ‘guanacos’.
2 Pacto es el Plan de acompañamiento y cuidado a personas víctimas de trauma ocular, un programa del ministerio de salud de Chile dirigido a las personas con trauma ocular en el contexto del estallido social.



“Además del agua, al guanaco le agregan polvo de bomba lacrimógena y soda cáustica. Cuando rociaba el agua, el aire quedaba contaminado con gas lacrimógeno y ácido. Vi con mis propios ojos a un chico arder en fuego químico. Fue espantoso” (Muñoz, 2025).

Estas violaciones a los derechos humanos son apenas una muestra específica de un país donde la brutalidad policial se hizo acción por parte de la represión ejercida por Carabineros de Chile. A todas luces se violaron los protocolos de uso de la fuerza, alterando las armas menos letales para exacerbar sus efectos, como se mostró anteriormente, pero también haciendo uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes. Además de su carácter indiscriminado, es crucial señalar que el uso de la fuerza durante el estallido social no fue proporcional, pues de ningún modo son comparables el grado de daño físico que pueden producir las armas usadas por la policía con el peligro que suponen las ocasionales armas improvisadas de los manifestantes.

No fue un accidente, no fueron “manzanas podridas” son modelos represivos de exportación que se reproducen sistemáticamente alrededor del mundo.

Generalmente los medios de comunicación atribuyen la violencia ocular a hechos aislados de algunos de los funcionarios de la policía de cada país. De igual forma, los políticos afines al régimen contra el cual se protesta suelen replicar un guion que, por mucho, se limita a lamentar lo sucedido y asegurar que se realizarán “las investigaciones pertinentes” para determinar los pasos a seguir. En primera instancia, tales investigaciones pueden parecer prometedoras; sin embargo, frecuentemente resultan en un discurso que libra de toda culpa a una institución y crea la narrativa de que las violencias oculares corresponden a decisiones personales del funcionario que disparó el arma. Tal procedimiento podría ser convincente si los casos de violencia ocular fuesen pocos, o si no coexistieran con una tendencia general a cegar y criminalizar la protesta social de otras formas (por ejemplo, mediante falsos positivos jurídicos o utilizando discursos de señalamiento que se replican en los principales medios de información). Dicho de otro modo, resulta insuficiente cualquier respuesta a la violencia policial que no cuestione de forma crítica los discursos y prácticas institucionales que terminan por legitimar acciones de tortura y de violencia en contra de la ciudadanía.



Los ejercicios sistemáticos de violencia ocular se enmarcan en dos categorías fundamentales que se materializan en el uso de la fuerza contra la protesta social: el enemigo interno y el castigo ejemplarizante. De forma concreta, la violencia ocular se sustenta en el uso del cuerpo de los manifestantes–señalados como enemigos internos a raíz de sus expresiones de descontento–para aleccionar a la ciudadanía al mostrar las ‘consecuencias’ de protestar. Si bien la violencia ocular se sitúa en el cuerpo del individuo afectado, sus efectos se sienten en el cuerpo social. En el momento del disparo, es posible que la protesta se disperse, pero, de modo más amplio, la agresión por parte de la fuerza pública causa que los ciudadanos dejen de percibir la manifestación pública como una vía legítima y protegida para la participación política. El uso excesivo de la fuerza desincentiva la protesta social, presentándola ya no como el ejercicio de un derecho, sino como un escenario que conlleva un riesgo real de, cuando menos, salir gravemente herido. La lesión ocular es, pues, un elemento de una lección colectiva dirigida a la ciudadanía en la que se utiliza la amenaza del dolor para asegurar su obediencia (Velásquez Valenzuela, Guerrero Riviere, y González, 2024; Osorio-Rozo y Olarte-Cancino, 2023).

Cegar miradas críticas: la violencia ocular y la lógica del enemigo interno

Los relatos de sobrevivientes de violencia ocular alrededor del mundo amplían y sustentan el concepto del enemigo interno. Incluso en regiones en las que este concepto no se ha aplicado a los análisis existentes, es posible entrever las conexiones y los patrones compartidos entre las prácticas de señalamiento y represión hacia grupos o personas que confrontan el statu quo (entendido como el orden estatal) o que no se acoplan a los modelos sociales desiguales que generalmente ya están establecidos en las sociedades.

En Bangladesh, quienes estaban en contra del régimen de Sheik Hasina fueron fuertemente reprimidos. Un sobreviviente explica que, “para comprender la violencia del régimen, hay que recordar la masacre de la BDR de 2009, en la que 57 oficiales del ejército fueron asesinados y sus esposas violadas con apoyo de agencias de inteligencia indias y fuerzas paramilitares” (Pulok, 2025). En este caso las personas que estaban en contra del autoritarismo de la Liga Awami fueron quienes sufren toda esta clase de vejámenes.



En España, por ejemplo, fue común la represión contra las personas de Cataluña. A raíz de sus luchas independentistas y activismo más general por la vivienda digna, a algunos grupos catalanes también se les configura bajo la categoría del enemigo interno, como un peligro para el orden público y la estabilidad nacional. Carles Guillot relata que fue agredido mientras se resistía a un desalojo de una casa ocupada: “A mí me disparan el 17 de julio de 2001, entre las nueve y diez de la mañana, frente a una casa ocupada que la policía estaba desalojando ilegalmente en el barrio de La Salut (Barcelona). Teníamos un sistema de alerta entre casas y centros sociales okupados; cuando supimos del desalojo, nos acercamos a protestar” (Guillot, 2025). Aquí, Guillot fue marcado como enemigo interno, un individuo supuestamente “peligroso”, al oponerse al statu quo cuando intentó frustrar una intervención ilegal de la fuerza pública. Más de veinte años después, su caso resuena con las recientes agresiones a ciudadanos estadounidenses que se organizan para prevenir la detención ilegal de migrantes por parte de los agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE, por sus siglas en inglés-agentes encargados de control migratorio): para el 17 de enero de 2026, ya se contaban al menos dos casos de violencia ocular entre quienes se manifestaban en contra de las redadas de deportación (Planas, 2026).

Esther Quintana, al igual que Guillot, fue agredida en España: “El contexto en el que ocurrió la agresión fue una huelga general en el año 2012. Ese año hubo dos huelgas generales; una en marzo y otra en noviembre. A mí me agredieron en la de noviembre. En esas huelgas se protestaba contra los recortes que el gobierno había hecho en derechos sociales, educación, sanidad y en general en todos los ámbitos que afectan directamente a la población” (Quintana, 2025). Su marcaje como enemigo interno se asemeja más al que sufrieron manifestantes y participantes de estallidos sociales en Chile y el parón nacional en Colombia, y hasta cierto punto también quienes fueron parte de las protestas en Bangladesh contra un régimen político general. En estos casos, se trata de protestas multitudinarias que recogían expresiones de descontento de diversos sectores de la ciudadanía.

En resumen, aquí podemos leer cómo estos casos se dan en el marco de protestas contra desigualdades del estado, la vivienda digna por una parte y el recorte de los derechos mínimos para una vida digna en las poblaciones, por otra. Cuando los grupos o personas deciden hacer algo contra estas injusticias son tratados como “enemigos internos” y el trato hacia ellos se hace de forma deshumanizante, es decir, quitándole su calidad de humanos para así poder

atacarlos, mutilarlos, humillarlos o violentarlos, etc. Para Henry Salazar, experto en violaciones a derechos humanos en Colombia, se ha configurado un “otro negativo” y desde allí se ha legitimado el uso desproporcionado de la fuerza. Salazar, desde una perspectiva performativa del lenguaje, analiza cómo ciertos discursos no solo describen la realidad, sino que la producen, habilitando prácticas de violencia sistemática como la violencia ocular.

El castigo ejemplarizante: la lesión ocular como lección colectiva

El rostro es una de las primeras formas de socialización. Es por medio de las expresiones del rostro que se transmiten emociones y sentimientos; la comunicación no verbal es fundamental para socializar con otras personas y para, como lo pone un sobreviviente, dar la cara a la sociedad. Por eso, cuando se violenta ocularmente a una persona, se afecta no solo el funcionamiento del ojo como órgano visual, sino también sus relaciones interpersonales, sus formas características de comunicación, su confianza, su seguridad y su proyecto de vida en general.

Investigadores de derechos humanos y psicólogo/as del CAPS han acuñado el término castigo ejemplarizante para describir la forma mediante la cual las fuerzas represivas del estado usan la violencia ocular para enviar un mensaje a los procesos de manifestación y protestas sociales. Quitar la visión por uno o ambos ojos no es un daño colateral de las armas menos letales; no es una excepción a la regla ni un “fallo en el servicio”. No se trata de un “accidente” ni de un mal procedimiento de un solo funcionario del estado. Al contrario, es una acción sistemática demostrada que busca dispersar a los demás manifestantes y es consistente con la lógica del enemigo interno. Dicho de otro modo, la gestión biopolítica del enemigo interno se realiza mediante el castigo físico ejemplarizante que termina por tener una función pedagógica al instruir a la ciudadanía sobre los alcances del poder estatal. Cuando un manifestante es testigo de la violencia ocular, automáticamente tiende a sentir temor o miedo de volver a salir, especialmente cuando la lesión resultante es permanente y se ve exacerbada por otras condiciones de abandono estatal y precariedad económica. Esto es una afectación directa a la democracia y los derechos fundamentales de las personas a estar en desacuerdo con un régimen, y es particularmente preocupante en países que enfrentan procesos transicionales y legados de



conflicto armado. Proteger las vías de participación política es una medida fundamental para tramitar desacuerdos políticos, prevenir el surgimiento de nuevos conflictos violentos, y promover procesos de transformación social centrados en los sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos (a propósito, ver, por ejemplo, el Punto 2 del Acuerdo Final firmado entre el gobierno colombiano y representantes de las FARC-EP en 2016).

Como hemos discutido anteriormente, la prevalencia de las lesiones oculares en contextos de protesta de entrada indica una sistematicidad en la mutilación dirigida. A su vez, tal sistematicidad hace parte de una lógica de castigo y aleccionamiento de quienes se consideran enemigos internos por participar en las protestas sociales, o por tener alguna proximidad (geográfica, en algunos casos, ideológica en otros) a ellas. La teórica Jasbir Puar cuestiona el supuesto de que las lesiones causadas por el uso de armas menos letales se reducen a ‘daños colaterales’ negligibles frente al valor de conservar el orden público sin valerse de armas convencionales. Más bien, la mutilación (en general) y la violencia ocular (en particular) hacen parte de una estrategia de debilitamiento de los cuerpos y voluntades de los movimientos sociales (Puar, 2017; Guerrero Riviere, 2025). En este sentido, la agresión ocular se vive como un castigo permanente y prolongado en el tiempo, pues la lesión y sus secuelas arrojan a la víctima a una penumbra constante en relación con preguntas como: ¿por qué salí a manifestarme? ¿Fue mi culpa? ¿Me merecía lo que pasó? Por ejemplo, en su obra de teatro El Retumbar de Mayo a Media Tarde, el sobreviviente de violencia ocular Sergio Romero explora su propia interiorización de estos discursos de vergüenza y señalamiento a través del personaje de un juez. Así pues, tanto para la víctima y su círculo más cercano, un resultado frecuente de esta rumiación es considerarse culpable de lo sucedido, o entender la agresión como un castigo merecido, bien sea por miedo o por una suerte de ‘falsa conciencia’ respecto a la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Por otra parte, la mutilación resulta ejemplarizante porque genera un efecto de zozobra y miedo en la sociedad que se manifiesta. Se persuade a las personas de no incomodar, es decir, de no movilizarse y de no hacer efectivos sus derechos, pues el riesgo de ser agredido se convierte en el factor determinante de salir o no a una manifestación. Las acciones de protesta se diluyen y, con ellas, la fuerza de las exigencias y la presión a los gobiernos nacionales de escuchar las propuestas y reclamos de quienes se manifiestan. El temor de ser lesionado no solo afecta a las personas que se manifiestan regularmente, sino también a sus redes de apoyo. Es común que

los familiares de activistas y defensores de derechos humanos intenten persuadirles de no salir a las manifestaciones, no siempre desde sus propios desacuerdos políticos con las exigencias de la protesta, sino más bien desde una preocupación por el bienestar de su ser querido. “Hijo, no vaya por allá a esas movilizaciones, no ve que le están disparando a la gente”: la cotidianidad de esta advertencia entre personas que han participado en protestas sociales ilustra cómo se fragmenta el ejercicio democrático cuando se infunde el miedo entre la ciudadanía, pues el interés por la participación política se pone en conflicto con el de cuidar de la propia integridad física-y, por lo general, pierde. En resumen, el castigo ejemplarizante produce una fractura en el cuerpo social: las luchas colectivas basadas en la movilización de cuerpos individuales en las calles son cegadas por el temor a que esos mismos cuerpos sean, de la forma más literal, fracturados y brutalizados por las fuerzas policiales.

Las raíces capacitistas del uso de la discapacidad como amenaza

Ahora bien, antes de ahondar en los impactos postraumáticos de la violencia ocular, resulta crucial subrayar que el uso de la mutilación como castigo ejemplarizante a la vez depende de y reproduce perspectivas discriminatorias respecto a la discapacidad (P AIIS, Temblores, y Amnistía Internacional, 2021). Investigaciones recientes y reportajes sobre lesiones oculares alrededor del mundo muestran una tendencia a interpretar la mutilación como un destino ‘peor que la muerte’ debido a las condiciones de exclusión social y precariedad a las que se enfrentan los y las sobrevivientes, las cuales hacen parte de los impactos postraumáticos, pero también de un panorama más amplio de discriminación capacitista (Guerrero Riviere, 2025). Cuando se percibe la vida con discapacidad como una “vida no digna de ser vivida”, un riesgo, una “carga” para la familia, o una condición “despreciable”, la amenaza de la mutilación se hace aún más efectiva y su efecto social como castigo se hace más fuerte. Más aún, las marcas visibles que deja la violencia ocular exacerban las connotaciones negativas de las diferencias corporales. Así, quienes sobreviven la violencia ocular no solo navegan entornos en los que se ignoran o menosprecian sus contribuciones (a causa de una discapacidad visual, por ejemplo), sino que además experimentan un rechazo basado en la interpretación sus cicatrices como la marca de un supuesto enemigo interno.



En este informe, recogemos experiencias y relatos de sobrevivientes de lesiones oculares de países que han firmado la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)³, la cual busca promover y asegurar la inclusión social de las personas con discapacidad y garantizar que esta población goce de unas condiciones de vida digna. Estos mismos Estados, sin embargo, han sido partícipes de la producción masiva de lesiones que pueden resultar en discapacidades (como la violencia ocular) a través del uso de la fuerza de ‘menor letalidad’. Esta disonancia entre la promesa de velar por los derechos de las personas con discapacidad, por un lado, y el uso de la discapacidad como una amenaza o castigo, por otro, plantea un problema fundamental respecto al uso de la fuerza y las responsabilidades del Estado frente a la ciudadanía. Con esto en mente, abordar los impactos postraumáticos de la violencia ocular de manera tentativa los posibles aportes de la justicia en materia de discapacidad para caracterizar y denunciar esta forma de violencia, y formular vías de acompañamiento, apoyo y exigencia de derecho para quienes la han sobrevivido.

3 Colombia, Chile, Perú, Ecuador, España, EE. UU. y Bangladesh han firmado la convención.





Impactos postraumáticos

Definir los impactos postraumáticos de una lesión tan específica y a la vez tan prevalente es una tarea ardua. Para esto nos apoyamos en la investigación de la Psicóloga Daniela Buriticá, quien ha apoyado la defensa de los derechos humanos desde su disciplina, acompañando a sobrevivientes de violencia ocular y a prisioneros políticos.

En su tesis de maestría, Buriticá (2024) diseña y aplica una estrategia de intervención psicológica específica para sobrevivientes violencia ocular. La intervención, con un enfoque principalmente narrativo, aborda distintos aspectos de los impactos postraumáticos que presentan los y las sobrevivientes.

Generalmente, los impactos postraumáticos corresponden a la sintomatología asociada a los trastornos de estrés postraumático (TEPT). Si bien este diagnóstico que puede reunir algunas de las consecuencias de la violencia ocular, no siempre resulta suficiente para dar cuenta de las dimensiones sociales de las afectaciones que deja y los aspectos contextuales del trauma adquirido. Con esto en mente, Buriticá clasifica los impactos psicológicos de la violencia ocular de manera más detallada: “Los impactos psicológicos se agruparon en tres subcategorías que comprenden la naturaleza diferenciada de la sintomatología y los efectos a raíz de la lesión: impactos cognitivos, emocionales y vivenciales” (2024, p. 20). Con base en los diálogos con otros psicólogos/as y tomando en cuenta las experiencias propias de las y los sobrevivientes de violencia ocular que participaron en la investigación y elaboración de este informe, optamos por agrupar los impactos en cuatro tipos, a saber, los impactos identitarios, familiares, relacionales y laborales.

En este apartado profundizamos y caracterizamos los distintos impactos postraumáticos que atañen a los sobrevivientes de violencia ocular a partir de narraciones extraídas de las entrevistas realizadas por CIIVO. Los impactos se organizan según las narraciones de las víctimas y de los psicólogos mencionados anteriormente.



Impactos identitarios

Los impactos identitarios pueden entenderse como el conjunto de transformaciones profundas que experimenta una persona en la forma en la que se percibe a sí misma, se relaciona con su cuerpo, construye su historia personal y se vincula con los demás, a partir de una violencia ocular que irrumpe en su trayectoria de vida. En el caso de la agresión ocular, estos impactos no se limitan a la pérdida o lesión del ojo en sí, sino que atraviesan de manera transversal la autopercepción, lo que afecta su comunicación con el mundo social y transforma su proyecto de vía. El ojo, como órgano central de la percepción, la orientación y el reconocimiento mutuo, cumple un papel simbólico fundamental en la constitución del yo; su daño implica, por tanto, una alteración radical en la relación entre el cuerpo, la conciencia y el mundo.

La agresión ocular produce una fractura en la continuidad biográfica. Antes del ataque, la identidad suele estar anclada a la autonomía corporal, la confianza en los propios sentidos, la proyección de futuro y la pertenencia a determinados roles sociales, laborales, afectivos o deportivos. Después de la agresión, estas coordenadas se ven profundamente alteradas. La persona se enfrenta a un cuerpo que ya no responde de la misma manera, a una imagen corporal extrañada, a limitaciones funcionales persistentes y a una mirada social que, en muchos casos, reduce su identidad a la condición de víctima. Este proceso desencadena duelos múltiples: por el cuerpo perdido o dañado, por la identidad anterior, por los proyectos truncados y por las relaciones que no logran sostener el cambio.

Hablar de impactos identitarios implica, entonces, reconocer que el trauma ocular no solo hiere el cuerpo, sino que reorganiza el sentido del yo. Se trata de una experiencia que obliga a reconstruir la identidad en condiciones de vulnerabilidad, en medio de emociones intensas como la rabia, la tristeza, la vergüenza, el miedo y la frustración, pero también de procesos de resignificación, resistencia y, a su vez, de politización y democratización del dolor (cf. Tamayo Gómez, 2022). Este informe se inscribe en esa comprensión amplia del daño, dando centralidad a las voces de las personas sobrevivientes y a sus relatos como fuentes legítimas de conocimiento sobre los efectos profundos de la violencia estatal en la vida subjetiva.

La agresión ocular no constituye únicamente un evento traumático localizado en el cuerpo. Se trata de una experiencia de ruptura que atraviesa la existencia completa de quien la vive y que



transforma de manera profunday muchas veces irreversible la identidad personal, social y simbólica. Es por esto que el daño al ojo como órgano altera no solo la percepción visual, sino también la forma en que el sujeto se reconoce, se representa y es reconocido por los otros. Tras la agresión, la persona que se reconocía anteriormente ya no existe del mismo modo. Ahora emerge un proceso complejo de duelo identitario, marcado por pérdidas, resignificaciones y tensiones constantes entre lo que se fue y lo que se es ahora. Esto causa confusión, problemas de autorreconocimiento, baja autoestima al verse al espejo, y frustración por no reconocer su rostro.

Antes del ataque, muchas de las personas sobrevivientes describen una identidad vinculada a la autonomía, la seguridad corporal y la proyección de futuro. La agresión irrumpe violentamente en ese continuo vital. Como relata Juan Guerrero, “antes del ataque jugaba fútbol de alto rendimiento, entrenaba y competía con regularidad; después del daño ocular solo puedo hacerlo de forma amateur y moderada. La pérdida de profundidad y percepción espacial afecta el desempeño”. En este testimonio, la lesión no solo limita una actividad física: desarticula una identidad construida alrededor del cuerpo competente, del rendimiento y del reconocimiento social asociado al deporte.

Esta ruptura identitaria se expresa con especial fuerza en la relación con el propio cuerpo. Carles, sobreviviente de una agresión ocurrida décadas atrás, lo expresa con crudeza: “me cuesta mirarme al espejo; veinticuatro años después de la agresión sigo sin reconocer el rostro que me devuelve el espejo”. El espejo en el cual se refleja cotidianamente se transforma en un dispositivo de confrontación diaria con la pérdida y la alteridad corporal. La identidad corporal se fragmenta: el rostro ya no coincide con la imagen interna que el sujeto tiene de sí mismo.

Este quiebre se extiende a la vida cotidiana y a las acciones más simples. Actividades que se hacían cotidianamente como servirse un vaso de agua, caminar entre multitudes, subir escaleras requieren ahora una concentración constante y toman más tiempo. Pablo Montiel lo describe así: “con el tiempo entendí que debía concentrarme conscientemente para hacer cosas que antes hacía por reflejo”. Esta necesidad de hiperconciencia corporal transforma la relación con el entorno y con uno mismo.

La violencia ocular también impacta de manera profunda en la dimensión emocional y en la autoimagen. Johan Suárez relata: “antes de la agresión era una persona optimista y sonriente...

después del ataque perdí esa inocencia, la sensación de estar entero. Me siento roto”. La idea de “estar entero” es fundamental pues hace sentir a la persona con una sensación de “falta de” y esto de una forma u otra lo supedita en la sociedad, genera inseguridades. La autoconfianza y seguridad en la identidad previa se ve reemplazada por una identidad marcada por la fragilidad y la conciencia permanente de la pérdida.

Esta transformación interna suele ir acompañada de cambios en el carácter y en las formas de relacionamiento. Alejandro Hernández señala que, tras la agresión, su personalidad “se volvió más cerrada y reservada”. La identidad social se reconfigura; el sujeto deja de ocupar ciertos espacios, desarrolla formas de invisibilización para no ser leído únicamente desde la herida. Alejandro lo expresa con claridad cuando afirma: “no quiero que la gente me vea como una víctima, quiero que me reconozcan como Alejandro Hernández, comunicador social”. Aquí emerge una tensión central del proceso identitario postraumático: la de reconocerse como víctimas o sobrevivientes. Por un lado, nombrarse como víctima resalta la injusticia del daño sufrido, pero también se asocia a una posición de indefensión, pasividad, o vulnerabilidad. Por otro, la palabra ‘sobreviviente’ alude a la práctica activa y constante de resiliencia y apoyo mutuo para sobrellevar la agresión y sus consecuencias (ver, por ejemplo, Guerrero Rubiano et al, 2024). Para efectos de este informe decidimos insistir en la categoría de sobrevivientes, teniendo en cuenta que la disputa por lo simbólico que plantean algunos sobrevivientes, quienes luchan por ser reconocidos más allá de lo sucedido, más bien por sus virtudes y cualidades.

Las relaciones interpersonales también se ven profundamente alteradas por el trastocamiento de la identidad que produce la agresión ocular. Cristian Rodríguez explica que “todo se reconfigura: la confianza, el afecto, la intimidad y hasta el modo en que uno se mira a sí mismo”. El trauma ocular no solo afecta al individuo, sino que reordena el tejido afectivo que lo rodea. Familias, parejas y amistades (como veremos más adelante) deben adaptarse a una nueva versión del sujeto, una versión que a menudo se caracteriza por la irritabilidad, la depresión o el retraimiento (síntomas consistentes con los TEPT). Johan Suárez señala que ciertas personas “no soportaron el cambio y se alejaron”, profundizando el sentimiento de pérdida y aislamiento.

El impacto identitario se entrelaza con procesos de salud mental complejos. Atoq relata el desarrollo de depresión, insomnio y crisis de ansiedad, así como la aparición de pensamientos autodestructivos y pesadillas recurrentes con el momento del disparo. Estas manifestaciones



no son síntomas aislados, sino expresiones de una identidad herida que intenta procesar una experiencia de violencia extrema. El sujeto se percibe como “otra persona”, atrapada entre la rabia, la tristeza y la frustración, lo que da cuenta de una ruptura profunda en la narrativa biográfica.

Sin embargo, los procesos identitarios posteriores a la agresión ocular no son homogéneos ni lineales. En algunos casos, la experiencia traumática provocó resignificaciones vitales profundas, como abandonar el consumo de drogas, adoptar nuevos valores, o reencontrarse con el trabajo, la paternidad y el estudio. En estos relatos no desaparece el dolor, pero emerge una identidad reconfigurada que incorpora la herida como parte de una nueva narrativa de sentido. Otros sobrevivientes canalizan la experiencia hacia el activismo, la denuncia o la acción política. Soren Stevenson señala que, aunque en los espacios sociales a veces se siente “otro”, la agresión también le abrió la posibilidad de hablar públicamente y ser escuchado, incluso transformando su rumbo en el escenario político—notablemente, en enero de 2026, Stevenson asumió el cargo de concejal de la ciudad de Minneapolis.

Finalmente, la dimensión identitaria se expresa también en la relación cotidiana con la prótesis, la higiene ocular y el cuidado permanente del cuerpo lesionado. Giovanni García describe cómo la rutina diaria de limpieza y mantenimiento del conformador ocular genera sensaciones de revictimización, al obligarlo a “mirarse al espejo constantemente”. El cuerpo lesionado exige atención continua, recordando una y otra vez que el daño fue impuesto, que no es natural ni elegido. Esta repetición cotidiana consolida una identidad atravesada por la memoria y la revictimización constante de la violencia ocular.

Para concluir, la violencia ocular produce una fractura identitaria profunda que atraviesa el cuerpo (y sus nuevas capacidades y debilidades), la emocionalidad, las relaciones sociales y los proyectos de vida. La identidad posterior al trauma no es simplemente una versión distinta, con un ojo menos o una fractura en el rostro, sino una configuración distinta del ser y su relación con el mundo, la cual está marcada por pérdidas, resistencias y por procesos de resignificación y lucha. Comprender estos impactos identitarios resulta fundamental para el diseño de políticas de reparación integral, para los procesos terapéuticos y para la construcción de memoria colectiva, pues sólo reconociendo la profundidad de esta fractura es posible avanzar hacia formas reales de justicia y no repetición, y hacia coaliciones políticas por la inclusión social.



Impactos familiares

La agresión ocular no ocurre en soledad, ni sus consecuencias son únicamente para los mismos sobrevivientes. Aunque el impacto inicial se inscribe en el cuerpo de una persona, sus efectos se expanden de inmediato hacia el círculo más íntimo: la familia, la pareja o los amigos más cercanos. En ese primer anillo de vínculos, cuidado y pertenencia, se juega buena parte de la posibilidad de sostener la vida cotidiana después del trauma. Desafortunadamente, el no lograr ese cuidado en esos primeros círculos ha conllevado a comportamientos autolesivos y hasta al suicidio de varias y varios compañeros que han sufrido las agresiones oculares. Como discutimos anteriormente, un efecto de la mutilación como castigo ejemplarizante es activar un campo de tensiones donde aparecen culpas, silencios, reproches, fracturas políticas y afectivas en esos primeros círculos afectivos. Al escuchar las entrevistas, se vuelve evidente que el “después” no se define únicamente por la lesión, sino por la forma en que el entorno responde: hay trayectorias donde la familia se fortalece o incluso emerge por primera vez como una fuente de apoyo, y otras donde la familia se transforma en un segundo escenario de violencia por revictimización, esta vez simbólica, moral o emocional. Entre ambos cortes (acompañamiento y abandono) hay múltiples discursos políticos que los familiares adoptan y hacen que piensen de una u otra forma.

En el primer escenario, cuando la familia acompaña, aparece un tono que se repite: el trauma no es solo del sobreviviente, es un trauma compartido. Carles lo menciona de la siguiente manera: “para ellos el suceso fue traumático, pero en todo momento me han apoyado. En ese sentido, no he notado ninguna diferencia”. La frase contiene un detalle decisivo: el apoyo no elimina el dolor, pero amortigua el quiebre que suele suceder en lo relacional. En esta ruta, la familia no se pregunta qué hizo la persona para merecerlo, sino qué necesita para sostenerse. Y, además, hay un elemento que en varias entrevistas opera como forma de apoyo: la comprensión política del contexto. Carles explica que su familia “estaba bastante politizada y sabían que yo también lo estaba”, lo cual impidió que el hecho fuera leído como imprudencia individual. Esa lectura cambia el lugar del sobreviviente: no es culpable, es sobreviviente de la represión estatal.

Algo similar se siente en el relato de Álvaro López, donde el acompañamiento familiar aparece como un sostén emocional continuo, pero atravesado por el dolor de ver sufrir a quienes uno ama. Álvaro reconoce que el impacto “fue incluso más duro para ellos” y confiesa que, aunque le digan que lo ven igual, “noto la tristeza en sus ojos, especialmente en los de mi mamá”. En esta



forma de acompañamiento hay una paradoja: la familia se vuelve refugio, pero al mismo tiempo se convierte en un espejo afectivo que devuelve la dimensión del daño, es decir, aunque no sea su intención, ver el sufrimiento de los familiares por el hecho acontecido hace recordar la gravedad de la violencia ocurrida. Sin embargo, Álvaro afirma que su familia “ha sido mi mayor respaldo emocional” y que desde el inicio tuvo claro que debía salir adelante “por ellos”. Aquí el vínculo no solo sostiene: también impulsa una revolución por medio de la supervivencia. No se trata de “superar” para olvidar, sino de seguir para no quebrar la vida familiar entera. Hoy Álvaro logró culminar sus estudios y seguir adelante, siempre motivado ante todo por el bienestar y la unidad de la familia.

En Daniel Jaimes aparece con fuerza esa idea de “tragedia familiar” y de reorganización afectiva. Él describe una familia pequeña y unida, y recuerda que el ataque se vivió “similar a la muerte de un ser querido”. Esta comparación no es menor pues sugiere que el trauma ocular instala un duelo profundo, como si algo hubiera muerto. Pero Daniel añade un giro: “sin embargo, Wesa experiencia nos fortaleció”. Y lo explica con una frase que, en sí misma, parece condensar el cambio de jerarquías internas: “recibí de ellos un amor y un apoyo que antes no valoraba lo suficiente”. Es decir, el trauma no solo rompe; también redistribuye lo que importa, desplaza prioridades, revela lealtades. En este escenario, el sobreviviente deja de ser únicamente quien recibe cuidados, sino que también se vuelve alguien reconocido por su fortaleza y, por tanto, respetado como una fuente de conocimiento y experiencia.

En el caso de Johan Suárez se observa otro matiz: el apoyo familiar aparece ligado a la pérdida de independencia. Johan cuenta que antes era “independiente, tanto económica como emocionalmente”, pero que después esa independencia cambió y tuvo que depender de sus padres “incluso en lo económico”, al menos en lo referente a la recuperación de la violencia ocular. Lo interesante de su relato es que no romantiza esa dependencia: la reconoce como parte de la herida. Sin embargo, también subraya que “paradójicamente, la tragedia también nos acercó más”. Esta palabra paradójicamente da cuenta de cómo el trauma puede acercar, pero a un costo: la vida se reorganiza, y el lugar del adulto autónomo se vuelve frágil. Aun así, Johan describe que, cuando quiso aislarse “por el dolor y el trauma psicológico”, su familia insistió en acompañarlo, y gracias a eso entendió “que no estaba solo”.

En otros relatos del mismo corte, el apoyo adopta formas más concretas y materializadas.



Muhaimin cuenta que el lazo familiar “se ha vuelto aún más fuerte” y que su familia ha sido “mi mayor fuente de apoyo emocional, físico y económico durante todo el proceso de recuperación”. No es una frase abstracta: describe a su padre acompañándolo “siempre a las citas médicas” y a su hermana mayor asesorándolo en lo médico. Allí se ve cómo el apoyo familiar se traduce en presencia, gestión y cuidado sostenido. La familia cobra importancia en tanto provee una suerte de infraestructura cotidiana para sobrevivir el sistema médico, los trámites, la rehabilitación, el miedo.

Incluso cuando el apoyo no es perfecto, hay relatos que muestran una evolución hacia el acompañamiento. Pablo Montiel recuerda que al principio su familia “me culpó un poco por haber estado ahí”, con comentarios sobre “por qué no me cuidé más”. Pero hace una distinción importante: “no fue un reproche gigante”, sino un modo torpe de procesar el susto y la preocupación. Con el tiempo, dice, su familia “dejó de insistir en que fue mi culpa. Ya no hay reproche, solo apoyo”. Este movimiento revela otra dinámica: la familia también transita su propio aprendizaje, y a veces tarda en comprender que la agresión no es consecuencia moral de la protesta, sino un daño injusto. En estos casos, aunque al inicio parece un retroceso el apoyo familiar, luego se vuelve un logro y un avance hacia la comprensión de la legitimidad de protestar es una ganancia social y de la democracia.

Giovanny García, por su parte, habla de un apoyo constante que se vuelve “más evidente” después del ataque. Dice que la relación con su familia era buena antes y “después también lo siguió siendo”, pero que en el proceso “ese acompañamiento se volvió mucho más notorio”. Esta idea se repite: el trauma no inventa necesariamente el vínculo, pero lo intensifica, lo hace visible, lo vuelve indispensable. Y es allí donde el primer escenario muestra su aporte central: el apoyo familiar no borra el trauma, pero evita que la persona quede sola con la ruptura; sostiene el relato de que la vida todavía es posible. Generalmente cualquier situación que hace a una persona estar cerca de la muerte, permite que luego de superar esa situación, existe una valoración mayor y plena a la vida.

Queda claro que el apoyo familiar, cuando existe, opera como un factor de reparación cotidiana. No borra las secuelas, pero reduce la desintegración subjetiva. Hace posible que la persona no quede encerrada en la vergüenza o el aislamiento. Permite que el sobreviviente no sea leído únicamente como víctima, sino como alguien que lucha, se adapta y sigue. Álvaro López lo dice de modo transparente cuando explica que no quería que su familia lo viera “solo como una



víctima, sino como alguien que lucha”. Esa frase se vuelve puente con Daniel Jaimes, cuando afirma que su familia hoy admira su fortaleza. Y se conecta con Johan, cuando reconoce que quiso aislarse, pero su familia insistió en acompañarlo. En estas conexiones, el apoyo familiar aparece como una forma concreta de dignidad: acompañar es decir “tu vida sigue teniendo valor”, incluso si el mundo exterior no lo reconoce. Contrario a esto, existe un segundo corte en las entrevistas donde el trauma se duplica: al daño ocular se suma el daño familiar. En este escenario, la familia no acompaña, o acompaña de forma condicionada, culpabilizando, revictimizando, castigando o imponiendo silencios. La agresión se convierte entonces no solo en lesión, sino también en causante de tensión en la familia. En estas narrativas, la familia no es una red de cuidado, sino un espacio no seguro, en esta sección no abordaremos los nombres de los entrevistados, en su lugar colocaremos números.

Con claridad dolorosa, un sobreviviente lamenta: “mi familia no me apoyó. En lugar de acompañarme o preguntar cómo estaba, me criticaron por haber ido a la marcha. Me excluyeron de reuniones familiares y me trataron como si fuera culpable de mi lesión”. Aquí la agresión ocular es explícitamente reinterpretada como castigo. La familia, en vez de ver el hecho como violencia, lo lee como una consecuencia merecida, lo cual revictimiza y hace dudar al sobreviviente, haciéndole creer que es su culpa. Esto produce un quiebre relacional profundo: la persona pierde no solo un órgano, sino un lugar simbólico de pertenencia. El sobreviviente remata su historia con una frase que funciona como tesis: “familia no es lo mismo que familiares”. Al decirlo, redefine su identidad afectiva y reconstruye el concepto de familia desde el cuidado real, no desde el lazo biológico: “mi verdadera familia son mi mujer y mi hijo, quienes me acompañaron en todo momento”. Ese gesto es también una forma de reparación subjetiva, aunque no muy común: si los “familiares” abandonan, el sujeto crea otra familia posible y hace de estos nuevos vínculos su forma de resistir.

Uno de los relatos describe otro tipo de distancia, más prolongada y estructural: “con mi familia la relación siempre ha sido distante... después de la agresión decidí alejarme aún más”. En su caso, el conflicto se cruza con la militancia política: muchos “no aceptaban las causas en las que militó”. El entrevistado llega a un punto extremo: “hace más de un año que no veo a mi madre”. Sin embargo, su relato no termina en el aislamiento total, sino en la creación de otra red: “he encontrado apoyo en los compañeros y compañeras... existe una red de solidaridad... un apañe colectivo”. Este desplazamiento es clave para comprender el segundo escenario: cuando la familia falla, emergen



redes sustitutas que cumplen funciones de cuidado y sentido. En términos identitarios, el sujeto se arraiga en comunidades de experiencia.

Una de las escenas más duras de este corte viene del testimonio de una sobreviviente que experimentó la falta de apoyo por parte de su familia en el momento mismo de contar lo ocurrido. Ella recuerda que “el proceso de notificar a mi familia fue durísimo” y que su padre, además de estar atravesando un accidente grave, reaccionó desde una diferencia política que se convierte en acusación: “¿Ve? Por meterse donde no debía”. Esa frase concentra toda una moralización del daño: la protesta como imprudencia, la víctima como culpable. La entrevistada cuenta que años después pudo responder: “no fue mi culpa. Estaba ejerciendo mi derecho a la protesta”. En una escena de resignificación relacional. Al inicio, la agresión se vive como vergüenza familiar; con el tiempo, la sobreviviente se reconoce como sobreviviente de violencia estatal y reclama su lugar. Pero el costo es alto: en su familia, con exmilitares y expolicías, el tema se vuelve “un secreto silencioso” durante más de diez años. “Nadie habló del asunto. Yo tampoco. Era como un tema prohibido, vergonzante”. Aquí el daño familiar no es solo rechazo, es silencio impuesto.

En este segundo corte aparece también una forma más ambigua de la falta de apoyo: no necesariamente hay insulto directo, pero sí una incapacidad de sostener la presencia del sobreviviente. Uno de los sobrevivientes relata que antes su familia era “muy unida”, con fiestas y encuentros, pero que después del ataque “ya no podían mirarme sin llorar; se les escurren las lágrimas”. Y entonces toma una decisión que revela el peso del dolor: “por eso decidí dejar de visitarlos. Me alejé”. Aquí vemos otra de las formas de afrontamiento del impacto psicosocial, el aislamiento fue una de las opciones que tomaron algunos de los sobrevivientes de violencia ocular, alejarse como forma de no lastimar el vínculo familiar y relacional.

Entre ambos escenarios, hay relatos que se ubican en un terreno intermedio, donde el apoyo existe, pero viene acompañado de tensión permanente: “en el entorno familiar hubo un acompañamiento más constante, una tensión permanente frente a mi estado”. Esta tensión implica vigilancia, preocupación, a veces sobreprotección; implica que la vida familiar queda atravesada por el trauma. En estos casos el sobreviviente se siente invadido por la tensión constante de que lo traten con demasiada fragilidad. El apoyo se vuelve también un recordatorio constante de la pérdida.

Cuando se analizan las respuestas de ambos tipos de familia, en lo relacional se encuentra que



existen familias que desde el primer momento apoyan a los sobrevivientes porqué entienden quién es el verdadero responsable, sin embargo también existen las familias (usualmente más conservadoras políticamente) que insisten en culpar al sobreviviente del suceso ocurrido, en este último caso lo fundamental es entender que este tipo de familias actúa en relación con los discursos absorbidos por los medios de comunicación hegemónicos y funcionales al status quo. En el primer escenario, la identidad del sobreviviente se sostiene en la certeza de pertenencia: “no estoy solo”. En el segundo, la identidad se reconstruye desde la intemperie, y muchas veces desde una ruptura dolorosa: “familia no es lo mismo que familiares”. En ambos casos, el trauma no se reduce a lo médico. Como mencionamos al inicio, reducirlo a TEPT, es únicamente enfocarlo todo desde los determinismos biológicos, mientras que aquí ahondamos en las características posteriores a la agresión desde un enfoque en las relaciones interpersonales, principalmente la familia.

En contraste, la falta de apoyo produce un daño que suele ser silencioso pero profundo. La culpabilización familiar no solo hiere emocionalmente: desarma la narrativa de legitimidad del sobreviviente. Si el hogar le dice “te lo buscaste”, el sujeto queda expuesto a internalizar la culpa o a romper para siempre con su familia. Así, estos relatos muestran cómo los sobrevivientes soportan las cargas entrelazadas de la vergüenza, la culpa y la exclusión a través de momentos decisivos y procesos determinantes: romper con una década de silencio vergonzoso al comprender que lo que ocurrió fue violencia policial; ser excluido de las reuniones, tratado como culpable y luego redefinir la familia desde un lugar de cuidado real; ser rechazado por sus propias redes de militancia y encontrar apoyo en nuevas e inesperadas redes de solidaridad.

Al final, las entrevistas dejan una conclusión fuerte: tras una agresión ocular, el vínculo familiar puede ser medicina o puede ser herida. Puede funcionar como el lugar donde el dolor se comparte y se sostiene, o como el lugar donde el trauma se niega, se moraliza y se silencia. Ambos escenarios configuran trayectorias distintas de reconstrucción subjetiva. En el primer caso, la familia permite elaborar el duelo sin perder la pertenencia; en el segundo, el sobreviviente debe elaborar el duelo perdiendo también una parte del hogar, y reconstruyendo su identidad desde otros vínculos, otras comunidades o una nueva definición de familia.

Por eso, comprender los impactos familiares del trauma ocular es una tarea central para cualquier enfoque de reparación integral. No basta con atender el ojo herido: hay que mirar el tejido

relacional que se rompe o se reacomoda después del ataque. Allí se define, en gran medida, si la persona podrá narrarse como sujeto de derechos o si quedará atrapada en la culpa y el silencio. Y allí también se define la memoria: porque cuando una familia acompaña, la historia puede contarse; pero cuando una familia calla, la violencia se prolonga en lo no dicho. En cualquiera de los dos cortes, las voces entrevistadas insisten en lo mismo: lo que está en juego no es solo la vista, sino la vida entera, y la manera en que esa vida se sostiene o se desmorona dentro del círculo más cercano.

Impactos relacionales

La agresión ocular no solo irrumpe en el cuerpo de quien la sufre; irrumpe también en el entramado de relaciones que sostienen la vida cotidiana. Después del disparo, la herida se vuelve visible, y con ella se transforma la manera en que los otros miran, se acercan, se alejan o juzgan. Las entrevistas revelan que, tras la agresión, la experiencia relacional se redefine profundamente: cambian las dinámicas con amistades, parejas, colegas de trabajo, desconocidos en la calle y comunidades políticas. La persona sobreviviente ya no habita los vínculos desde la misma espontaneidad; el cuerpo lesionado se convierte en un mediador permanente de la interacción social.

En muchos relatos, el primer cambio aparece en la relación con el propio movimiento y la presencia en espacios compartidos. Rodrigo Langarini describe cómo, después del disparo, perdió no solo la visión, sino también la confianza corporal que sostenía su vida social. Antes jugaba fútbol todas las semanas; ahora casi no juega. Relata que, cuando lo hace, pisa o golpea a otras personas sin querer, y eso genera vergüenza, incomodidad y retraimiento. La escena se repite en la calle: “me ha pasado que golpeo sin querer a personas mayores y digo de inmediato: ‘Disculpa, soy ciego de mi ojo derecho’”. La relación con el otro se vuelve una constante negociación entre explicar o callar. Si se explica, aparece la compasión; si no, el malentendido. En ambos casos, la espontaneidad se pierde. La vida relacional se ve limitada por la auto-vigilancia e hiperconciencia.

Esta pérdida de espontaneidad atraviesa muchos testimonios. Álvaro López recuerda que antes de la agresión era “mucho más sociable”, que le gustaba salir y conocer gente nueva. Después, empezó a encerrarse, a limitarse a su círculo cercano. Define ese encierro como una forma de protección, pero también como una forma de aislamiento. El mundo exterior se vuelve un



espacio potencialmente hostil: desconocidos que preguntan, miradas que juzgan, comentarios que hieren. Así, la vida social se achica, no por falta de deseo de vínculo, sino por agotamiento emocional frente a la mirada ajena.

La mirada de los otros aparece como uno de los ejes más reiterados. Cristian Rodríguez lo expresa con claridad cuando afirma que la lesión ocular, al ser visible y alterar el rostro, provoca “una reacción inmediata en la gente”. Esa reacción suele ser una mezcla de incomodidad, lástima o curiosidad, y se vuelve cotidiana. No siempre se traduce en palabras; muchas veces es un silencio, una mirada sostenida, un gesto corporal que señala diferencia. Esa presencia constante de la mirada ajena modifica la forma de estar en el mundo: la persona deja de ser simplemente alguien más y pasa a ser “el herido”, “el agredido”, “el del parche” o “el del ojo”.

Carles profundiza esta experiencia al narrar su decisión de dejar el parche. Durante años lo usó porque era “más aceptable estéticamente”, incluso porque tenía cierta “mística”. Sin embargo, cuando decide dejarlo, nota con mayor fuerza cómo cambia el trato. Al ir sin parche, los ojos se vuelven demasiado visibles, imposibles de ignorar. Carles cuenta que, aunque intenta normalizarlo, percibe claramente cómo la gente del “mundo exterior” se relaciona de otra manera con él. Al mismo tiempo, su decisión de no ocultar la lesión se convierte en una forma de posicionamiento político: visibilizar las consecuencias de la violencia policial. Así, la relación con los otros se vuelve un espacio de disputa simbólica entre ocultar para encajar o mostrar para denunciar.

Estas transformaciones relacionales no se limitan al espacio público; se extienden al ámbito laboral. Daniel Jaimes relata que, después de la agresión, tuvo que reaprenderlo todo: volver a tatuar, adaptarse a su nueva imagen y enfrentar una sociedad que lo veía como “una persona agredida por la policía”. Su caso se volvió visible, y con esa visibilidad llegó una curiosidad que describe como morbosa. Muchas personas querían saber cómo había sido el disparo, pero pocas preguntaban realmente cómo estaba él. Daniel distingue dos tipos de reacción: quienes se acercan desde la admiración o el apoyo, y quienes lo señalan diciendo que “eso le pasó por andar peleando con la policía”. Con el tiempo, aprende a identificar esas miradas y a no desgastarse en explicaciones. La relación social se vuelve selectiva: no todos merecen acceso a la historia personal.



Alejandro Hernández relata una experiencia similar. Después de la agresión, sus relaciones socioafectivas cambiaron completamente. Dice que le cuesta establecer vínculos nuevos porque no se siente bien con su cuerpo. Esa inseguridad atraviesa tanto las relaciones personales como las laborales. En las entrevistas de trabajo, los exámenes médicos se convierten en una barrera silenciosa: cuando descubren que no tiene visión por un ojo, simplemente no lo contratan. La relación laboral deja de basarse en capacidades o formación y pasa a definirse por la condición física. Esto erosiona la confianza y profundiza el retraimiento social.

En muchos testimonios aparece también la ruptura con amistades previas. Narem lo expresa de manera directa: “los amigos que tenía antes ya casi no están”. Muy pocos volvieron a hablar con él; ahora tiene nuevos amigos, nueva gente en su vida. La agresión funciona como un filtro relacional: algunas personas no saben cómo acompañar, otras se alejan por incomodidad o miedo, y otras simplemente desaparecen. Gustavo Quinteros lo vive de forma aún más radical: después de lo ocurrido, nadie fue a verlo al hospital, ningún amigo, ningún conocido. Solo su pareja y su hijo estuvieron a su lado. Esa experiencia le permitió distinguir entre amistades reales y vínculos superficiales. Hoy prefiere la soledad a las “falsas amistades”. La red social se reduce, pero se vuelve más honesta.

La estigmatización política aparece como un factor clave en la transformación de las relaciones. Pablo Montiel describe cómo, con el paso del tiempo, la percepción social sobre las víctimas del estallido social en Chile cambió radicalmente. Al principio eran vistos como héroes; luego, como delincuentes. En el transporte público escucha conversaciones donde los llaman “delincuentes” o dicen que viven del Estado. Esto lo lleva, en muchos contextos laborales, a evitar hablar del tema. La agresión no solo deja una marca física, sino una marca política que condiciona las relaciones sociales. Pablo explica que algunos compañeros se deprimieron o cayeron en adicciones, mientras otros intentan seguir explicando, dialogando, rompiendo prejuicios, aunque sea desgastante. Relacionarse se vuelve un acto político.

Sin embargo, no todas las transformaciones relacionales son de pérdida. En varios relatos aparece también la construcción de nuevos vínculos más conscientes y solidarios. Giovanni García señala que no siente haber sufrido discriminación directa, pero sí percibe miradas de curiosidad o tristeza. Al mismo tiempo, afirma que ha conocido a muchas más personas y que, a nivel afectivo, ha encontrado apoyos significativos. Habla de personas que ofrecen “su brazo, su hombro”, y



de cómo eso genera motivación y ganas de salir adelante. En su experiencia, las relaciones no desaparecen: se transforman y, en algunos casos, se fortalecen.

Las parejas ocupan un lugar especial en estas narrativas. Pablo Montiel destaca la relación con su compañera, quien estaba con él cuando le dispararon y lo acompañó en todas las operaciones y tratamientos. Aunque llevaban poco tiempo juntos, la relación se fortaleció profundamente. Pablo reconoce que ha visto a otros compañeros cuyas relaciones se rompieron por la presión o el trauma, y afirma que no todas las parejas logran entender esta lucha. En este sentido, la agresión ocular actúa como una prueba extrema del vínculo afectivo: algunas relaciones se quiebran, otras se consolidan.

Soren Stevenson aporta otra dimensión relacional: la cautela con la que ahora lo tratan. Señala que algunas personas lo tratan con más respeto o admiración, pero también con cuidado excesivo. En conversaciones sobre policía o violencia, nota que la gente evita profundizar, temiendo que se enoje o se afecte. A veces se siente “otro” en los espacios sociales, como si no supieran cómo interactuar con él. Al mismo tiempo, reconoce que su historia le abrió puertas para hablar públicamente y ser escuchado. Su identidad relacional se reconfigura entre la distancia incómoda y la visibilidad política.

Finalmente, los testimonios muestran que las relaciones posteriores a una agresión ocular se reorganizan alrededor de nuevas reglas implícitas: cuándo explicar, a quién contarle, cuándo callar, qué espacios evitar y cuáles habitar. La persona sobreviviente aprende a leer miradas, a anticipar reacciones, a seleccionar vínculos. En muchos casos, esta reconfiguración implica pérdidas dolorosas, pero también la posibilidad de construir relaciones más conscientes, basadas en el respeto y la empatía.

En conjunto, las entrevistas evidencian que la agresión ocular produce una transformación profunda en la vida relacional. No se trata solo de cambios individuales, sino de una reconfiguración del lugar social de la persona: cómo es vista, cómo es nombrada y cómo es tratada. La herida se vuelve un signo que circula en los vínculos, generando compasión, rechazo, admiración o estigmatización. Comprender estos impactos relacionales es fundamental para dimensionar el daño en su totalidad, pues la violencia no termina en el cuerpo lesionado: se extiende en la forma en que el mundo responde, se acerca o se aleja. Y es en ese campo relacional donde, día a día, las



personas sobrevivientes deben reconstruir su lugar, su dignidad y su derecho a ser reconocidas más allá de la herida.

Impactos laborales

La violencia ocular no solo deja afectaciones en el cuerpo y la identidad; también interrumpe en la relación con el trabajo, el cual debe ser entendido no solo como una fuente de ingresos sino como un espacio de dignificación y de socialización con otros. Para muchas de las personas entrevistadas el mundo laboral se convirtió en uno de los escenarios más hostiles del proceso postraumático. Las entrevistas dan cuenta que tras la agresión se ha vuelto difícil acceder, permanecer o reinsertarse en el empleo formal. La discriminación, la sospecha médica, el miedo empresarial y la precarización constante son factores comunes de algunas de las entrevistas.

En algunos casos, la exclusión laboral no fue inmediata, pero se fue manifestando de manera progresiva. Carles relata que, al momento de la agresión, no estaba trabajando, pero que al reincorporarse como profesor de secundaria notó cambios evidentes. Frente a estudiantes de primaria, la relación era más fluida: preguntaban, miraban con curiosidad, se mostraban abiertos. Con adolescentes mayores, en cambio, la interacción se volvía más compleja. A nivel laboral, Carles percibe que se cierran algunas opciones laborales, además observa una diferencia clara entre llevar parche y decidir no usarlo. La visibilidad del daño se convierte en un factor que condiciona oportunidades laborales, incluso cuando la capacidad profesional permanece intacta; sin embargo, esto no es relevante para él, pues sigue portando su parche ocular con mucho orgullo.

Para otras personas, la agresión implicó abandonar por completo su oficio anterior. Narem explica que antes de perder el ojo tenía una empresa de investigación privada y trabajaba activamente en juzgados y audiencias. Después de la agresión tuvo que dejar ese trabajo y buscar empleos más tranquilos. No se trató de una decisión vocacional, sino de una consecuencia de la agresión del trauma y del nuevo contexto. Narem señala que conseguir trabajo en Colombia con esta condición es extremadamente difícil: las empresas no quieren contratar a alguien que ha perdido un ojo porque temen denuncias o responsabilidades, así la condición no genera afectaciones para el puesto al cual se postula el sobreviviente. En este caso, la discapacidad se convierte en una presunción de riesgo para el empleador, no en una condición para la cual se deben ofrecer ajustes



razonables. Escuetamente, esto se denomina discriminación laboral.

Álvaro López nos comparte como la revinculación laboral puede ser un proceso sumamente revictimizante. Antes del ataque trabajaba como cajero y su empresa mantuvo el contrato durante toda la incapacidad. Sin embargo, el retorno al trabajo estuvo marcado por una carga emocional constante: cada vez que un cliente le preguntaba “¿qué le pasó?”, se veía obligado a revivir la agresión. Más adelante, al buscar otros empleos, una médica laboral le dijo algo que quedó grabado en su memoria: las personas con este tipo de lesiones suelen ser descartadas no por incapacidad real, sino por miedo a asumir responsabilidades. Álvaro confirma esa afirmación: pasó varias entrevistas y fue rechazado después de los exámenes médicos. Actualmente trabaja en construcciones civiles, pero con múltiples restricciones: no puede subir a grandes alturas y debe lidiar con el vértigo y la pérdida de profundidad. El trabajo existe, pero está atravesado por límites físicos y emocionales permanentes.

Juan Guerrero describe una experiencia similar. En un primer momento, la afectación ocular no tuvo grandes repercusiones en su vida cotidiana; sin embargo, cuando intentó ingresar al ámbito laboral formal, los exámenes médicos se convirtieron en una barrera. Fue rechazado en varios lugares exclusivamente por su condición visual, a pesar de que la prótesis que tiene no es muy “notoria”. Aunque ha logrado mantenerse activo y adaptarse, la experiencia deja en evidencia que el sistema laboral no está diseñado para incluir ojos lesionados por la violencia estatal. La exclusión no siempre se expresa en despidos explícitos, sino en filtros silenciosos que impiden el acceso desde el inicio del proceso.

Daniel cuenta que, con su parche y sus tatuajes, fue rechazado en trabajos formales con comentarios directos sobre su capacidad: “no hace bien las cosas porque tiene un solo ojo”. En otros espacios, incluso se le señaló por su apariencia. Ante esa exclusión reiterada, decide volver a la independencia laboral. El tatuaje se convierte en su espacio de libertad, donde nadie puede juzgarlo ni limitarlo. Esta decisión no es solo económica: es una forma de reconstruir relaciones laborales desde la autonomía, evitando la humillación cotidiana.

Para Johan Suárez, la agresión significó la destrucción de su carrera laboral formal. Antes del ataque trabajaba como asesor comercial y promotor de tecnología, un rol donde la imagen

personal y la presencia generaban confianza. Después de la lesión, incluso cuando lograba pasar los filtros de selección, era rechazado por motivos médicos. Hoy su vida laboral es inestable: trabaja al día, hace artesanías, pequeños trabajos en computador, vive del rebusque . No tiene contratos estables ni prestaciones. Johan describe este proceso como una caída abrupta: de un empleo formal con proyección, a una subsistencia precaria. La agresión no solo le quitó la visión; le quitó la posibilidad de planificar su futuro laboral.

Otro sobreviviente joven se suma a esta idea al señalar que, después del estallido social, la vida laboral se volvió extremadamente complicada. Las empresas rechazan a personas con condiciones como la suya, argumentando razones de “salubridad y seguridad”, lo cual realmente esconde un miedo hacia este tipo de condiciones. Esto hace casi imposible conseguir un trabajo formal y estable. La frustración es constante: las puertas se cierran una tras otra, aunque algunas se abren gracias al trabajo colectivo y la autogestión. En este relato, el trabajo deja de ser un derecho garantizado y se convierte en algo que se debe resolver

Gustavo Quinteros muestra otra cara del problema: la permanencia en trabajos físicamente riesgosos por falta de alternativas. Trabaja en la pesca artesanal, una labor dura y peligrosa. Durante el trabajo, el agua contaminada o las escamas pueden entrar en el ojo afectado, dejándolo temporalmente ciego y con dolor intenso. Sus compañeros no siempre comprenden lo que significa trabajar con una discapacidad visual. Sin embargo, Gustavo continúa porque necesita mantener a su familia. La elección no es libre: es una forma de supervivencia. El trabajo se convierte en un riesgo diario asumido por necesidad, en lugar de una forma de contribución social, un elemento de la identidad, y una forma de dignificación.

En algunos casos, el apoyo laboral existe, pero es excepcional. Muhaimin relata que antes del trauma ocular trabajaba como asistente de gerencia en una empresa privada vinculada al abastecimiento militar en Bangladesh. A pesar de la contradicción con sus ideales políticos, pudo conservar su empleo gracias al apoyo de sus jefes y colegas, trabajando desde casa. Su caso muestra que la inclusión laboral es posible cuando hay voluntad institucional, pero también evidencia lo excepcional de esa experiencia frente a la mayoría de relatos marcados por la exclusión.

Raúl Muñoz narra un proceso de reinención forzada. Antes era gasfiter, tenía una pequeña



empresa y trabajaba en mansiones de alto poder adquisitivo. Después del disparo perdió el 75% de su vista y tuvo que abandonar ese oficio. Leer se volvió difícil, incluso una tarea básica. Ante la imposibilidad de continuar, decidió crear una Fundación de Arte, Memoria y Derechos Humanos. A través del arte, encontró una forma de reconstruir su vida laboral y de sentido. Su relato muestra cómo, ante la exclusión del mercado laboral tradicional, algunas personas crean caminos alternativos, no por elección inicial, sino por expulsión estructural.

Pablo Montiel ofrece uno de los testimonios más crudos sobre la precarización prolongada. Tras el disparo, la pandemia agravó aún más la falta de oportunidades. Logró entrar a una constructora gracias a un amigo, pero fue llamado a su primera operación poco después y, al llevar poco tiempo, no recibió licencia médica. Estuvo dos años sin poder trabajar ni generar ingresos. En seis años, con contrato formal, ha trabajado apenas unos ocho meses. El resto ha sido trabajo informal, esporádico, sin garantías. Pablo relata reuniones negadas con el Ministerio del Trabajo, promesas incumplidas y una sensación constante de futuro incierto. Muchos compañeros quieren estudiar otra cosa, pero no pueden pagar los estudios ni dejar de trabajar para hacerlo. La agresión ocular los obliga a reinventarse en un sistema que no ofrece las condiciones para esa reinvención.

Giovanny García describe cómo su relación laboral se deterioró progresivamente. Trabajaba en una empresa de fabricación de lámparas y podía rotar turnos, lo que mejoraba sus ingresos. Después de la agresión, los criterios médicos limitaron su jornada al horario de mayor luminosidad. Esto redujo sus ingresos y aumentó el agotamiento físico y emocional. Mantener siempre el mismo turno, sin posibilidad de rotación, terminó afectando su salud mental, hasta que decidió retirarse de la empresa. Hoy trabaja principalmente frente a un computador, lo que genera un desgaste visual mayor. Giovanny es claro al afirmar que una reparación económica sostenida en el tiempo es necesaria, porque la lesión es permanente. No se trata de una compensación puntual, sino de garantizar condiciones de vida dignas a largo plazo.

En conjunto, las entrevistas muestran que la agresión ocular produce una ruptura estructural en la trayectoria laboral. La discriminación no siempre se expresa de forma explícita; muchas veces se manifiesta en exámenes médicos, silencios administrativos, rechazos sin explicación o restricciones que terminan empujando a la renuncia. El mercado laboral aparece como un espacio poco dispuesto a adaptarse, donde el miedo empresarial pesa más que el derecho al trabajo. El impacto laboral no es solo económico. La imposibilidad de trabajar en lo que se hacía antes afecta

la autoestima, la identidad profesional y el sentido de utilidad social. El trabajo deja de ser un lugar de pertenencia y se convierte en una fuente de frustración o riesgo. En este contexto, muchas personas se ven obligadas a reinventarse sin apoyo institucional, a aceptar empleos precarios o peligrosos, o a depender de redes informales.

Estos relatos evidencian que la violencia ocular no termina con la lesión. Continúa en la exclusión laboral, en la precarización forzada y en la ausencia de políticas de reinserción efectivas. Reconocer estos impactos laborales es fundamental para pensar una reparación integral que no se limite a la atención médica, sino que garantice el derecho al trabajo digno, a la estabilidad y al futuro. Porque cuando el Estado hiere el cuerpo y luego permite que el mercado expulse a la persona lesionada, la violencia se prolonga en el tiempo y se normaliza como destino.



4 En América Latina, la expresión 'vivir del rebusque' se refiere a la práctica de realizar trabajos precarios, usualmente bajo condiciones de explotación laboral severa en la que no se ofrecen garantías ni prestaciones, para tener ingresos suficientes para el diario vivir. Resulta de la dificultad de asegurar un trabajo estable y digno, la cual se ve exacerbada por la discriminación contra quienes han participado en protestas sociales y contra las personas con discapacidad.



Formas de reparación

La pregunta por la reparación es bastante compleja de responder de manera unificada. De entrada, en la mayoría de los casos de violencia ocular hay un daño físico permanente que no puede ser reparado, especialmente para quienes han perdido la visión por completo o que han tenido que someterse a la evisceración o enucleación. Sin embargo, hay otras formas de reparación que vale la pena explorar en este informe. ¿Qué significa reparar cuando el daño es permanente, visible y no reversible? Dado que es imposible restaurar las vidas de los y las sobrevivientes a como eran antes de la agresión, ¿cómo se puede reducir el daño sufrido, si es que no se puede resarcir del todo? Reconociendo, también, las raíces estructurales e institucionales de la violencia ocular, ¿cómo se puede avanzar hacia una transformación social que asegure la no repetición de estas agresiones?

Este punto de partida es contundente y se repite con matices distintos en las aspiraciones y vivencias de los sobrevivientes: “Nada puede devolver un ojo, ni la vida que uno tenía antes”, dice Álvaro López. Juan Guerrero lo formula de un modo aún más directo: “No existe una reparación completa posible. Solo devolver el órgano y su funcionalidad podría considerarse una reparación plena, aunque incluso eso no borraría las heridas emocionales y sociales”. En este sentido, la reparación no se entiende como “volver a ser el de antes”, porque eso ya es imposible. La reparación la entendemos como un conjunto de acciones que, aunque no pueden revertir la lesión, pueden avanzar hacia la restitución de derechos, el reconocimiento, cuidado, verdad, justicia y garantías de no repetición.

Programas integrales y compensación económica

Teniendo claro cómo entendemos la reparación, a partir del relato de las sobrevivientes, este informe deja ver un primer grupo de reparaciones que ya existen en algunos países como Chile, aunque sean parciales, irregulares o insuficientes: atención médica, programas especializados, y en algunos casos indemnizaciones económicas. Rodrigo Langarini menciona que en Chile el “Programa Integral de Reparación Ocular” (PIRO) cubría urgencias y operaciones, con presencia de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales. Es importante este antecedente, dado que demuestra que cuando hay “voluntad política” se pueden hacer políticas

públicas que sirvan como formas de reparación. Sin embargo, en el mismo testimonio aparece el límite: “No era de fácil acceso, no había muchas horas disponibles”. Aquí se menciona cómo la misma burocracia hace que los programas sean centralizados y erigen barreras de acceso para las personas de las periferias, lo cual sigue siendo preocupante, pues incluso son estas personas las que transversalmente sufren otro tipo de exclusiones por parte del Estado.

En el caso de Estados Unidos, Will Sands narra una experiencia distinta: una ruta legal “sólida” que permitió demandar y alcanzar un acuerdo extrajudicial por “algo más de medio millón de dólares”. El testimonio muestra que la compensación económica puede ser significativa para reorganizar la vida, especialmente cuando se deben modificar formas de trabajo y sostener gastos familiares. Sin embargo, el mismo entrevistado delimita el alcance: “el dinero no devuelve la visión ni el tiempo perdido, ni reparar el trauma. No diría que encontré justicia en los tribunales”. Esta frase es clave porque separa dos dimensiones que a menudo se confunden: reparación económica no equivale a justicia, ni a reparación integral. La indemnización puede aliviar, pero no cierra la herida. Incluso extraoficialmente Juan Guerrero mencionaba que no le interesaba el dinero, que si pudiera cambiar el dinero por recuperar su visión lo haría sin pensarlo, pues lo importante para él, era recuperar las habilidades previas a la violencia ocular.

Algo semejante expresa Esther Quintana cuando cuenta que “sí hubo una indemnización económica” pactada con la aseguradora, pero insiste en que el dinero no debe frenar la búsqueda judicial y que “no repara una discapacidad permanente ni la pérdida de un ojo”. Para algunos, la reparación económica no es completa, pues, ¿de qué sirve indemnizar a alguien, si luego tiene que ver y vivir su trauma nuevamente cada vez que hay un nuevo caso de violencia ocular? Es por eso que, para Esther “La verdadera reparación para mí ha sido social y colectiva: poder explicar lo que pasó, encontrar empatía, transformar el dolor en cambio político, ayudar a que no vuelva a ocurrir”.

Reparación simbólica, colectiva, comunitaria y de memoria

Esta idea introduce un segundo conjunto de reparaciones que aparecen de manera reiterada en el documento: reparación simbólica, colectiva, comunitaria y de memoria. Cristian Rodríguez lo



plantea con total claridad cuando afirma que la reparación simbólica es “la más importante”, porque la sociedad debe reconocer que la fuerza pública actuó “con intencionalidad y sistematicidad” y que no fueron accidentes. Él insiste: “Esa verdad colectiva es, para mí, una forma de justicia”. Este enfoque es bastante interesante pues traslada la reparación de un plano individual a un plano colectivo y social, busca instaurar un discurso donde los derechos humanos y el derecho a la movilización se respete de manera plana, además que combate las narrativas anteriormente mencionadas del enemigo interno, busca que las personas comprendan la sistematicidad de lo ocurrido y no lo justifiquen.

En varias voces aparece una tensión constante: se admite que las reparaciones económicas o judiciales son necesarias, pero se considera que, sin verdad pública, memoria y reconocimiento, se quedan en reparaciones individuales y no dan garantías de no repetición. Cristian Rodríguez incluso dice que “no existe una reparación real” y que lo económico o judicial alcanza “solo un nivel simbólico”. Para él la reparación más concreta ha sido el trabajo colectivo de las propias víctimas: “La verdadera reparación está en el reconocimiento social, en la memoria colectiva y en el trabajo que hacemos desde los movimientos de víctimas. MOCAO es una muestra de ello: nos hemos reparado entre nosotros a través de la memoria, el arte, la cultura, la política y la solidaridad”. Esto es importante porque da cuenta de cómo, cuando el Estado falla, los grupos de sobrevivientes de violencia ocular (y de violencia de Estado más generalmente) recurren a la solidaridad como forma de reparación.

Carolina Bautista refuerza esa lectura al señalar que, aunque “la justicia institucional sigue fallando”, han surgido redes de apoyo, protocolos y espacios de acompañamiento contruidos por organizaciones sociales, no por el Estado. Ella lo enmarca en una comparación generacional, pues fue agredida en el 2003, mucho antes del pico en los casos de violencia ocular (entre 2019 y 2022). Para ella, el tránsito fue “solitario”, mientras que hoy existe un ecosistema comunitario que transforma el dolor en acción. En su relato, la reparación no es un acto final, sino un proceso histórico: se construye a partir de organización, redes y memoria. Que haya colectivos encaminados a la lucha contra la violencia ocular permite que existan esperanzas de lograr la no repetición, además de la memoria.

En el mismo sentido, Will Sands narra la creación de una red informal (Shot in the Eye Squad, el escuadrón del disparo en el ojo) como lo más transformador de su proceso. Y aunque relata

la indemnización, insiste en que su “verdadera forma de justicia” fue “construir comunidad y conciencia”, visibilizar la industria de armas “menos letales” y denunciar la lógica del “enemigo interno”. De nuevo aparece la idea de reparación como comunidad: una reparación que no depende del veredicto estatal, sino de la capacidad de las víctimas para conectarse, narrarse, organizarse y hacer memoria.

Verdad y responsabilización

El tercer conjunto de reparaciones, también recurrente en los relatos de sobrevivientes y los conceptos ofrecidos por defensores/as de derechos humanos, es la reparación entendida como verdad, justicia e identificación de responsabilidades. La demanda de justicia no aparece como deseo de venganza o una búsqueda de retribución, sino como necesidad de reconocimiento moral y político.

Carles menciona qué: “Lo primero sería que hubiera justicia: que quedara claro el autor material del disparo y se le condenara a él y a los mandos por permitirlo. Más allá de una reclamación patrimonial... es el reconocimiento de la culpa por parte de quien la tiene”. En su testimonio aparece además una dimensión muy precisa: la revictimización institucional. Dice que llegaron a afirmar que le reventaron el ojo porque se colocó voluntariamente en riesgo por ir a protestar, y sentencia: “Eso no debería ser así jamás”. Esa frase muestra una forma de reparación negativa: reparar también implica frenar los discursos que culpan a la víctima. Si no se enfrentan esos discursos que buscan culpabilizar a la víctima, se cae en un retroceso en materia de comprensión por parte de la sociedad de las afectaciones directas a la democracia de la violencia ocular.

Rodrigo Langarini, por su parte, formula un escenario ideal por el cual se debe luchar: “reconocer la verdad; reconocer que fue algo premeditado y organizado; que los responsables... deben pagar con justicia, con cárcel”. Y no limita la responsabilidad al autor material: incluye altos mandos, ministerios e incluso presidencia, algo sin duda bastante ambicioso. Independientemente del papel que tienen quienes encabezan los altos poderes del Estado en el uso indebido de la fuerza, la justicia siempre será más diligente con el que no goza de poder político. Aquí lo interesante es que Rodrigo también añade la necesidad de compensación monetaria, pero la justifica desde las pérdidas concretas de derechos: por ejemplo, la pérdida de la licencia de moto en Chile para



personas monoculares, que le quitó su forma de trabajo y un núcleo vital. En otros países como Colombia esta ley no existe. De hecho, varias personas sobrevivientes a lesión ocular que fueron entrevistadas en este informe manejan moto a diario para transporte propio y como parte de su trabajo y explican que se han logrado adaptar para hacerlo de forma segura. En lugar de proveer los ajustes razonables para que las personas lesionadas puedan realizar de manera independiente sus actividades diarias, el caso de Rodrigo resalta las dificultades para navegar un mundo que insiste que la discapacidad es equivalente a la incapacidad. En este contexto, la reparación económica no se trata de asignarle un “precio” al ojo o al porcentaje de visión que se ha perdido, sino como restitución frente a daños acumulados: afectaciones en términos laborales, educativos y los demás impactos postraumáticos expuestos anteriormente, los cuales se ven exacerbados por la exclusión social de la discapacidad en oportunidades de educación y de trabajo.

Juan Guerrero profundiza la idea de reparación como esclarecimiento: su reparación “verdadera” sería “la verdad completa”, saber por qué el agente disparó, bajo qué órdenes, formación o ideología. Y agrega que la justicia debe incluir la inhabilitación: que el agente sea apartado e impedido de portar armas o representar al Estado. Además, introduce un elemento poderoso en el documento: el perdón público. Dice se debe ofrecer una disculpa oficial no solo del autor material, sino también de altos mandos y de quienes promovieron discursos de odio y del “enemigo interno”. Esto incluye a los medios de comunicación tradicionales que han promovido la criminalización de la protesta como actos de “vandalismo” y el “terrorismo”, y que, por ello, sugieren que la violencia ocular hace parte de un uso legítimo e incluso necesario de la fuerza.

No repetición

Un cuarto eje de reparación que se repite con mucha fuerza es la no repetición, entendida no como promesa abstracta, sino como reformas concretas, tales como prohibir armas, erradicar tácticas, desmontar estructuras represivas. Carles lo plantea como reparación: “pedimos prohibir definitivamente este armamento”, porque su uso produce lesiones irreparables incluso en operativos “pequeños” y de “goteo lento”. Para él, reconocer la desproporción y prohibirlas sería una vía concreta y aceptable de reparación. Daniel Jaimes coincide: “la verdadera reparación sería prohibir su uso y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (conocido como ESMAD, el antiguo cuerpo policial asignado a responder a protestas y aglomeraciones en Colombia), para

que ninguna otra persona sufra lo que nosotros vivimos”. Adelaida Tamayo va aún más lejos en su propuesta: eliminar el uso de armas “menos letales”, desmontar el ESMAD y la nueva Unidad para el diálogo y mantenimiento del orden (UNDMO) como paso hacia la abolición del sistema policial y carcelario, transformar la doctrina del enemigo interno, y promover educación popular, arte y teatro popular para desmontar la mentalidad que justifica la represión. En esta visión, la reparación tiene una dimensión cultural: no basta con cambiar protocolos; hay que cambiar la idea de orden que convierte al manifestante en amenaza.

Los entrevistados también señalan otro aspecto clave: reparación integral como acceso a derechos sociales y atención interdisciplinaria. Johan Suárez insiste en que “más que dinero” se requiere “atención psicosocial integral” y “verdadera estabilidad económica”, porque el Estado ignora la salud mental y la inclusión laboral. Daniela Buriticá aporta una formulación técnica-política: la violencia ocular exige respuestas amplias, acceso a derechos laborales, educativos, jurídicos y sociales, y acompañamiento interdisciplinario. Incluso plantea un enfoque narrativo: reconstruir la historia de vida antes y después como forma de reconfigurar el trauma. Esto conecta con lo que el documento sugiere de fondo: reparar no es solo compensar, es acompañar procesos largos—una reparación vitalicia a una herida que queda de por vida.

Ahora bien, junto a todas estas propuestas de reparación, el documento también evidencia con fuerza las formas de no reparación: negación, fallas institucionales, ausencia de políticas, revictimización, promesas incumplidas, impunidad. Los sobrevivientes muestran frustración afirmando que “no existe reparación real” y que en la mayoría de los casos “la reparación nunca llega”. Raúl Muñoz es aún más explícito al denunciar que “no ha habido ley de reparación, ni ayuda laboral, psicológica o educativa” y que los programas existentes funcionan “muy superficialmente”. Afirma que no atienden a familiares ni hijos de víctimas y que, en tribunales, se cambian denominaciones para archivar causas y se fragmentan responsabilidades para diluir culpabilidades. Sergio, desde Brasil, narra más de diez años esperando justicia y concluye que la justicia protege más al Estado que al ciudadano, aunque él insiste en seguir apelando. En estas voces, la ausencia de reparación no es un vacío administrativo: es una continuidad de la violencia por otras vías, donde el sistema cierra puertas, retrasa, archiva o justifica con un fin premeditado, la negación de estos hechos, la invisibilización de los sobrevivientes y la exclusión permanente de los procesos ciudadanos

5 Para aclarar, la UNDMO es el cuerpo policial que reemplazó al ESMAD en Colombia en 2023 tras un proceso de reforma.

En síntesis, el documento muestra que sí existen formas de reparación, pero son parciales y desiguales según el país, el caso y la capacidad organizativa. Se identifican al menos cinco grandes formas:

1. Programas de salud y atención médica especializada, derrumbando las barreras de acceso vistas en otros países
2. Indemnizaciones económicas o acuerdos judiciales, útiles pero insuficientes
3. Reparación simbólica basada en reconocimiento social, memoria colectiva y legitimación de la verdad
4. Justicia y esclarecimiento de responsabilidades, con énfasis en mandos y estructuras
5. Garantías de no repetición mediante prohibición de armas, transformación doctrinal y reformas profundas, acompañadas de educación popular y cultura crítica. Al mismo tiempo, el documento subraya que, en muchos contextos, la reparación institucional es inexistente o fallida: prevalecen la impunidad, la revictimización y la ausencia de políticas sostenidas.

Lo más relevante que podemos destacar, es que, aunque el Estado haya negado su responsabilidad y asimismo se ha negado a responder en formas de reparación, los sobrevivientes han encontrado caminos para lograr estos 5 puntos y lo han hecho como forma de sobreponerse a lo ocurrido. Es decir, la reparación ha llegado no por el Estado sino a pesar de él.

Justicia

Finalmente, la dimensión de justicia aparece en las entrevistas como una trayectoria fragmentada, desigual y, en la mayoría de los casos, profundamente frustrante. El documento muestra que las personas no hablan de “justicia” como un único camino, sino como un conjunto de rutas que se abren o se cierran según el país, el contexto político, la posibilidad de acceder a asesoría y pruebas, y la disposición institucional a investigar a agentes del Estado. A partir de una síntesis de los sistemas judiciales que navegan los sobrevivientes de violencia ocular en sus respectivos contextos, se distinguen al menos cuatro vías, cada una entendida en un sentido amplio:

- Justicia penal (identificación y sanción del responsable)
- Justicia contencioso-administrativa o administrativa (condena estatal por responsabilidad)
- Justicia civil (indemnizaciones/conciliaciones)
- Vías internacionales (cuando el sistema interno se agota o no admite).

En casi todas las narrativas la justicia penal no avanza o se encuentra bloqueada adrede, generalmente las reparaciones económicas y simbólicas suelen avanzar más rápido pero no en todos los casos y aún de manera insuficiente, esto nos permite deducir que el estado prefiere “pagar” por sus errores que aceptar que hubo extralimitaciones y mal uso de la fuerza por parte de sus agentes, lo cual demuestra una negatividad por parte de los estados a reconocer la violencia ocular como un problema democrático y por ende nos sugiere que al no considerarlo un problema no van a avanzar hacia su cambio.

En el Estado español, Carles plantea un panorama estructural de impunidad. Afirma que “no hay justicia” y que ningún policía denunciado por violencia ocular ha sido condenado; las causas se archivan sistemáticamente. Su caso ilustra un agotamiento institucional completo: litigó catorce años contra el Estado pasando por Juzgado de Primera Instancia (archivo), Audiencia Provincial (archivo), Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional (denegación) y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ni siquiera admitió la solicitud.

El patrón técnico aquí es claro: archivo reiterado, cierre en cascada, y falta de admisión internacional incluso tras agotar instancias. La experiencia muestra que, aun con persistencia extrema, el sistema puede bloquear la judicialización mediante decisiones procedimentales o “leguleyadas”, es decir maromas del derecho para negar e incluso revictimizar a los sobrevivientes por lo ocurrido, ver cómo no avanza su caso es una forma también de violentar por medio del poder jurídico estatal.

En Colombia, múltiples testimonios convergen en una idea: la justicia es ineficiente, dilatada, revictimizante y frecuentemente inexistente en lo penal. Narem afirma que en Colombia “no hay justicia” y que su caso está “olvidado”; describe una lógica de archivo y olvido social, y advierte que el dinero no repara el daño ni el trauma familiar. Álvaro López coincide en que la justicia “no ha sido eficiente”, con un proceso lleno de trabas y burocracia, especialmente cuando involucra agentes estatales: o no avanza o se dilata. En su relato, la justicia se vive como “un camino de espera y persistencia”, donde la sensación de abandono es constante.

Juan Guerrero aporta un elemento técnico clave: la revictimización institucional durante procesos administrativos y judiciales, particularmente por parte de la Policía Nacional. Señala que tuvo que rendir indagatoria ante la misma institución que causó su mutilación, en donde las preguntas buscaban argumentar el uso de la fuerza: ¿Estaba usted arrojando piedras al policía en



el momento que usted dice que lo agredieron?, ¿Estaba usted afectando la propiedad privada o pública en el momento que lo agredieron? Son algunas de las preguntas que le hicieron durante la investigación interna de la policía nacional, investigación que buscaba justificar más no investigar lo sucedido. lo que describe como humillante. Además, denuncia un patrón de “traslado de la carga probatoria”: la investigación termina recayendo sobre la víctima o su abogado, cuando debería recaer en la Fiscalía.

Cristian Rodríguez ofrece el ejemplo más claro de avance parcial en Colombia, justamente porque distingue tres caminos. En su caso, hubo un avance significativo en la reparación administrativa: el Juzgado Administrativo 33 del Circuito de Bogotá condenó al Estado colombiano y al Ministerio de Defensa por la lesión causada por un agente del ESMAD durante una protesta. Cristian interpreta este fallo como un reconocimiento institucional y simbólico, y como una victoria colectiva. Sin embargo, en su misma narrativa queda claro el límite: en el proceso penal no hay avances, no existe investigación abierta ni identificación del responsable directo. Incluso anticipa que probablemente nunca conocerá al agente que le disparó.

Daniel Jaimes narra un proceso judicial especialmente violento en términos de trato institucional. Describe un patrón de interrogatorio intimidante: “¿Qué estaba haciendo?”, “¿Por qué estaba allí?”, “¿De quién fue la culpa?”, como si debiera “demostrar que era víctima”. Además, reporta persecución y hostigamiento: policías que llegaban a su casa, seguimientos, grabaciones e ingreso a locales donde trabajaba, bajo pretexto de investigación. Su relato se puede codificar como: criminalización de la víctima dentro del proceso, hostigamiento, y miedo persistente, lo que impacta la capacidad de sostener la ruta judicial. La idea que resume su experiencia es potente: en Colombia, ser víctima puede significar ser tratado como sospechoso.

Johan Suárez menciona que no denunció en su momento por falta de conocimiento sobre cómo funcionaba el aparato judicial. Cuando decidió proceder con la denuncia, según él, “ya era muy tarde” pues no recibió apoyo jurídico ni psicosocial, por lo cual es pertinente mencionar que ninguna persona espera que le sucedan estos casos y, por ende, generalmente no tienen las suficientes herramientas jurídicas para afrontar estos sucesos.

Carolina Bautista se ubica en esa misma línea, pero con contextualización histórica: nunca denunció, no por falta de voluntad, sino por miedo y ausencia de mecanismos institucionales en 2003. Plantea una pregunta central: ¿cómo denunciar ante la Policía a la misma institución

que la agredió? Un abogado le dijo que el caso era “ganable”, pero el contexto político (inicios del gobierno Uribe) y la falta de rutas la llevaron a desistir. Carolina insiste en un hallazgo clave: la impunidad no es culpa de las víctimas, sino del sistema judicial que no ofrece canales seguros ni acompañamiento.

Un patrón frecuente al intentar acceder a la justicia es el abandono por parte de los representantes legales. Por ejemplo, un joven sobreviviente señala que tuvo un abogado, pero que con el tiempo abandonó el proceso; escribía periódicamente para preguntar y dejó de recibir respuestas. Algunos mencionan sentirse “tirados en el camino”. Esto introduce un elemento claves, la continuidad del patrocinio jurídico y deserción del abogado como causa de estancamiento. Alejandro refuerza la idea de lentitud extrema: casi seis años y apenas segunda audiencia; sus abogados anticipan que podrían perder porque la justicia protege intereses estatales y revictimiza a las víctimas. Además, describe una estrategia narrativa institucional: presentar el hecho como accidente o pelea callejera, e incluso insinuar que manifestantes se provocan heridas para obtener beneficios.

Fuera de Colombia y España, las respuestas de las entrevistas reflejan patrones comparables: pruebas abundantes que no bastan, cierres con argumentos débiles y “compensación” como sustituto de justicia. En Chile, Gustavo Quinteros relata que su caso fue cerrado sin responsables y resume el absurdo probatorio con ironía: “me disparó el viento”. Tenía dos procesos (uno personal y otro de DD. HH.) y ambos fueron archivados; nunca lo llamaron ni pidieron testimonio. Solo permanece una demanda civil, que podría terminar en indemnización, pero no en justicia. Gustavo concluye: “al final, te callan con dinero”, subrayando la diferencia entre indemnización y responsabilidad. Pablo Montiel describe que no se identificó al Carabinero, aunque se comprobó que el balín fue disparado por Carabineros; reporta que se borraron los videos de las cámaras que demostraban la culpabilidad, así como el traslado del caso a altos mandos aún en juicio, pero sin expectativa. Añade un factor normativo clave: la Ley Naín-Retamal, que protege retroactivamente a Carabineros y amplía márgenes de justificación por “legítima defensa”.

En Perú, Atoq presenta un caso con fuerte soporte probatorio: su abogada encontró evidencia fotográfica y documental del operativo; incluso en sus imágenes se ven agentes apuntando y disparando, con detalles de unidades. La abogada sostuvo dos violaciones: integridad personal y libertad de expresión (por ser periodista), y planteó existencia de un grupo policial no oficial dedicado a disparar al cuerpo y rostro. A pesar de ello, el juez cerró el caso alegando insuficiencia probatoria y sugiriendo que el proyectil pudo ser disparado por manifestantes. Atoq apeló, pero por



agotamiento emocional abandonó el proceso. Este caso demuestra cómo la justicia busca dilatar los procesos, hasta lograr el agotamiento del denunciante y posteriormente su desistimiento, es decir, una justicia que no busca esclarecer los hechos, sino que parece diseñada para proteger a toda costa el imaginario de las fuerzas policiales como ejes de la moral.

En Brasil, Sergio describe una decisión judicial que califica de política: se rechazó indemnización y el tribunal lo declaró culpable “por estar allí”, eximiendo al Estado de responsabilidad. A pesar de más de diez años, mantiene una demanda buscando reparación y reconocimiento de responsabilidad policial. Afirmar tener pruebas (testigos, imágenes, incluso testimonios de policías sobre el desorden del operativo), aunque no exista imagen del impacto exacto. Su caso permite deducir: fallo desfavorable con culpabilización de la víctima, persistencia en litigio a largo plazo, y disputa probatoria sobre estándar de prueba.

En Estados Unidos, Soren Stevenson describe la diferencia entre procesos civiles y penales: los penales son casi imposibles; él logró demanda civil y acuerdo económico con el ayuntamiento de Minneapolis en 2022, pero el oficial que disparó sigue activo sin sanción disciplinaria. Este patrón es relevante: éxito civil (acuerdo) sin consecuencias penales/disciplinarias, lo que revela impunidad estructural. Muhaimin (Bangladesh) expresa insatisfacción por la justicia lenta, confusa y politizada, pero sostiene esperanza de rendición de cuentas “ante la historia y el pueblo”, una justicia transformadora que va más allá del tribunal.



Conclusiones

Para cerrar, y a propósito de la aspiración de Muhaimin por una justicia amplia y comprensiva, insistimos en la necesidad de ver más allá de la herida para comprender las raíces e impactos de la violencia ocular y dar un acompañamiento a las personas y comunidades que se ven afectadas por ella. Con base en tres fuentes principales a saber, los relatos de sobrevivientes de lesión ocular de distintas partes del mundo, los conceptos expertos de defensores/as de derechos humanos desde distintas disciplinas, y la documentación existente de las prácticas que adelantan las organizaciones sociales de base este informe definió, caracterizó y denunció la violencia ocular como un acto sistemático de tortura con un conjunto complejo de impactos postraumáticos para quienes la sobreviven y con efectos negativos en los procesos democráticos. Más específicamente, se ahondó en los impactos postraumáticos de una lesión que no solo afecta a quien la sufre, sino a sus redes cercanas y al ejercicio más amplio de la participación política por medio de la protesta social. Al conectar estos efectos concretos con las raíces históricas e ideológicas que subyacen las respuestas dadas a las manifestaciones sociales alrededor del mundo, fue posible aclarar en la práctica cómo se materializan las nociones del enemigo interno y el castigo ejemplarizante.



Bibliografía

Amnistía Internacional & Omega Research Foundation. (2023). *My Eye Exploded: The Global Abuse of Kinetic Impact Projectiles*. Disponible en: <https://omegaresearchfoundation.org/storage/2024/02/My-Eye-Exploded-English.pdf>

Buriticá, D. (2024). *Estrategia de intervención psicológica en personas sobrevivientes de lesiones oculares en protesta social*. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88057>

Calamati, S. (2002). *The Trouble We've Seen: Women's Stories from the North of Ireland. Belfast: Beyond the Pale*.

Casas Ramírez, D. A. (2019). Esmad, seguridad y posacuerdo: perspectivas sobre la protesta en Colombia. *Ciencias Sociales y Educación*, 8(16), pp. 73–89.

Cruz, E. (2016). *Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo

CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS. (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia. Disponible en: <https://reaccionrevistadigital.com/wpcontent/uploads/2023/02/Represion-en-la-mira.-Inf-LesionesOculares.pdf>

Curtis, L. (1982). *They Shoot Children: The use of rubber and plastic bullets in the North of Ireland*.

Cohen, M. A. (1985). Plastic bullet injuries of the face and jaws. *South African Medical Journal*, 68(12), 849–852.

Dymond, A. (2022). *Electric-Shock Weapons, Tasers and Policing: Myths and Realities*. Routledge.

Guerrero Rivière, L. (2025). *Sights of struggle and wounded eyes: narratives of ocular maiming in Colombia*. Tesis doctoral. Universidad de Exeter.

Guerrero Rivière, L. & Obermaier, L. (2026). Transnational maiming: ocular mutilation in Palestine and Colombia. En Sheikh, M., Mendes, S. M., & Fraga, V. (Eds.) *Globalized Injustice: Relational Contexts and Modalities of Resistance*. Cambridge Scholars. pp. 82–103.

Guerrero Rubiano, A. J., Bernal Martínez, D. A., & Fonseca, J. P. (2024). The Movement in Resistance against Eye Aggressions by MOCAO as a social movement for justice, reparation and the right to peace and freedom in Colombia. *Torture*, 34(1), p. 83–88.

Hawwa, O., Azizi, S., MSallam, M., et al. (2025). Ophthalmology during conflict: a vitreoretinal surgeon's journey in Gaza. *Eye*, 39, pp. 1657–1658.



Jaouni, Z. M., & O'Shea, J. G. (1997). Surgical management of ophthalmic trauma due to the Palestinian Intifada. *Eye*, 11(3), pp. 392–397.

Osorio-Rozo, D. G. y Olarte-Cancino, H. (2023). Obediencia a través del dolor: La violencia estatal en el contexto de la protesta social (Bogotá, Colombia, 2019–2022). *Antípoda*, 53: pp. 135–160.

PAIIS, Temblores, y Amnistía Internacional. (2021). *Tiros a la Vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional*.

Planas, R. (2026, enero 17). “US federal forces blind two protesters shot in face with ‘less-lethal’ munitions”. *The Guardian*. Disponible en: <http://theguardian.com/us-news/2026/jan/17/protesters-blind-us-federal-agents>

Puar, J. K. (2017). *The Right to Maim*. Durham: Duke University Press.

Rincón Oñate, C. A. (2019). La construcción del enemigo interno. Una política pública del odio. *Desde el Jardín de Freud*, 19. pp. 249–262.

Rocher, P. (2021). *Gasear, Mutilar, Someter: la política de las armas no letales*. Katacrak.

Romero, S. R. (2022). *El Retumbar de Mayo a Media Tarde*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Tamayo Gomez, C. (2022). Recognition as transitional justice ‘from below’: Analysing victims’ grassroots activism in postconflict Colombia. *International Journal of Transitional Justice*, 16(3), 314–330.

Tomlin, J. (2011, diciembre 18). “How eyepatches became a symbol of Egypt’s revolution”. *The Guardian*. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2011/dec/18/eyepatches-egypt>

Velásquez Valenzuela, J., Fernández Carter, C., y Reynhout, S. A. (2021). ¿No letales? Un análisis criminológico, criminalístico y jurídico sobre los peligros de los proyectiles de impacto de energía cinética. *Política Criminal*, 16(32), 524–556.

Velásquez Valenzuela, J., Guerrero Rivière, L., & González, F. (2024). Obediencia mediante el dolor, discapacidad y tortura: Lecciones sobre el empleo y los efectos de las armas menos letales desde Chile y Colombia. *Anuario de Derechos Humanos*, 20(2), pp. 327–354.



Recolección frases fundamentales sobrevivientes

Johan Suárez (Colombia):

- 1. Después del ataque quede perdí esa inocencia La sensación de estar entero, me siento roto y no hay reparación posible para esto, han pasado casi seis años y sigo igual; sonrió, pero lucho todos los días para poder hacerlo
- 2. Solo pido dignidad, estabilidad, y salud mental.

Gustavo Quinteros:

- 3. La justicia sin humanidad no sirve. aunque el proceso es largo y doloroso, he aprendido a transformar la rabia en fuerza
- 4. No busco dinero, busco verdad, reconocimiento y justicia real así sea con un solo ojo.

Atoq (Perú)

- 5. El sistema judicial peruano es cómplice de la impunidad, encubre. Dilata y protege a los responsables.
- 6. No creo en la justicia institucional, pero sí en la justicia simbólica y colectiva.
- 7. A través del arte, la fotografía y la cultura podemos mantener viva la memoria, imaginar otros futuros posibles y dar voz a quienes fueron silenciados.
- 8. Quizás nosotros no veamos el cambio, pero las nuevas generaciones tendrán más herramientas para transformar lo que hoy parece imposible.

Rodrigo Langarini (Chile)

- 9. Siento que también esta falta de salud mental que tiene esa persona es también justamente eso como el individualismo y la falta de empatía, que eso no sé solamente en Chile sea a nivel mundial.

Narem Rodríguez

- 10. A mí me pueden dar dinero, pero eso no puede reparar el trauma de mi hermana, de mi hija, el trauma de mi familia, igual la plata se va a acabar y no va a reparar mi ojo.

Alvaro López:

- 11. no nos miren como extraños ni como culpables.

- 12. No somos delincuentes ni “guerrilleros” por haber perdido un ojo en una manifestación.
- 13. Antes de todo esto, también éramos sus amigos, sus vecinos, sus compañeros.
- 14. Solo pedimos respeto y humanidad.

Juan Guerrero:

- 15. La pérdida de un ojo no es solo una mutilación física; es una marca social, emocional y política.
- 16. La justicia lenta, la impunidad institucional y la indiferencia estatal profundizan el trauma.
- 17. Por eso, más allá de una compensación económica, lo que realmente repara es la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas.

Cristian Rodríguez

- 18. Esta experiencia cambió mi vida por completo.
- 19. Lo que fue una agresión destinada a silenciar, terminó generando conciencia, unión y organización.
- 20. La justicia estatal puede ser lenta y limitada, pero la reparación colectiva a través de la memoria y la acción política es una forma de resistencia y dignidad.

Daniel Jaimés - Colombia

- 21. Ser víctima de violencia ocular no solo deja una herida física, sino una marca de identidad.
- 22. He aprendido que la verdadera justicia está en evitar que vuelva a ocurrir, en transformar el miedo en dignidad y en seguir resistiendo desde la memoria.
- 23. No busco venganza. Busco que se entienda que, detrás de cada parche, hay una historia de vida, de lucha y de fortaleza.

Sobreviviente - Colombia

- 24. Después de todo, entendí que la reparación no se mide en dinero.
- 25. La verdadera reparación está en la solidaridad, la dignidad y la memoria.
- 26. El Estado no responde, pero el pueblo sí.
- 27. Somos los compañeros, los amigos y las colectividades quienes mantenemos viva la esperanza y la resistencia.

Alejandro Hernández



28. He vivido con esta lesión desde los 19 años, y seguiré con ella el resto de mi vida.

29. La verdadera reparación no es un pago ni una condena, sino el reconocimiento del daño y el perdón real de quienes lo cometieron.

30. No quiero ser recordado como una víctima más, sino como una voz que denunció la injusticia y pidió dignidad para las víctimas.

Carolina Bautista - Colombia

31. La justicia institucional sigue fallando, pero el reconocimiento, la solidaridad y la memoria colectiva se han convertido en formas de reparación.

32. Mi caso fue un tránsito solitario, pero hoy sé que no estamos solas.

33. Las víctimas de violencia ocular hemos logrado transformar el dolor en resistencia y dignidad.

Gustavo Quintero

34. He aprendido que la justicia sin humanidad no sirve.

35. No busco dinero, busco verdad, reconocimiento y justicia real.

36. Que el Estado y los responsables paguen por lo que hicieron, y que nunca más un joven pierda los ojos por exigir dignidad.

37. Aunque el proceso ha sido largo y doloroso, he aprendido a transformar la rabia en fuerza.

38. Mi mujer y mi hijo son mi motor, mi familia y mi razón para seguir. Gracias a ellos, sigo mirando aunque sea con un solo ojo hacia un futuro donde haya memoria y justicia

Muhamin Pulok

39. No estoy satisfecho con cómo se han manejado las cosas.

40. La justicia ha sido lenta, confusa y manipulada políticamente.

41. He sobrevivido a una agresión que me cambió la vida, pero sigo de pie.

42. Mi esperanza es que algún día los responsables —desde los agentes que dispararon hasta quienes dieron las órdenes— rindan cuentas ante la historia y ante el pueblo de Bangladesh.

Cesar Galloso

43. Para todos es diferente la lesión.

44. Hay que dejar de tener ese sentimiento tan negativo que a la larga eso es lo que trae problemas psicológicos, con las victimas me siento entendido y comprendido. y a la larga son muy similares los sentires con un sentido social, con un sentido de justicia



Sergio Silva

45. ¿Dónde está el peligro que yo representaba para la sociedad o para ese policía?

46. El juez tomó una decisión política, equivocada y falsa, que niega la realidad de los hechos y me perjudica hasta hoy.

47. Es mi profesión informar a la sociedad, pero exime de culpa a la acción policial, que disparó indiscriminadamente contra personas desarmadas.

Raul Muñoz

48. He tenido buenos amigos y también abandono.

49. He aprendido a valorar la resiliencia y a no guardar rencor.

50. Decidí crear una Fundación de Arte, Memoria y Derechos Humanos. Empecé haciendo talleres de máscaras con mis vecinos y comunidades. El arte me salvó: enseñó a niños a hacer máscaras como terapia y resistencia.

Will Sands (EEUU)

51. Somos cientos, si no miles, en todo el mundo. Conectar entre nosotros es vital; compartir la experiencia ayuda a sanar.

52. Perder la vista aunque sea parcial es una experiencia profundamente íntima y devastadora. Pero juntos somos fuertes.

Esa fuerza colectiva, esa red de solidaridad, es lo que realmente nos mantiene en pie.

Soren Stevenson

53. Cada mañana despierto y aún limpio sangre de mi ojo.

54. Sé que muchos de ustedes conservan su ojo, pero sufren de doble visión, mareos, dolor constante o vértigo. Les quiero decir que no son los únicos.

55. No podemos borrar la herida, pero podemos acompañarnos desde la empatía y la solidaridad.

56. Tal vez no estemos juntos físicamente, pero estamos unidos espiritualmente, pensando unos en otros.

Pablo Montiel - Chile

57. Muchos compañeros se deprimieron o cayeron en adicciones. Otros seguimos intentando explicar, conversando con la gente para romper prejuicios, aunque a veces sea desgastante. Personalmente, trato de encararlos, contar mi historia. Algunos reaccionan con empatía, otros no. No me hace llorar, pero sí causa malestar escuchar cómo nos insultan sin saber.





Agradecimientos

Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de este informe. Queremos expresar nuestro profundo reconocimiento a las y los sobrevivientes de violencia ocular, quienes, a partir de su resistencia, nos inspiran —como sobrevivientes también— a continuar con este trabajo.

De igual forma, extendemos nuestro agradecimiento a las organizaciones que nos han acompañado con su experiencia y formación, entre ellas el CAPS (Centro de Atención Psicosocial) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), cuyos aportes han sido fundamentales en nuestro proceso como sobrevivientes y en la consolidación de un proyecto político orientado a la defensa de los derechos humanos.

Este informe es de todas y todos ustedes. Esperamos que continúe sumando esfuerzos para erradicar este tipo de violencia policial en los Estados.

Seeing Beyond the Wound:
post-traumatic impacts of ocular violence



Co-authored by:

Juan Pablo Fonseca Roa
Andrés Juan Guerrero Rubiano
Lucía Guerrero Rivière
Juan Carlos Gonzalez Carpintero
Giovanny Garcia
Daniel Alejandro Jaimes Serna

This publication is made possible thanks to the financial support of Open Society Foundations. The views expressed herein reflect solely the opinion of the International Eye Violence Research Center (CIIVO) and, therefore, do not represent the official viewpoint of Open Society Foundations.

Bogotá, Colombia.
2026

Organizations that supported the report



Contents

INTRODUCTION 78

GENERAL OBJECTIVE 82

SPECIFIC OBJECTIVES 82

METHODOLOGY 82

HISTORICAL AND CONCEPTUAL BACKGROUND 88

BLINDING THE CRITICAL EYE: OCULAR VIOLENCE AND THE LOGIC OF THE INTERNAL ENEMY 93

EXEMPLARY PUNISHMENT: THE EYE INJURY AS COLLECTIVE PUNISHMENT 94

THE ABLEIST ROOTS OF WEAPONIZING DISABILITY 96

POST-TRAUMATIC IMPACTS 100

IDENTITY 100

FAMILY 104

SOCIAL RELATIONSHIPS 110

LABOR 114

FORMS OF REPARATION 122

COMPREHENSIVE PROGRAMS AND FINANCIAL COMPENSATION 122

SYMBOLIC, COLLECTIVE, COMMUNITY, AND MEMORY-BASED REPARATION 123

TRUTH AND ACCOUNTABILITY 125

NON-REPETITION 126

JUSTICE 128

CONCLUSIONS 133

BIBLIOGRAPHY 134

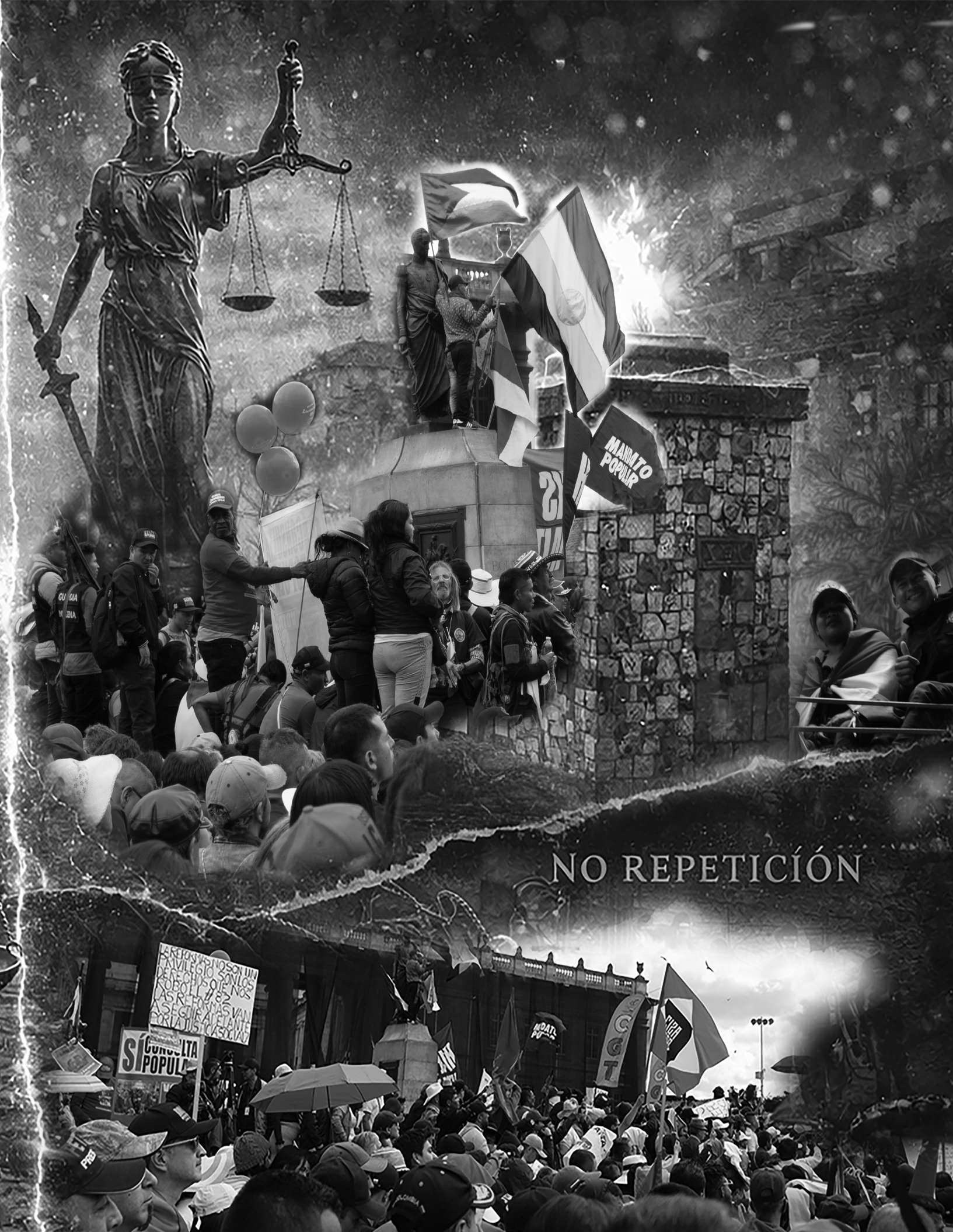
APPENDIX - PHRASES FROM THE SURVIVORS 136



VERDAD Y RESPONSABILIZACIÓN



JUSTICIA



NO REPETICIÓN

Introduction

This report aims to define and denounce ocular violence as a systematic act of state-perpetrated torture carried in contexts of social protest around the world. This characterization of ocular violence is supported by an analysis of different political contexts in which mass eye injuries were incurred through the use of force by state agents. As the first survivor-led report of its kind, it seeks to make a critical contribution to existing knowledge on the use of force in protest policing, particularly from the perspective of the survivors of these attacks. Thus, it is their narratives, experiences, aspirations, and visions for the future that motivate and guide this research. In addition to documenting, systematizing, and highlighting the multidimensional effects of ocular violence, this report seeks to encourage the public to empathize with survivors, understand their needs, and resolve to support the fight to eradicate this type of violence.

The findings presented below center the voices of those who continue to face the impacts of eye mutilation by state violence. The main focus of this report is the analysis of survivors’ stories, which allowed us to identify clear patterns in the repercussions that eye mutilation has had on their lives, their families, and, above all, on democratic expression and political participation. In addition, the report includes analyses by national and international human rights experts who have addressed the phenomenon of ocular violence from different angles in their professional practice. These contributions highlight key theoretical, conceptual, and technical elements that allow us to understand and address the consequences of ocular violence within a broader and more complex landscape in which the criminalization, stigmatization, and repression of social protest are intertwined. Finally, in order to formulate concrete recommendations to guarantee comprehensive care, reparation, and non-repetition, the actions of resistance and collective care practices that have emerged from the resilience of survivors and their families are documented. In this way, we seek to contribute to the preservation of the collective memory of ocular violence and to foster solidarity with survivors, with a view to building a critical social consciousness that allows for the use of various strategies to combat this type of violence. The report is divided into three sections: contextualization, post-traumatic impacts, and recommendations.

The first part proposes some key definitions and contextualizes some of the protest scenarios in which ocular violence has been used against demonstrators, including cases in Chile, Colombia,

Spain, Bangladesh, Brazil, and the United States. It emphasizes the excessive use of force and human rights violations by the state against demonstrators, as well as the perpetration of further attacks against survivors of ocular violence. As we will see below, human rights violations do not begin at the moment of eye mutilation, nor do they end when the person “recovers” from their injury or becomes medically “stable.”

The second part characterizes the post-traumatic impacts of ocular violence among survivors and their support networks. This section is based on interviews conducted with over 35 survivors of this violence, who described how the post-traumatic impacts affected—and continue to affect—various areas of their lives. Based on the accounts collected and recommendations from psychologists specializing in the aftermath of ocular aggression at the Center for Psychosocial Care (known as CAPS), five categories of analysis of post-traumatic impacts were identified, namely: relationships, work, education, family, and identity (in terms of self-perception and appearance). These categories form the basis of an analysis that allows us to establish the needs of survivors in relation to the consequences this specific type of state-sanctioned torture.

Subsequently, some practices of resistance by survivors of ocular trauma are presented, based on collective care, the resumption of some life projects, collective organization exercises based on the shared experience of survivors, and demands for the restoration of rights. To conclude, we formulate concrete recommendations for governments to advance in the areas of truth, justice, reparation, and non-repetition for ocular violence. This is based on survivors’ expertise by experience, as conveyed in their stories, as well as on the expert opinions of human rights defenders who have contributed to these demands based on their disciplines and knowledge acquired in the struggle for the protection of human rights.



VICTIMAS OCULARES

VICTIMAS

General Objective

- To define and denounce ocular violence as a systematic and transnational act of torture used by the state to affect protest processes.

Specific Objectives

- To highlight common patterns of illegal use of force in protest contexts.
- To characterize the permanent effects on victims based on the post-traumatic impacts associated with ocular violence.
- Generate demands that allow for truth, justice, reparation, and non-repetition.

Methodology

This report is the result of research that began in March 2025, in which 42 interviews were conducted: 35 with survivors of ocular violence and 7 with human rights defenders who are experts in different disciplines and areas of knowledge (i.e., history, law, anthropology, psychology, medicine, among others). The interviews were conducted in person and virtually and lasted between 10 and 60 minutes. The recruitment and contact process was carried out through human rights organizations in different countries, specifically Chile, Bangladesh, Ecuador, Peru, and the United States. Some of the CIIVO researchers already had contact with these individuals, which expedited the preliminary research process. Subsequently, preliminary meetings were held with some of the survivors to explain CIIVO’s objective. The participants were duly informed about the purpose of the interviews and the use of the resulting data in subsequent awareness-raising activities, including this report.

Broadly speaking, the research method is based on hermeneutics, understood as the “art of interpretation.” This research approach seeks to understand the effects and ongoing post-traumatic impacts based on the experiences narrated by survivors of ocular violence. Interpretation

based on this approach is crucial, as it seeks to analyze each of the responses provided from a perspective of understanding the feelings of the interviewee, in order to find common patterns and delve deeper into this type of human rights violation as acts of torture that leave permanent effects on the lives of survivors of ocular violence.

The interview schedules were developed through dialogue between CIIVO researchers and psychosocial support staff at the Center for Psychosocial Care (CAPS). Collaborating in this way allowed us to tailor the questions to ensure that the interviews would be psychologically safe for survivors while still holding space for the complexity and heterogeneity in their stories. Also, based on their expertise working with survivors of state violence, we agreed on five categories of analysis useful for understanding the post-traumatic impacts that survivors of ocular violence often experience. These five categories have a cross-cutting focus on determining the effects over time, that is, investigating the type of relationships that are maintained and disrupted before, during, and after ocular violence.



Table 1: Outline of the categories of analysis. Authors’ own.

Category	Function of the research.
Family impacts	This category explores the family relationships of survivors, specifically the processes of revictimization of some families, as well as processes of reparation, support, forms of healing, and families as subjects affected by this action.
Educational Impacts	This category explores educational processes interrupted by ocular violence, as well as the difficulties faced when attempting to resume them after the eye injury.
Identity Impacts	This category is one of the most robust in the report, as it explores the identity and outward appearance of survivors of ocular violence, that is, their self-perception, dreams, and personal goals (life project).
Relational Impacts	This section addresses the socio-affective relationships of survivors of ocular violence, the changes they experience, the perception of their close social circle, and ways of readjusting to these types of relationships.
Work Impacts	The work impacts section addresses survivors’ employment situations, whether they have continued working, the barriers imposed by society in this regard, and their daily activities in relation to their work practices.
Diagnosis	This section groups together the different diagnoses received by survivors of ocular violence after their assault, which is essential for identifying patterns in this type of assault.

The type of interview conducted was semi-structured. We prepared a list of guiding questions based on the dialogue with CAPS, but in practice, the responses from the survivors were extensive, and more questions arose during the interviews themselves, which allowed us to understand many more elements of the subjective experience of each of the people interviewed. Through these emerging questions, richer data was added to the categories of analysis outlined above. Subsequently, all the information was systematized. To do this, we relied on the expertise of two

political science graduates from the National University, who guided us in the general preparation of the document, but also in the correct way to code the information and perform the qualitative analysis. Consequently, we used our own analysis matrix, created using Excel, with the criteria shown in Table 1. Additionally, we implemented the Qual Coder qualitative data analysis software thanks to the recommendation of researcher Estefany Castillo, whom we met during the interview process. This package proved useful for grouping and analyzing blocks of information according to the categories listed above.

The analysis process coincides with the structure of the document presented above in the introduction. It should be noted that many voices participated in the preparation of this document; among them, we sought to foreground the voices of survivors of eye injuries perpetrated in the context of social protests around the world. Based on their experiences, they provided us with guidance, direction, and new ways of thinking and constructing ideas.



ANIMAL
DE
TRABAJO

ANIMAL
DE
TRABAJO

LO
QUE
GANAMOS EN
LAS CALLES,
LO
DEFENDEMOS
EN LAS
CALLES.



03-0292

BLES

Historical and conceptual background

We define ocular violence as the systematic act of state forces mutilating the eyes of protesters. Based on the evidence that exists regarding the exercise of public force in Colombia, we maintain that this type of violence is exercised under the paradigm of the internal enemy—which suggests that anyone who opposes the hegemonic regime of a country is an enemy of the homeland and represents a risk to public order (Rincón Oñate, 2019; Casas Ramírez, 2019)—with the aim of producing an exemplary punishment. In Colombia, the logic of the internal enemy stems chiefly from the National Security Doctrine that spread across Latin America in the 1960s. This counterinsurgent legacy has since been internalized and ideologically entrenched among state forces, particularly those specializing in the control of social protests (Casas Ramírez, 2019; Cruz, 2016). This is not an abstract paradigm. The rubber bullets and tear gas canisters deployed by riot police against protesting citizens are nothing less than the materialization of this ideology: surviving ocular violence entails carrying the traces and shrapnel of the logic of the internal enemy within one’s body and living daily with the exemplary punishment that instructs others on the unacceptability of protesting against the status quo. In this section, we develop and expand on these concepts to consider how they can be applied to the longer and more complex history of ocular violence around the world.

To begin with, it is essential to understand that these types of attacks are not random: they do not depend subjectively on a police officer who misused his weapon, nor are they the result of the actions of a few “bad apples” who tarnish the institution’s name. Reducing serious human rights violations caused by excessive use of force to a matter of discretion or implicit bias is to ignore a broader set of decisions, paradigms, and structural patterns that demonstrate systematicity and point to institutional, not individual, responsibility (Dymond, 2022; CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS, 2023; INCLO, PHR, & Omega Research Foundation, 2023).

Ocular violence is also not a recent phenomenon. The first records of eyes mutilated by the state’s use of force can be traced back at least to the second half of the 20th century. It is worth noting that these initial records coincide with the emergence and growing use of less lethal weapons for crowd control or citizen protests, developed as a supposedly “safer” and “more humane” alternative to the use of conventional force. In the beginning, protocols for the use of

these weapons were virtually non-existent, and eye injuries were mostly inflicted by the military, particularly in colonial contexts (Velásquez Valenzuela, Fernández Carter, and Reynhout, 2021; Rocher, 2021).

More specifically, ocular violence as a phenomenon of state repression goes hand in hand with the use of ‘less-lethal’ crowd control weapons to confront different forms of social protest. In 1970 in Northern Ireland, the cases of Emma Groves and Richard Moore became known: they were each blinded in both eyes by rubber bullets fired by the British army. Emma Groves, who would later go on to become a fierce opponent of rubber and plastic bullets, was shot from less than 8 meters away in the midst of an act of peaceful resistance: while British soldiers were raiding neighboring houses, she decided to loudly play the song “Four Green Fields” on her record player, a hymn to the dignity and sovereignty of her country in the face of the British invasion. Richard Moore, a 10-year-old boy, was also blinded by rubber bullets in Northern Ireland. These and other cases led to the emergence of movements fighting for the elimination of rubber bullets, such as the United Campaign Against Plastic Bullets, founded in 1984. For more information on the case of Northern Ireland, see, for example, the report on non-lethal violence in Northern Ireland compiled by Curtis (1982) and the testimony of Emma Groves in Calamati (2002).

Another example of ocular violence in the second half of the 20th century can be found in the Palestinian uprisings against the Israeli occupation of their territories, known as the First Intifada. During these intifadas, the first investigations into the systematic nature of ocular violence emerged, as around 500 people were seriously injured in the eyes due to the use of rubber bullets by Israeli forces in Gaza and the West Bank. In a medical study published in the ophthalmology journal *Eye*, Jaouni and O’Shea (1997) report on the severity of the ocular casualties sustained during the first intifada. Several injured individuals had to undergo eye removal (evisceration) to avoid complications, while many others were left completely blind. These events raised international alarm bells, and “shooting at the eyes” was identified as a strategy used by the military to instill fear in protesters. This pattern has not been left in the past: ocular injuries were also reported during Operation Protective Edge (the 2014 Israeli offensive in Gaza) and the mass demonstrations of 2018 and 2019 known as the Great March of Return (Guerrero Rivière and Obermaier, 2026). Following the intensification of the conflict that has plagued the region since 2023, a worrying trend has also been identified with regard to ocular violence: the high proportion of pediatric patients presenting with severe eye trauma (Hawwa et al, 2025).

During apartheid in South Africa, several cases of eye damage caused by rubber bullets were also reported in the context of social protests, especially after plastic bullets were introduced in 1976 (for example, see Cohen, 1985). According to historical reports, the police and army aimed plastic bullets directly at the heads of protesters (cf. Amnesty International & Omega Research Foundation, 2023). Despite this, there were no known cases in which the justice system investigated the police and military personnel to establish accountability for these actions. Only after apartheid ended were some general investigations opened into human rights violations during apartheid; however, none of them focused on the systematic nature of ocular violence.

Egypt was another scene of human rights violations during the Arab Spring. After the fall of President Hosni Mubarak in 2011, several protesters gathered to reject the military junta that took power. It was then that Mahmoud Sobhi El Shinawi, a member of the security forces who was part of the repression of social protest, shot protesters directly in the eyes with his shotgun. His actions were recorded and he was nicknamed “the eye hunter,” responsible for dozens of cases of eye mutilation among Egyptian protesters, in addition to the more than 60 eye injuries registered by human rights organizations in the context of these protests. Some time later, El Shinawi was sentenced to three years in prison, and although the sentence is considered by many to be lenient and symbolic, the fact is that it sets an important, if unusual, precedent for convicting a public official for this type of assault (Tomlin, 2011).

In South America, cases such as those in Chile (2019) and Colombia (2019, 2021) were no exception to this phenomenon of police brutality. In Chile, during the social upheaval that began on October 18, 2019, more than 500 eye injuries were recorded. In Colombia, in the city of Bogotá alone, more than 80 eye injuries were recorded during the 2021 national strike, according to the report *Represión en la mira* (“Repression in sight”) prepared by several human rights organizations (CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS, 2023). some of the most egregious cases of human rights violations that occurred during these days of mobilization.

“There is the case of Mario Acuña: I don’t know if you know him. He was beaten by five or six police officers in the street at night, and they ended up causing him brain and physical damage. Mario is currently bedridden” (Langarini, 2025).

“I know of the case of a fellow journalist who lost his eye due to a jet of water from a guanaco. The water, mixed with caustic soda and chemicals, burned his face and destroyed his eye. There are videos and evidence, but Pacto did not want to help him for political reasons: his media profile was “inconvenient.” Today, that colleague suffers from severe physical and psychological consequences, without work or medical support. Many cases are similar: state agencies and institutions only intervene when there are cameras or press present. Most of us are simply silenced” (Quinteros, 2025).

In Chile, there were specific cases of human rights violations, such as the alteration of deterrent weapons, especially the water cannons on armored vehicles. These weapons were used repeatedly, systematically, and deliberately to cause direct harm to protesters, as suggested by some of the accounts of survivors of eye injuries. In addition to the prevalence of serious injuries resulting from attacks with these water cannons, the deliberate and repeated practice of adding various chemical compounds that pose significant dangers to public health, in violation of the guidelines for the use of this type of weapon, is particularly concerning. For example, one survivor recounts that:

“In addition to water, they add tear gas powder and caustic soda to the guanaco. When it sprayed water, the air was contaminated with tear gas and acid. I saw with my own eyes a boy burning in chemical fire. It was horrific” (Muñoz, 2025).

These human rights violations are just one specific example from a country where police brutality became a reality through the repression carried out by the Chilean police force. Protocols on the use of force were clearly violated, with less lethal weapons being altered to exacerbate their effects, as shown above, but also with indiscriminate use of force against protesters. In addition to its indiscriminate nature, it is crucial to note that the use of force during the social unrest was not proportional, as the degree of physical damage that can be caused by the weapons used by the police is in no way comparable to the danger posed by protesters’ occasional use of improvised weapons.

1. In Chile, watercannons are colloquially known as guanacos.
2. Pacto, from the Spanish acronym for the Plan for the assistance and care of victims of ocular trauma, is the program run by the Chilean Ministry of Health aimed at survivors of ocular violence.

It was not an accident, it was not “bad apples”—it is a repressive model that is systematically reproduced around the world.

The media generally attribute ocular violence to isolated incidents involving some of the police officers in each country. Similarly, politicians sympathetic to the regime against which the protests are directed tend to repeat a script that, at most, merely regrets what has happened and assures that “the relevant investigations” will be carried out to determine the steps to be taken. At first glance, such investigations may seem promising; however, they often result in a discourse that absolves an institution of all blame and creates the narrative that ocular violence is the result of personal decisions made by the officer who fired the weapon. Such a procedure might be convincing if cases of ocular violence were few and far between, or if they did not coexist with a general tendency to blind and criminalize social protest in other ways (for example, through the administrative detention of protesters or by using stigmatizing discourse that is replicated in the mainstream media). In other words, any response to police violence that does not critically question the institutional discourses and practices that ultimately legitimize acts of torture and violence against citizens is insufficient.

Systematic acts of ocular violence are couched in two fundamental categories that manifest themselves in the use of force against social protest: the internal enemy and exemplary punishment. Specifically, ocular violence is based on the use of the bodies of protesters—labeled as internal enemies due to their expressions of discontent—to teach citizens a lesson by showing them the “consequences” of protesting. Though the wound itself might be inflicted on individual bodies, the injury is felt by society as a whole. When the shot is fired, the protest may disperse, but more broadly, aggression by the police causes citizens to stop perceiving public demonstration as a legitimate and protected avenue for political participation. The excessive use of force discourages social protest, presenting it no longer as a right, but as a scenario that carries a real risk of serious injury. The mutilation of individual eyes is thus part of a collective lesson aimed at citizens, in which the threat of pain is used to ensure compliance (Velásquez Valenzuela, Guerrero Rivière, and González, 2024; Osorio-Rozo and Olarte-Cancino, 2023).



Blinding the critical eye: ocular violence and the logic of the internal enemy

Accounts from survivors of ocular violence around the world expand on the concept of the internal enemy. Even in regions where this concept has not been applied to existing analyses, it is possible to glimpse the connections and shared patterns between practices of stigmatization and repression toward groups or individuals who challenge the status quo (understood as the state order) or who do not fit into the unequal social models that are generally already established in societies.

In Bangladesh, those who opposed Sheikh Hasina’s regime were heavily repressed. One survivor explains that “to understand the regime’s violence, one must remember the 2009 BDR massacre, in which 57 army officers were killed and their wives raped with the support of Indian intelligence agencies and paramilitary forces” (Pulok, 2025). In this case, it was those who opposed the authoritarianism of the Awami League who suffered all these kinds of abuses.

In Spain, for example, repression against people from Catalonia was common. As a result of their independence struggles and more general activism for decent housing, some Catalan groups are also classified as internal enemies, as a danger to public order and national stability. Carles Guillot recounts that he was attacked while resisting eviction from a squatted house: “I was shot on July 17, 2001, between nine and ten in the morning, in front of a squatted house that the police were illegally evicting in the La Salut neighborhood (Barcelona). We had an alert system between squatted houses and social centers; when we heard about the eviction, we went to protest” (Guillot, 2025). Here, Guillot was marked as an internal enemy, a supposedly “dangerous” individual, for opposing the status quo when he attempted to thwart an illegal intervention by law enforcement. More than twenty years later, his case resonates with recent attacks on U.S. citizens who organize to prevent the illegal detention of migrants by ICE agents (immigration control officers): by January 17, 2026, there were already at least two cases of eye mutilation among those protesting against deportation raids (Planas, 2026).

Esther Quintana, like Guillot, was attacked in Spain: “The context in which the attack took place was a general strike in 2012. That year there were two general strikes, one in March and another



in November. I was attacked during the one in November. These strikes were in protest against the government’s cuts to social rights, education, health care, and in general all areas that directly affect the population” (Quintana, 2025). Her labeling as an internal enemy is more similar to what protesters and participants in the social uprising in Chile and the national strike in Colombia suffered, and to a certain extent also those who took part in the protests in Bangladesh against a general political regime. In these cases, the mass protests reflected expressions of discontent from various sectors of the population who were, in some way, othered.

In short, we can see how these cases occur in the context of protests against state inequalities, decent housing on the one hand, and the curtailment of minimum rights for a dignified life in the population on the other. When groups or individuals decide to take action against these injustices, they are treated as “internal enemies” and subjected to dehumanizing treatment, that is, by stripping them of their humanity in order to attack, mutilate, humiliate, or assault them, etc. For Henry Salazar, an expert on human rights violations in Colombia, a “negative Other” has been created, and from there, the disproportionate use of force has been legitimized. Salazar, from a performative perspective of language, analyzes how certain discourses not only describe reality but also produce it, enabling practices of systematic violence such as eye mutilation.

Exemplary punishment: the eye injury as collective punishment

The face is one of the first forms of socialization. It is through facial expressions that emotions and feelings are conveyed; nonverbal communication is essential for socializing with other people and, as one survivor puts it, for facing society. Therefore, when a person is subjected to ocular violence, it affects not only the functioning of the eye as a visual organ, but also their interpersonal relationships, their characteristic forms of communication, their confidence, their security, and their life project in general.

Human rights researchers and psychologists at CAPS have used the term “exemplary punishment” to describe the way in which repressive state forces use ocular violence to send a message to social protests and demonstrations. Blinding one or both eyes is not collateral damage from less lethal weapons; it is not an exception to the rule, nor is it a “technological malfunction”. It is not



an “accident” or a single state official’s mistake. On the contrary, it is a demonstrably systematic pattern that comports with the logic of the internal enemy and, when used during demonstrations, effectively disperses other ‘unaffected’ protesters. In other words, the biopolitical management of the internal enemy is carried out through exemplary bodily punishment that ultimately serves an educational function by instructing citizens on the scope of state power. When a protester witnesses ocular violence, they automatically tend to feel fear or apprehension about going out again, especially when the resulting injury is permanent and exacerbated by other conditions of state neglect and economic precarity. This directly affects democracy and people’s fundamental rights to disagree with a regime, and is particularly worrying in countries facing transitional processes and legacies of armed conflict. Protecting avenues for political participation is a fundamental measure for addressing political disagreements, preventing the emergence of new violent conflicts, and promoting processes of social transformation centered on survivors of human rights violations (see, for example, Point 2 of the Final Agreement signed between the Colombian government and representatives of the FARC-EP in 2016).

As we have discussed above, the prevalence of eye injuries in protest contexts indicates a systematic approach to targeted mutilation. In turn, this systematic approach is part of a logic of punishment and deterrence of those considered internal enemies for participating in social protests, or for having some proximity (geographical in some cases, ideological in others) to them. Social theorist Jasbir Puar questions the assumption that injuries caused by the use of less lethal weapons are negligible “collateral damage” compared to the value of maintaining public order without resorting to conventional weapons. Rather, mutilation (in general) and ocular violence (in particular) are part of a strategy to weaken the bodies and wills of social movements (Puar, 2017; Guerrero Rivière, 2025). In this sense, ocular aggression is experienced as a permanent and prolonged punishment, as the injury and its aftermath plunge the victim into constant darkness in relation to questions such as: Why did I go out to protest? Was it my fault? Did I deserve what happened? For example, in his play *El Retumbar de Mayo a Media Tarde* (The Echo of May in Mid-Afternoon), Sergio Romero, a survivor of ocular violence, explores his own internalization of these discourses of shame and blame through the character of a judge. Thus, for both the victim and their inner circle, a frequent result of this rumination is to consider themselves guilty of what happened, or to understand the aggression as a deserved, rightful punishment, either out of fear or of a kind of “false consciousness” regarding the relationship between the state and its citizens.



On the other hand, mutilation serves as an example because it generates anxiety and fear in the society where it occurs. People are persuaded not to “cause trouble,” that is, not to mobilize and not to exercise their rights, since the risk of being attacked becomes the determining factor in the decision to attend a demonstration. Protest actions are diluted and, with them, the force of demands and pressure on national governments to listen to the proposals and claims of those who demonstrate. The fear of being injured affects not only those who regularly demonstrate, but also their support networks. It is common for the relatives of activists and human rights defenders to try to persuade them not to go out to demonstrations, not always because of their own political disagreements with the demands of the protest, but rather out of concern for the well-being of their loved ones. “Son, don’t go to those demonstrations, can’t you see they’re shooting at people”: such warnings are well-known to people who have participated in social protests, which illustrates how the exercise of democracy is fragmented when fear is instilled among citizens, as the interest in political participation conflicts with that of caring for one’s own physical integrity. In short, exemplary punishment creates a fracture in the social body: collective struggles based on the mobilization of individual bodies in the streets are blinded by the fear that those same bodies will be, in the most literal sense, fractured and brutalized by the police forces.

The ableist roots of weaponizing disability

Before delving into the post-traumatic impacts of ocular violence, it is crucial to emphasize that the use of mutilation as an exemplary punishment both depends on and reproduces discriminatory perspectives regarding disability (PAIIS, Temblores, and Amnesty International, 2021). Recent research and reports on eye injuries around the world show a tendency to interpret mutilation as a fate “worse than death” due to the conditions of social exclusion and precariousness faced by survivors, which are part of the post-traumatic impacts, but also part of a broader landscape of ableist discrimination (Guerrero Rivière, 2025). When life with a disability is perceived as a “life not worth living,” a risk, a “burden” on the family, or a “pitiful” condition, the threat of mutilation becomes even more effective and its social effect as punishment becomes stronger. Furthermore, the visible marks left by ocular violence exacerbate and re-entrench negative connotations of bodily differences. Thus, those who survive eye mutilation not only navigate environments in which their contributions are ignored or belittled (because of a visual impairment, for example), but also experience rejection based on the interpretation of their scars as the mark of a supposed

internal enemy. In this report, we collect experiences and stories from survivors of eye injuries in countries that have signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) , which seeks to promote and ensure the social inclusion of persons with disabilities and guarantee that this population enjoys dignified living conditions. These same states, however, have been involved in the mass production of injuries that often result in disabilities (such as eye mutilation) through the use of “less lethal” force. This dissonance between the promise to protect the rights of persons with disabilities, on the one hand, and the use of disability as a threat or punishment, on the other, raises a fundamental problem regarding the use of force and the responsibilities of the State towards its citizens. With this in mind, we will tentatively address the post-traumatic impacts of ocular violence, the possible contributions of disability justice in characterizing and denouncing it, and formulate ways to assist, support, and demand rights for those who have survived it.

3. Colombia, Chile, Peru, Ecuador, Spain, the US, and Bangladesh have signed the convention.





Post-traumatic impacts

Defining the post-traumatic impacts of such a specific yet widespread injury is a difficult task. To do so, we rely on the research of psychologist Daniela Buriticá, who has supported the defense of human rights through her practice, accompanying survivors of ocular violence and political prisoners. In her master’s thesis, Buriticá (2024) designs and applies a specific psychological intervention strategy for survivors of ocular violence. The intervention, with a primarily narrative approach, addresses different aspects of the post-traumatic impacts experienced by survivors.

Generally, post-traumatic impacts correspond to the symptoms associated with post-traumatic stress disorder (PTSD). Although this diagnosis may encompass some of the consequences of ocular violence, it is not always sufficient to account for the social dimensions of its effects and the contextual aspects of the trauma acquired. With this in mind, Buriticá classifies the psychological impacts of ocular violence in further detail: “The psychological impacts were grouped into three subcategories that encompass the differentiated nature of the symptoms and effects resulting from the injury: cognitive, emotional, and experiential impacts” (2024, p. 20). Based on discussions with other psychologists and considering the experiences of survivors of ocular violence who participated in the research and preparation of this report, we chose to group the impacts into four types: relational, identity, family, and work.

In this section, we delve deeper into and characterize the different post-traumatic impacts that affect survivors of ocular violence based on narratives extracted from interviews conducted by CIIVO. The impacts are organized according to the narratives of the aforementioned victims and psychologists.

Identity

The impacts on a survivor’s identity can be understood as the set of profound transformations that a person experiences in the way that they: perceive themselves, relate to their body, construct their personal history, and connect with others, as a result of the disruptions to their life trajectory caused by ocular violence. In the case of ocular aggression, these impacts are not limited to

the loss or injury of the eye itself, but rather produce an upheaval in survivors’ self-perception, affecting their communication with the social world and transforming their life plans. The eye, as the central organ of perception, orientation, and mutual recognition, plays a fundamental symbolic role in the constitution of the self; harming it therefore entails a radical alteration in the relationship between the body, consciousness, and the world.

An eye injury causes a rupture in an individual’s biographical continuity. Before the attack, identity is usually anchored in bodily autonomy, confidence in one’s own senses, future prospects, and belonging to certain social, work, emotional, or sporting roles. After the injury, these coordinates are profoundly altered. The person is confronted with a body that no longer responds in the same way, an unfamiliar body image, persistent functional limitations, and a social gaze that, in many cases, reduces their identity to the status of ‘victim,’ of ‘damaged goods,’ of tragedy. This process triggers multiple senses of loss and grief: for the lost or damaged body, for the previous identity, for the truncated projects, and for the relationships that could not withstand these changes.

Addressing impacts on identity therefore requires recognizing that eye trauma not only injures the body but also reorganizes the sense of self. It is an experience that forces the reconstruction of identity in conditions of vulnerability, amid intense emotions such as anger, sadness, shame, fear, and frustration, but also processes of reframing, resistance, and in turn, the politicization and democratization of their pain (cf. Tamayo Gómez, 2022). This report adopts a broad understanding of harm, giving centrality to the voices of survivors and their stories as legitimate sources of knowledge about the profound effects of state violence on subjective life.

To reiterate, an assault on the eye is not merely a localized traumatic event affecting the body. It is a disruptive experience that permeates the entire existence of the victim and profoundly—and usually irreversibly—transforms their personal, social, and symbolic identity. This is why damage to the eye as an organ alters not only visual perception, but also social perception: the way in which the subject recognizes themselves, represents themselves, and is recognized by others. After the assault, the person who previously recognized themselves no longer exists in the same way. The processes by which survivors mourn their identity are marked by loss, reinterpretation, and constant tension between what was and what is. This causes confusion, problems with self-recognition, low self-esteem when looking in the mirror, and frustration at not recognizing one’s own face.

Before the attack, many survivors describe an identity linked to autonomy, bodily security, and future prospects. The assault violently disrupts that vital continuum. As Juan Guerrero recounts, “Before the attack, I played high-performance soccer, trained, and competed regularly; after the injury, I can only do so as an amateur and in a moderate way. The loss of depth and spatial perception affects my performance.” In this testimony, the injury not only limits physical activity: it dismantles an identity built around physical capacity, high performance, and the social recognition associated with sport.

This rupture of identity is expressed forcefully in the relationship with one’s own body. Carles, a survivor of an assault that occurred decades ago, expresses it bluntly: “I find it hard to look at myself in the mirror; twenty-four years after the assault, I still don’t recognize the face that the mirror reflects back to me.” The mirror in which he sees himself every day becomes a device for daily confrontation with loss and bodily otherness. Bodily identity is thus fragmented, as the face no longer matches the internal image that the subject has of himself.

This rupture extends to everyday life and the simplest actions. Activities that were once routine, such as pouring a glass of water, walking through crowds, or climbing stairs, now require constant concentration and take longer. Pablo Montiel describes it this way: “Over time, I understood that I had to consciously concentrate to do things that I used to do reflexively.” This need for bodily hyperawareness transforms one’s relationship with one’s environment and with oneself.

Ocular violence also has a profound impact on the emotional dimension and self-image. Johan Suárez recounts: “Before the attack, I was an optimistic and smiling person... after the attack, I lost that innocence, that feeling of being whole. I feel broken.” The idea of “being whole” is fundamental because it makes a person feel a sense of “lack,” and this, in one way or another, subordinates them in society and generates insecurities. The previously confident, secure identity is replaced by an identity marked by fragility and a permanent awareness of loss.

This internal transformation is often accompanied by changes in character and ways of relating to others. Alejandro Hernández points out that, after the attack, his personality “became more closed and reserved.” Social identity is reconfigured; the subject ceases to occupy certain spaces and develops ways of becoming invisible so as not to be seen solely through the lens of their injury. Alejandro expresses this clearly when he states: “I don’t want people to see me as a victim, I want

them to recognize me as Alejandro Hernández, social communicator.” Here, a central tension in the post-traumatic identity process emerges: that of recognizing oneself as a victim or a survivor. On the one hand, naming oneself as a victim highlights the injustice of the harm suffered, but it is also associated with a position of defenselessness, passivity, or vulnerability. On the other hand, the word “survivor” alludes to the active and constant practice of resilience and mutual support necessary to cope with the aggression and its consequences (see, for example, Guerrero Rubiano et al, 2024). For the purposes of this report, we have decided to insist upon using the category of survivors, taking into account the symbolic dispute raised by some survivors who struggle to be recognized not only for what happened to them, but also for their virtues and qualities.

Interpersonal relationships are also profoundly altered by the disruption of identity caused by ocular aggression. Cristian Rodríguez explains that “everything is reconfigured: trust, affection, intimacy, and even the way one sees oneself.” Ocular trauma not only affects the individual but also rearranges the emotional fabric that surrounds them. Families, partners, and friends (as we will see later) must adapt to a new version of the subject, a version that is often characterized by irritability, depression, or withdrawal (symptoms consistent with PTSD). Johan Suárez points out that certain people “could not bear the change and walked away,” deepening the feeling of loss and isolation.

The impact on identity is intertwined with complex mental health processes. Atoq recounts the development of depression, insomnia, and anxiety attacks, as well as the emergence of self-destructive thoughts and recurring nightmares about the moment of the shooting. These manifestations are not isolated symptoms, but expressions of a wounded identity attempting to process an experience of extreme violence. The subject perceives themselves as “another person,” trapped between anger, sadness, and frustration, which reflects a profound rupture in their biographical narrative.

However, the identity processes following the eye injury are neither homogeneous nor linear. In some cases, the traumatic experience led to profound life changes, such as giving up drugs, adopting new values, or rediscovering work, fatherhood, and study. In these accounts, the pain does not disappear, but a reconfigured identity emerges that incorporates the wound as part of a new narrative of meaning. Other survivors channel the experience into activism and political action. Soren Stevenson points out that, although he sometimes feels othered in social spaces, the



attack also opened up the possibility for him to speak publicly and be heard, even transforming his path on the political stage—notably, in January 2026, Stevenson came into office as a Minneapolis city council member.

Finally, the identity dimension is also expressed in the daily relationship with the prosthesis, eye hygiene, and ongoing care of the injured body. Giovanni García describes how the daily routine of cleaning and maintaining the ocular conformer generates feelings of revictimization, forcing him to “look in the mirror constantly.” The injured body demands continuous attention, reminding him again and again that the damage was imposed, and that it is neither natural nor chosen. This daily repetition consolidates an identity marked by memory and the constant revictimization of ocular violence.

In conclusion, ocular violence produces a profound identity fracture that permeates the body (and its new capacities and debilities), emotionality, social relationships, and life projects. Post-traumatic identity is not simply a different version, with one missing eye or a fracture in the face, but a different configuration of the self and its relationship with the world, marked by losses, resistance, and processes of resignification and struggle. Understanding these impacts on identity is essential for the design of comprehensive reparation policies, for therapeutic processes, and for the construction of collective memory, because only by recognizing the depth of this fracture is it possible to move toward real forms of justice and non-repetition, and toward political coalitions for social inclusion.

Family

Eye aggression does not occur in isolation, nor are its consequences limited to the survivors themselves. Although the initial impact is inscribed on a person’s body, its effects immediately spread to their most intimate circle: family, partner, or closest friends. It is in this first ring of social bonds, care, and belonging, that much of the possibility of sustaining daily life after trauma is at stake. Unfortunately, the failure to provide this care in these first circles has led to self-harming behaviors and even suicide among several comrades who have suffered ocular aggression. As discussed above, one effect of mutilation as an exemplary punishment is to activate a field of tension where guilt, silence, reproaches, and political and emotional fractures appear in these first circles of affection. When listening to the interviews, it becomes clear that the “aftermath” is

not defined solely by the injury, but by the way the environment responds: there are trajectories where the family is strengthened or even emerges for the first time as a source of support, and others where the family becomes a second scene of violence through revictimization, this time symbolic, moral, or emotional. Between these two extremes (support and abandonment), there are multiple political discourses that family members adopt and that make them think in one way or another.

In the first scenario, when the family accompanies, a recurring tone emerges: the trauma does not belong exclusively to the survivor—it is a shared trauma. Carles explains this as follows: “for them, the event was traumatic, but they have supported me at all times. In that sense, I have not noticed any difference.” The phrase contains a crucial detail: support does not eliminate pain, but it cushions the breakdown that often occurs in relationships. In this scenario, the family does not ask what the person did to deserve it, but rather what they need to sustain themselves. In addition, there is an element that operates as a form of support in several interviews: a political understanding of the context. Carles explains that his family “was quite politicized and they knew that I was too,” which prevented the event from being interpreted as individual recklessness. This interpretation changes the survivor’s position: they are not guilty, they are survivors of state repression.

Something similar is felt in Álvaro López’s story, where family support appears as continuous emotional support, but is interspersed with the pain of seeing those you love suffer. Álvaro acknowledges that the impact “was even harder for them” and confesses that, even though they tell him they see him the same, “I notice the sadness in their eyes, especially in my mother’s.” There is a paradox in this form of support: the family becomes a refuge, but at the same time it becomes an emotional mirror that reflects and compounds the extent of the damage. In other words, even if it is not their intention, seeing the suffering of family members over what has happened reminds them of the seriousness of the violence that occurred. However, Álvaro affirms that his family “has been my greatest emotional support” and that from the beginning he was clear that he had to move forward “for them.” Here, the bond not only sustains: it also drives a revolution through survival. It is not a question of “overcoming” in order to forget, but of moving forward so as not to cause a family breakdown. Today, Álvaro has managed to complete his studies and move forward, always motivated above all by the well-being and unity of his family.

Daniel Jaimes strongly conveys this idea of “family tragedy” and emotional reorganization. He describes a small, close-knit family and recalls that the attack was experienced “similar to the death of a loved one.” This comparison is significant because it suggests that eye trauma causes deep grief, as if something had died. But Daniel adds a twist: “However, that experience made us stronger.” He explains this with a phrase that seems to encapsulate the change in internal hierarchies: “I received from them a love and support that I had not previously valued enough.” In other words, trauma does not only breaks things; it also redistributes what matters, shifts priorities, and reveals loyalties. In this scenario, the survivor is no longer just the one who receives care, but also becomes someone recognized for their strength and, therefore, respected as a source of knowledge and experience.

In Johan Suárez’s case, another nuance can be observed: family support appears to be linked to the loss of independence. Johan says that he used to be “independent, both financially and emotionally,” but that this independence changed and he had to depend on his parents “even financially,” at least in terms of recovering from the eye injury. What is interesting about his story is that he does not romanticize this dependence: he recognizes it as part of the wound. However, he also emphasizes that “paradoxically, the tragedy also brought us closer together.” This word paradoxically reflects how trauma can bring people closer, but at a cost: life is reorganized, and the place of the autonomous adult becomes fragile. Even so, Johan describes how, when he wanted to isolate himself “because of the pain and psychological trauma,” his family insisted on accompanying him, and thanks to that he understood “that he was not alone.”

In other similar accounts, support takes on more concrete and material forms. Muhaimin says that family ties “have become even stronger” and that his family has been “my greatest source of emotional, physical, and financial support throughout the recovery process.” This is not an abstract phrase: he describes his father accompanying him “to all his medical appointments” and his older sister advising him on medical matters. Here we see how family support translates into presence, management, and sustained care. The family becomes important insofar as it provides a kind of daily infrastructure for surviving the medical system, paperwork, rehabilitation, and fear.

Even when the support is not perfect, there are stories that show an evolution toward care and assistance. Pablo Montiel recalls that at first his family “blamed me a little for being there,” with

comments about “why I didn’t take better care of myself.” But he makes an important distinction: “it wasn’t a huge reproach,” but rather an awkward way of processing the shock and concern. Over time, he says, his family “stopped insisting that it was my fault. There is no longer any reproach, only support.” This shift reveals another dynamic: the family also goes through their own learning process, and sometimes it takes time to understand that the attack is not a moral consequence of the protest, but an unjust harm. In these cases, although family support may seem like a setback at first, it later becomes an achievement and a move towards understanding the legitimacy of protest as a fundamental social and democratic good.

Giovanny García, for his part, speaks of constant support that becomes “more evident” after the attack. He says that his relationship with his family was good before and “continued to be so afterward,” but that in the process “that support became much more noticeable.” This idea is repeated: trauma does not necessarily produce a new bond, but it intensifies it, makes it visible, makes it indispensable. And this is where the first scenario shows its central contribution: family support does not erase the trauma, but it prevents the person from being alone with the rupture; it sustains the narrative that life is still possible. Generally, any situation that brings a person close to death allows for a greater and fuller appreciation of life after overcoming that situation.

Family support, when it exists, operates as a factor of daily repair. It does not erase the aftermath, but it reduces subjective disintegration. It makes it possible for the person not to be trapped in shame or isolation. It allows the survivor to be seen not only as a victim, but as someone who struggles, adapts, and moves on. Álvaro López says it transparently when he explains that he did not want his family to see him “only as a victim, but as someone who struggles.” That phrase becomes a bridge to Daniel Jaimes, when he states that his family now admires his strength. And it connects with Johan, when he acknowledges that he wanted to isolate himself, but his family insisted on accompanying him. In these connections, family support appears as a concrete form of dignity: accompanying someone means saying “your life still has value,” even if the outside world does not recognize it. This stands in stark contrast to a second trend in the interviews that shows how trauma is compounded when damage to family ties is added to the eye damage. In this scenario, the family does not accompany, or accompanies in a conditional way, blaming, re-victimizing, punishing, or imposing silence. The aggression then becomes not only an injury, but also a cause of tension in the family. In these narratives, the family is not a support network, but an unsafe space.



With painful clarity, one survivor laments: “My family did not support me. Instead of accompanying me or asking how I was, they criticized me for going to the march. They excluded me from family gatherings and treated me as if I were guilty of my injury.” Here, the eye assault is explicitly reinterpreted as punishment. The family, instead of seeing the event as violence, reads it as a simple consequence for their relative’s actions, which revictimizes the survivor and makes them doubt themselves, leading them to believe that they are to blame for the assault. And that produces a profound relational breakdown: the person loses not only an organ, but also a symbolic place of belonging. The survivor ends their story with a phrase that serves as a thesis: “family is not the same as relatives.” In saying this, they redefine their emotional identity and reconstruct the concept of family based on actual care, not biological ties: “my real family is my wife and son, who were with me every step of the way.” This gesture is also a form of subjective reparation, albeit not a very common one: if “relatives” abandon them, the subject creates another possible family and makes these new bonds their form of resistance.

Another story describes another type of distance, more prolonged and structural: “My relationship with my family has always been distant... after the attack, I decided to distance myself even more.” In his case, the conflict intersects with political activism: many “did not accept the causes he fought for.” The interviewee reaches an extreme point: “I haven’t seen my mother in over a year.” However, his story does not end in total isolation, but in the creation of another network: “I have found support in my colleagues... there is a network of solidarity... a collective support system.” This shift is key to understanding the second scenario: when the family fails, substitute networks emerge that fulfill functions of care and meaning. In terms of identity, the subject takes root in communities of experience.

One of the harshest scenes in this section shows how the lack of support is expressed at the very moment of recounting what happened. One survivor recalls that “the process of notifying my family was very difficult” and that her father, in addition to being involved in a serious accident, reacted from a political difference that turned into an accusation: “See? For getting involved where you shouldn’t have.” That phrase encapsulates a whole moralization of the damage: protest as recklessness, the victim as guilty. The interviewee says that years later she was able to respond: “It wasn’t my fault. I was exercising my right to protest.” In a scene of relational re-signification. At first, the aggression is experienced as family shame; over time, the survivor recognizes herself as a survivor of state violence and reclaims her place. But the cost is high: in her family, with former



military and police officers, the issue becomes a “silent secret” for more than ten years. “No one talked about it. Neither did I. It was like a forbidden, shameful topic.” Here, the family damage is not only rejection; it is imposed silence.

This second trend also reveals a more ambiguous form of non-support: there is not necessarily a direct insult, but rather an inability to bear the survivor’s presence. One survivor explains that his family used to be “very close,” with parties and gatherings, but that after the attack, “they couldn’t look at me without crying; tears would roll down their cheeks.” Faced with this, he made a decision that reveals the weight of his pain: “That’s why I decided to stop visiting them. I distanced myself.” Here we see another way of coping with the psychosocial impact: isolation was one of the options chosen by some survivors of ocular violence, distancing themselves as a way of not hurting family and relational bonds

Between these two scenarios, there are stories that fall somewhere in between, where support exists but is accompanied by constant tension: “in the family environment there was a more constant support, a permanent tension regarding my condition.” This tension involves hypervigilance, concern, and sometimes overprotection. It means that family life is permeated by trauma. In these cases, the survivor feels invaded by the constant tension of being treated with excessive fragility. Support also becomes a constant reminder of the loss.

When analyzing the responses of both types of families, in terms of relationships, it is found that there are families who support survivors from the outset because they understand who is truly responsible. However, there are also (usually more politically conservative) families who insist on blaming the survivor for what happened. In the latter case, it is essential to understand that these types of families act in accordance with the discourse absorbed by the hegemonic media and functional to the status quo. In the first scenario, the survivor’s identity is sustained by the certainty of belonging: “I am not alone.” In the second, identity is rebuilt from scratch, and often from a painful break, reiterating the abovementioned conclusion reached by one survivor: “family is not the same as relatives.” In both cases, trauma is not reduced to a set of medical diagnoses, as we mentioned at the beginning. Reducing it to PTSD is only focusing on biological determinism. Here we delve into the characteristics after the aggression in relation to interpersonal relationships, particularly the family.



In contrast, the lack of support causes damage that is often silent but profound. Family blame not only hurts emotionally: it dismantles the survivor’s narrative of legitimacy. When told at home, “you brought this on yourself,” the subject is exposed to internalizing guilt or breaking ties with their family forever. In these stories, healing becomes more difficult because the first emotional network fails. Thus, these stories show how survivors bear the intertwined burdens of shame, guilt, and exclusion through turning points and formative processes: breaking a decade of shameful silence by understanding that what happened was police violence; being excluded from family life, treated as guilty, and then redefining family as a source of care; being rejected by their own activist networks and finding support in new and unexpected networks of solidarity.

In the end, the interviews leave a strong conclusion: after an ocular assault, the family bond can both heal and harm; it can tend to the wound or deepen it. It can function as a place where pain is shared and sustained, or as a place where trauma is denied, moralized, and silenced. Both scenarios shape different trajectories of subjective reconstruction. In the first case, the family allows grief to be processed without losing a sense of belonging; in the second, the survivor must process grief while also losing a part of their home and rebuilding their identity through other bonds, other communities, or a new definition of family.

Therefore, understanding the family impacts of eye trauma is a central task for any comprehensive approach to reparations and redress. It is not enough to treat the injured eye: we must look at the social tissues that are broken or rearranged after the attack. This largely determines whether the person will be able to narrate themselves as a subject of rights or whether they will remain trapped in guilt and silence. And that is also where memory is defined: because when a family accompanies, the story can be told; but when a family remains silent, the violence is prolonged in what is left unsaid. In either case, these voices insist on the same thing: what is at stake is not only sight, but the entire life, and the way in which that life is sustained or falls apart within the closest circle.

Social Relationships

Eye aggression does not only affect the body of the victim; it also intervenes on the broader network of relationships that sustain daily life. After the shooting, the wound becomes visible,

and with it, the way others look at, approach, distance themselves from, or judge the victim is transformed. The interviews reveal that, after the attack, the relational experience is profoundly redefined: dynamics change with friends, partners, co-workers, strangers on the street, and political communities. The survivor no longer inhabits relationships with the same spontaneity; the injured body becomes a permanent mediator of social interaction.

In many accounts, the first change appears in the relationship with one’s own movement and presence in shared spaces. Rodrigo Langarini describes how, after the shooting, he lost not only his vision but also the physical confidence that sustained his social life. Like Juan Guerrero, he used to play soccer every week; now he hardly plays at all. He says that when he does play, he accidentally steps on or hits other people, which causes embarrassment, discomfort, and withdrawal. The scene repeats itself on the street: “I have accidentally bumped into older people and immediately said, ‘Sorry, I’m blind in my right eye.’” The relationship with others becomes a constant negotiation between explaining or keeping quiet. If he explains, compassion appears; if not, misunderstanding. In both cases, spontaneity is lost. Relational life is beset by self-consciousness and hypervigilance.

This loss of spontaneity is evident in many testimonies. Álvaro López recalls that before the attack he was “much more sociable,” that he liked to go out and meet new people. Afterwards, he began to shut himself off, limiting himself to his close circle. He defines this isolation as a form of protection, but also as a form of isolation. The outside world becomes a potentially hostile space: strangers asking questions, judgmental looks, hurtful comments. Thus, social life shrinks, not because of a lack of desire for connection, but because of emotional exhaustion in the face of others’ gazes.

The gaze of others appears as one of the most recurring themes. Cristian Rodríguez expresses this clearly when he states that eye injuries, being visible and altering the face, provoke “an immediate reaction in people.” That reaction is usually a mixture of discomfort, pity, or curiosity, and it becomes a daily occurrence. It does not always translate into words; often it is silence, a sustained gaze, a body language that signals difference. This constant presence of the gaze of others changes the way one exists in the world: the person ceases to be just another person and becomes “the injured one,” “the assaulted one,” “the one with the patch,” or “the one with the eye.” Carles delves deeper into this experience when he recounts his decision to stop wearing the patch.



For years he wore it because it was “more aesthetically acceptable,” even because it had a certain “mystique.” However, when he decides to stop wearing it, he notices more strongly how people treat him differently. Without the patch, his eyes become too visible, impossible to ignore. Carles says that, although he tries to normalize it, he clearly perceives how people from the “outside world” relate to him differently. At the same time, his decision not to hide the injury becomes a form of political positioning: to make visible the consequences of police violence. Thus, his relationship with others becomes a space of symbolic dispute between hiding in order to fit in or showing in order to denounce.

These relational transformations are not limited to the public sphere; they extend to the workplace. Daniel Jaimes recounts that, after the attack, he had to relearn everything: tattooing again, adapting to his new image, and facing a society that saw him as “a person assaulted by the police.” His case became visible, and with that visibility came a curiosity that he describes as morbid. Many people wanted to know how the shooting had happened, but few really asked how he was doing. Daniel distinguishes between two types of reactions: those who approach him with admiration or support, and those who point at him and say, “That happened to him because he was fighting with the police.” Over time, he has learned to identify those looks and not waste his energy on explanations. Social relationships become selective: not everyone deserves access to his personal story.

Alejandro Hernández recounts a similar experience. After the assault, his social and emotional relationships changed completely. He says he finds it difficult to form new bonds because he does not feel comfortable with his body. This insecurity affects both his personal and professional relationships. In job interviews, medical examinations become a silent barrier: when they discover that he has no vision in one eye, they simply do not hire him. The working relationship is no longer based on skills or training but is defined by physical condition. This erodes confidence and deepens social withdrawal.

Many testimonies also mention the breakdown of previous friendships. Narem puts it bluntly: “The friends I had before are almost gone.” Very few spoke to him again; now he has new friends, new people in his life. Aggression acts as a relational filter: some people don’t know how to support him, others distance themselves out of discomfort or fear, and others simply disappear. Gustavo Quinteros experiences this in an even more radical way: after what happened, no one came to

see him in the hospital, no friends, no acquaintances. Only his partner and son were by his side. That experience allowed him to distinguish between real friendships and superficial ties. Today he prefers solitude to “false friendships.” His social network is smaller, but it has become more honest.

Political stigmatization appears to be a key factor in the transformation of relationships. Pablo Montiel describes how, over time, social perceptions of the victims of the uprising changed radically. At first, they were seen as heroes; later, as criminals. On public transport, he hears conversations in which they are called “criminals” or told that they live off state benefits. This leads him, in many work contexts, to avoid talking about the subject. The aggression leaves not only a physical mark, but also a political mark that conditions social relations. Pablo explains that some colleagues became depressed or fell into addiction, while others try to continue explaining, dialoguing, and breaking down prejudices, even though it is exhausting. Interacting with others becomes a political act, and a demanding and labor intensive one at that.

However, not all relational transformations are losses. Several accounts also mention the construction of new, more conscious and supportive bonds. Giovanni García points out that he does not feel he has suffered direct discrimination, but he does perceive looks of curiosity or sadness. At the same time, he affirms that he has met many more people and that, on an emotional level, he has found significant support. He talks about people who offer “their arm, r their shoulder,” and how that generates motivation and the desire to move forward. In his experience, relationships do not disappear: they transform and, in some cases, become stronger.

Partners and spouses occupy a special place in these narratives. Pablo Montiel highlights his relationship with his partner, who was with him when he was shot and accompanied him through all his operations and treatments. Although they had not been together long, their relationship grew profoundly stronger. Pablo acknowledges that he has seen other comrades whose relationships broke down due to pressure or trauma, and he affirms that not all couples manage to understand this struggle. In this sense, eye aggression acts as an extreme test of emotional bonds: some relationships break down, others are strengthened.

Soren Stevenson adds another relational dimension: the caution with which he is now treated. He notes that some people treat him with more respect or admiration, but also with excessive care. In

conversations about police or violence, he notices that people avoid going into depth, fearing that he will get angry or upset. Sometimes he feels like an “other” in social spaces, as if they don’t know how to interact with him. At the same time, he recognizes that his story has opened doors for him to speak publicly and be heard. His relational identity is reconfigured between uncomfortable distance and political visibility.

Finally, the testimonies show that relationships after an eye assault are reorganized around new implicit rules: when to explain, who to tell, when to remain silent, which spaces to avoid, and which to inhabit. The survivor learns to read looks, anticipate reactions, and select bonds. In many cases, this reconfiguration involves painful losses, but also the possibility of building more conscious relationships based on respect and empathy.

Overall, the interviews show that ocular aggression produces a profound transformation in relational life. It is not just a matter of individual changes, but of a reconfiguration of the person’s social place: how they are seen, how they are named, and how they are treated. The wound becomes a sign that circulates in relationships, generating compassion, rejection, admiration, or stigmatization. Understanding these relational impacts is essential to fully grasp the extent of the damage, because violence does not end with the injured body: it extends to the way the world responds, drawing closer or moving away. And it is in this relational field where, day after day, survivors must rebuild their place, their dignity, and their right to be recognized beyond the injury.

Labor

Ocular violence does not only affect the body and identity of survivors; it also disrupts the relationship with work, which should be understood not only as a source of income but also as a space for dignifying the self and socializing with others. For many of the people interviewed, the world of work became one of the most hostile scenarios in the post-traumatic process. The interviews reveal that after the assault, it has become difficult to access, remain in, or re-enter formal employment. Discrimination, ableism, medical suspicion, corporate fear, and constant precariousness are common factors in some of the interviews.

In some cases, exclusion from work was not immediate but became apparent gradually. Carles recounts that at the time of the attack, he was not working, but when he returned to work as a secondary school teacher, he noticed obvious changes. With primary school students, the relationship was more fluid: they asked questions, looked at him with curiosity, and were open. With older teenagers, however, interaction became more complex. At work, Carles feels that some job opportunities are closed to him, and he also notices a clear difference between wearing an eye patch and deciding not to wear one. The visibility of the damage becomes a factor that limits job opportunities, even when professional ability remains intact; however, this is not relevant to him, as he continues to wear his eye patch with great pride.

For others, the assault meant giving up their previous job altogether. Narem explains that before losing his eye, he had a private investigation company and worked actively in courts and hearings. After the attack, he had to leave that job and look for quieter work. It was not a vocational decision, but a consequence of the trauma of the attack and the new context. Narem points out that finding work in Colombia with this condition is extremely difficult: companies do not want to hire someone who has lost an eye because they fear complaints or liability, even though the condition does not affect the job for which the survivor is applying. In this case, disability becomes a presumption of risk for the employer, not a condition that should be reasonably accommodated. In other words, the condition is seen as something to be excluded and not something that should be reintegrated into society, which is known as discrimination.

Álvaro López shares how returning to work can be an extremely re-victimizing process. Before the attack, he worked as a cashier, and his company kept his contract throughout his disability leave. However, his return to work was marked by constant emotional stress: every time a customer asked him, “What happened to you?”, he was forced to relive the attack. Later, when looking for other jobs, an occupational physician told him something that stuck in his memory: people with this type of injury are often rejected not because of actual disability, but because of fear of taking on responsibility. Álvaro confirms this statement: he went through several interviews and was rejected after medical examinations. He currently works in civil construction, but with multiple restrictions: he cannot climb to great heights and must deal with vertigo and loss of depth perception. The work exists, but it is fraught with permanent physical and emotional limitations.

Juan Guerrero describes a similar experience. At first, his eye condition did not have a major impact

on his daily life; however, when he tried to enter the formal labor market, medical examinations became a barrier. He was rejected in several places solely because of his visual condition, even though his prosthesis is not very “noticeable.” Although he has managed to remain active and adapt, the experience shows that the labor system is not designed to include eyes injured by state violence. Exclusion is not always expressed in explicit dismissals, but in silent filters that prevent access from the beginning of the process.

Daniel says that, with his eye patch and tattoos, he was rejected for formal jobs with direct comments about his ability: “he can’t do things well because he only has one eye.” In other spaces, he was discriminated against simply because of his appearance. Faced with this repeated exclusion, he decided to return to self-employment. Tattooing became his space of freedom, where no one could judge or limit him. This decision was not only financial: it was a way to rebuild working relationships from a position of autonomy, avoiding daily humiliation.

Several survivors agreed with this idea, pointing out that after the period of social upheaval when they were injured, working life became extremely complicated. Companies reject people with conditions like ocular injury, citing “health and safety” reasons, which in reality hides a fear of these types of conditions, rooted in ableist discrimination and stereotypes. This makes it almost impossible to find formal, stable work. Frustration is constant: doors close one after another, although some open thanks to collective work and self-management. In this story, work ceases to be a guaranteed right and becomes something that must be resolved.

For Johan Suárez, the attack meant the destruction of his formal career. Before the attack, he worked as a business consultant and technology promoter, a role where personal image and presence generated trust. After the injury, even when he managed to pass the selection filters, he was rejected on medical grounds. Today, his working life is unstable: he works on a daily basis, makes crafts, does small computer jobs, and lives off the rebusque . He has no stable contracts or benefits. Johan describes this process as an abrupt fall: from a formal job with prospects to a precarious subsistence. The attack not only took away his vision; it took away his ability to plan his future career.

Gustavo Quinteros shows another side of the problem: staying in physically risky jobs due to a lack of alternatives. He works in artisanal fishing, a hard and dangerous job. While working,

contaminated water or fish scales can get into his affected eye, leaving him temporarily blind and in intense pain. His colleagues do not always understand what it means to work with a visual impairment. However, Gustavo continues because he needs to support his family. The choice is not a free one: it is a means of survival. Work becomes a daily risk taken out of necessity, rather than a central tenet of identity and dignity.

In some cases, workplace support exists, but it is exceptional. Muhaimin recounts that before his eye trauma, he worked as a management assistant in a private company linked to military supply in Bangladesh. Despite the contradiction with his political ideals, he was able to keep his job thanks to the support of his bosses and colleagues, working from home. His case shows that workplace inclusion is possible when there is institutional will, but it also highlights how exceptional this experience is compared to the majority of stories marked by exclusion.

Raúl Muñoz recounts a process of forced reinvention. He used to be a gas fitter, had a small business, and worked in high-end mansions. After the shooting, he lost 75% of his sight and had to give up his job. Reading became difficult, even a basic task. Faced with the impossibility of continuing, he decided to create a Foundation for Art, Memory, and Human Rights. Through art, he found a way to rebuild his working life and sense of purpose. His story shows how, faced with exclusion from the traditional labor market, some people create alternative paths, not by initial choice, but by structural expulsion.

Pablo Montiel offers one of the harshest testimonies about prolonged precariousness. After the shooting, the pandemic further exacerbated the lack of opportunities. He managed to get a job at a construction company thanks to a friend, but he was called in for his first operation shortly after and, as he had only been there a short time, he did not receive medical leave. He spent two years unable to work or earn an income. In six years, with a formal contract, he has worked for only about eight months. The rest has been informal, sporadic work with no guarantees. Pablo recounts denied meetings with the Ministry of Labor, broken promises, and a constant feeling of an uncertain future. Many of his comrades want to study something else, but they cannot afford to pay for their studies or stop working to do so. The eye injury forces them to reinvent themselves in a system that does not offer the conditions for such reinvention.

Giovanny García describes how his working relationship progressively deteriorated. He worked



in a lamp manufacturing company and was able to rotate shifts, which improved his income. After the injury, medical criteria limited his working hours to the times of day with the most light. This reduced his income and increased his physical and emotional exhaustion. Always working the same shift, with no possibility of rotation, ended up affecting his mental health, until he decided to leave the company. Today, he works mainly in front of a computer, which causes greater visual strain. Giovanni is clear in stating that sustained financial compensation over time is necessary because the injury is permanent. It is not a matter of one-off compensation, but of guaranteeing decent living conditions in the long term.

Overall, the interviews show that eye injuries cause a structural break in a person’s career path. Discrimination is not always explicit; it often manifests itself in medical examinations, administrative silences, unexplained rejections, or restrictions that ultimately push people to resign. The labor market appears to be an unwilling space for adaptation, where corporate fear outweighs the right to work. The impact on employment is not only economic. The inability to work in one’s previous job affects self-esteem, professional identity, and sense of social usefulness. Work ceases to be a place of belonging and becomes a source of frustration or risk. In this context, many people are forced to reinvent themselves without institutional support, to accept precarious or dangerous jobs, or to depend on informal networks.

These stories show that ocular violence does not end with the injury. It continues in labor exclusion, forced precariousness, and the absence of effective reintegration policies. When the state injures the body and then allows the market to expel the injured person, the violence is prolonged over time and normalized as destiny. Consequently, recognizing these labor impacts is essential to developing a comprehensive remedy that is not limited to medical care, but also guarantees the right to decent work, stability, healthcare, and a future.

4. In Latin America, the expression “vivir del rebusque” (loosely, to ‘scavenge’ for a living) refers to the practice of doing precarious work, usually under conditions of severe exploitation with no guarantees or benefits, in order to earn enough income for daily living. This is a result of the difficulty of securing stable and dignified work, which is exacerbated by discrimination against those who have participated in social protests and against people with disabilities.





Forms of reparation

The question of compensation is quite complex to answer in a unified manner. Firstly, in most cases of ocular violence, there is permanent physical damage that cannot be repaired, especially for those who have lost their vision completely or who have had to undergo evisceration or enucleation. However, there are other forms of reparation that are worth exploring in this report. What does it mean to repair when the damage is permanent, visible, and irreversible? Given that it is impossible to restore the lives of survivors to what they were before the attack, how can the damage suffered be reduced, if it cannot be fully compensated? Recognizing, too, the structural and institutional roots of ocular violence, how can we move toward a social transformation that ensures the non-repetition of these attacks?

This starting point is compelling and is repeated with different nuances in the aspirations and experiences of survivors: “Nothing can bring back an eye, or the life one had before,” says Álvaro López. Juan Guerrero puts it even more bluntly: “There is no such thing as complete reparation. Only the return of the organ and its functionality could be considered full reparation, although even that would not erase the emotional and social wounds.” In this sense, reparation is not understood as “going back to being who you were before,” because that is already impossible. We understand reparation as a set of actions that, although they cannot reverse the injury, can advance towards the restoration of rights, recognition, care, truth, justice, and guarantees of non-repetition.

Comprehensive programs and financial compensation

With a clear understanding of what we mean by reparation, based on the survivors’ accounts, this report highlights a first set of reparations that already exist in some countries, such as Chile, even if they are partial, irregular, or insufficient: medical care, specialized programs, and, in some cases, financial compensation. Rodrigo Langarini mentions that in Chile, the “Comprehensive Eye Repair Program” (PIRO) covered emergencies and operations, with the presence of psychologists, psychiatrists, social workers, and occupational therapists. This background is important, as it shows that when there is “political will,” public policies can be made that serve

as forms of reparation. However, the same testimony reveals the limitation: “It was not easily accessible, there were not many hours available.” Here, it is mentioned how bureaucracy itself causes programs to be centralized and creates barriers to access for people in the peripheries, which continues to be a concern, as it is these people who suffer other types of exclusion by the state across the board.

In the case of the United States, Will Sands recounts a different experience: a “solid” legal route that allowed him to sue and reach an out-of-court settlement for “just over half a million dollars.” The testimony shows that financial compensation can be significant in reorganizing one’s life, especially when ways of working must be changed and family expenses must be sustained. However, the interviewee himself limits the scope: “Money does not restore vision or lost time, nor does it repair trauma. I would not say that I found justice in the courts.” This statement is key because it separates two dimensions that are often confused: financial compensation is not equivalent to justice, nor to full reparation. Compensation can provide relief, but it does not heal the wound. Even unofficially, Juan Guerrero mentioned that he was not interested in the money, that if he could trade the money for his sight, he would do so without hesitation, because what was important to him was regaining the abilities he had before the eye injury.

Esther Quintana expresses something similar when she says that “there was financial compensation” agreed with the insurance company, but insists that the money should not stop the legal proceedings and that “it does not repair a permanent disability or the loss of an eye.” For some, financial compensation is not enough. After all, what is the point of compensating someone if they then have to relive their trauma when the news shows another protester being violently shot in the eye? That is why, for Esther, “The real compensation for me has been social and collective: being able to explain what happened, finding empathy, transforming pain into political change, helping to prevent it from happening again.”

Symbolic, collective, community, and memory-based reparation

This idea introduces a second set of reparations that appear repeatedly in the document: symbolic, collective, community, and memory-based reparations. Cristian Rodríguez puts it very

clearly when he states that symbolic reparation is “the most important” because society must recognize that the security forces acted “intentionally and systematically” and that these were not accidents. He insists: “That collective truth is, for me, a form of justice.” This approach is quite interesting because it shifts reparation from an individual to a collective and social level, seeks to establish a discourse in which human rights and the right to mobilize are respected across the board, and combats the aforementioned narratives of the internal enemy, seeking to make people understand the systematic nature of what happened and not justify it.

A constant tension emerges in several voices: it is acknowledged that economic or judicial reparations are necessary, but it is considered that, without public truth, memory, and recognition, they remain individual reparations and do not guarantee non-repetition. Cristian Rodríguez even says that “there is no real reparation” and that economic or judicial reparations reach “only a symbolic level.” For him, the most concrete reparation has been the collective work of the victims themselves: “True reparation lies in social recognition, in collective memory, and in the work we do through victims’ movements. MOCAO is an example of this: we have repaired ourselves through memory, art, culture, politics, and solidarity.” This is important because it shows how, when the state fails, groups of survivors of ocular violence (and state violence more generally) turn to solidarity as a form of reparation.

Carolina Bautista reinforces this interpretation by pointing out that, although “institutional justice continues to fail,” support networks, protocols, and spaces for accompaniment have emerged, built by social organizations, not by the state. She frames this in a generational comparison, as she was assaulted in 2003, long before the peak in cases of ocular violence (between 2019 and 2022). For her, the journey was “lonely,” while today there is a community ecosystem that transforms pain into action. In her account, reparation is not a final act, but a historical process: it is built on organization, networks, and memory. The existence of collectives dedicated to the fight against ocular violence allows for hope that it will not be repeated, in addition to preserving memory.

In the same vein, Will Sands recounts the creation of an informal network (the Shot in the Eye Squad) as the most transformative part of his process. And although he recounts the compensation, he insists that his “true form of justice” was “building community and awareness,” exposing the “less lethal” weapons industry, and denouncing the logic of the “internal enemy.” Once again, the idea of reparation as a community emerges: reparation that does not depend on the state’s verdict,

but on the victims’ ability to connect, tell their stories, organize, and remember.

Truth and accountability

The third set of reparations, also recurrent in the accounts of survivors and the concepts offered by human rights defenders, is reparation understood as truth, justice, and identification of responsibilities. The demand for justice does not appear as a desire for revenge or a search for retribution, but as a need for moral and political recognition.

Carles mentions that: “The first thing would be for there to be justice: for the perpetrator of the shooting to be identified and for him and his superiors to be convicted for allowing it to happen. Beyond a financial claim... it is the recognition of guilt by those who are guilty.” His testimony also reveals a very specific dimension: institutional revictimization. He says that they went so far as to claim that his eye was blown out because he voluntarily put himself at risk by going to protest, and he states: “That should never be the case.” This statement shows a form of negative reparation: reparation also involves stopping discourses that blame the victim. If these discourses that seek to blame the victim are not confronted, society will take a step backward in its understanding of the direct effects of ocular violence on democracy.

Rodrigo Langarini, for his part, formulates an ideal scenario that must be fought for: “recognizing the truth; recognizing that it was premeditated and organized; that those responsible... must pay with justice, with prison.” And he does not limit responsibility to the perpetrator: he includes high-ranking officials, ministries, and even the presidency, which is undoubtedly quite ambitious. Regardless of the role played by those at the top of the state in the misuse of force, justice will always be more diligent with those who do not enjoy political power. What is interesting here is that Rodrigo also adds the need for monetary compensation, but he justifies it on the basis of specific losses of rights: for example, people with one eye are precluded from receiving a motorcycle license in Chile, which took away his livelihood and a vital part of his life. In other countries, such as Colombia, this law does not exist. In fact, several eye injury survivors interviewed in this report ride motorcycles daily—for their own transportation and as part of their work—and explain that they have managed to adapt to do so safely. Instead of providing reasonable accommodations so that injured people can independently carry out their daily activities, Rodrigo’s case highlights



the difficulties of navigating a world that insists that disability is equivalent to incapacity. In this context, financial compensation is not about assigning a “price” to the eye or the percentage of vision that has been lost, but rather restitution for accumulated damages: impacts in terms of employment, education, and the other post-traumatic impacts outlined above, which are exacerbated by the social exclusion of disability in education and employment opportunities.

Juan Guerrero expands on the idea of reparation as clarification: his “true” reparation would be “the whole truth,” knowing why the officer fired, under what orders, training, or ideology. He adds that justice must include disqualification: that the officer be removed and prevented from carrying weapons or representing the state. In addition, he introduces a powerful element into the document: public forgiveness. He says that an official apology should be offered not only by the perpetrator, but also by senior officials and those who promoted hate speech and the “internal enemy.” This includes traditional media outlets that have promoted the criminalization of protest as acts of “vandalism” and “terrorism” and, therefore, suggest that ocular violence is part of a legitimate and even necessary use of force.

Non-repetition

A fourth pillar of reparation that is strongly emphasized is non-repetition, understood not as an abstract promise, but as concrete reforms, such as banning weapons, eradicating tactics, and dismantling repressive structures. Carles proposes this as reparation: “we ask for a definitive ban on these weapons,” because their use causes irreparable injuries even in “small” and “slow drip” operations. For him, recognizing the disproportionate nature of these weapons and banning them would be a concrete and acceptable form of reparation. Daniel Jaimes agrees: “True reparation would be to ban their use and dismantle the Mobile Anti-Riot Squad (known as ESMAD, the former police force assigned to respond to protests and crowds in Colombia), so that no one else has to suffer what we went through.” Adelaida Tamayo goes even further in her proposal: eliminate the use of “less lethal” weapons, dismantle the ESMAD and the new Unit for Dialogue and Maintenance of Order (UNDMO) as a step toward abolishing the police and prison system, transform the doctrine of the internal enemy, and promote popular education, art, and popular theater to dismantle the mentality that justifies repression. In this vision, reparation has a cultural dimension: it is not enough to change protocols; we must change the idea of order that

turns protesters into threats.

The interviewees also point out another key aspect: comprehensive reparation in the form of access to social rights and interdisciplinary care. Johan Suárez insists that “more than money,” what is needed is “comprehensive psychosocial care” and “true economic stability,” because the state ignores mental health and labor inclusion. Daniela Buriticá contributes a technical-political formulation: ocular violence requires comprehensive responses, access to labor, educational, legal, and social rights, and interdisciplinary support. She even proposes a narrative approach: reconstructing the life story before and after as a way of reconfiguring the trauma. This connects with what the document suggests at its core: reparation is not just compensation, it is accompanying long processes—a lifetime of reparation for a wound that remains for life.

However, alongside all these proposals for reparation, the document also strongly highlights forms of non-reparation: denial, institutional failures, lack of policies, revictimization, broken promises, impunity. Survivors invariably lament that “there is no real reparation” and that in most cases “reparation never comes.” Raúl Muñoz is even more explicit in denouncing that “there has been no reparation law, no employment, psychological, or educational assistance” and that existing programs function “very superficially.” He asserts that they do not attend to the families or children of victims and that, in the courts, names are changed to archive cases and responsibilities are fragmented to dilute guilt. Sergio, from Brazil, recounts more than ten years of waiting for justice and concludes that justice protects the state more than it protects citizens, although he insists on continuing to appeal. In these voices, the absence of reparation is not an administrative vacuum: it is a continuation of violence by other means, where the system closes doors, delays, shelves, or justifies with a premeditated aim, the denial of these facts, the invisibility of survivors, and the permanent exclusion of citizens from the process.

5. To clarify, the UNDMO is the police force that replaced the ESMAD in Colombia in 2023 following a reform process.

In summary, the document shows that forms of reparation do exist, but they are partial and unequal depending on the country, the case, and the organizational capacity. At least five major forms are identified as potential avenues for reparation on an international scale:

1. Health and specialized medical care programs, breaking down the barriers to access seen in other countries
2. Financial compensation or legal settlements, which are useful but insufficient
3. Symbolic reparation based on social recognition, collective memory, and legitimization of the truth
4. Justice and clarification of responsibilities, with an emphasis on command structures
5. Guarantees of non-repetition through the prohibition of weapons, doctrinal transformation, and profound reforms, accompanied by popular education and critical culture. At the same time, the document emphasizes that, in many contexts, institutional reparation is non-existent or failed: impunity, revictimization, and the absence of sustained policies prevail.

The most relevant point to highlight is that, although the state has denied its responsibility and has also refused to respond in terms of reparation, survivors have found ways to achieve these five points and have done so as a way of overcoming what happened. In other words, reparation has come not because of the state but in spite of it.

Justice

Finally, the dimension of justice appears in the interviews as a fragmented, uneven, and, in most cases, deeply frustrating trajectory. The document shows that people do not speak of “justice” as a single path, but as a set of routes that open or close depending on the country, the political context, the possibility of accessing advice and evidence, and the institutional willingness to investigate state agents. Based on a synthesis of the judicial systems that survivors of eye mutilation navigate in their respective contexts, at least four broad paths for justice can be identified:

- Criminal justice (identification and punishment of the perpetrator)
- Contentious-administrative or administrative justice (state conviction for liability)
- Civil justice (compensation/settlements)
- International avenues (when the domestic system is exhausted or does not admit the case).

In almost all narratives, criminal justice does not progress or is deliberately blocked. Generally, economic and symbolic reparations tend to progress more quickly, but not in all cases and even then insufficiently. This allows us to deduce that the state prefers to “pay” for its mistakes rather than accept that there was excessive force and misuse of force by its agents, which demonstrates a reluctance on the part of states to recognize ocular violence as a democratic problem and therefore suggests that by not considering it a problem, they will not move towards change.

In Spain, Carles presents a structural picture of impunity. He states that “there is no justice” and that no police officer reported for ocular violence has ever been convicted; cases are systematically dismissed. His case illustrates complete institutional exhaustion: he litigated for fourteen years against the state, going through the Court of First Instance (dismissal), the Provincial Court (dismissal), the Supreme Court, the Constitutional Court (denial), and finally the European Court of Human Rights, which did not even admit the application.

The technical pattern here is clear: repeated dismissal, cascading closure, and lack of international admission even after exhausting all avenues. Experience shows that, even with extreme persistence, the system can block judicialization through procedural decisions or “legal maneuvering,” that is, legal tricks to deny and even revictimize survivors for what happened. Seeing their case fail to progress is also a form of violence through the power of the state’s legal system.

In Colombia, multiple testimonies converge on one idea: justice is inefficient, protracted, revictimizing, and often non-existent in criminal cases. Narem affirms that in Colombia “there is no justice” and that her case has been “forgotten”; she describes a logic of filing away cases and social oblivion, and warns that money cannot repair the damage or family trauma. Álvaro López agrees that justice “has not been efficient,” with a process full of obstacles and bureaucracy, especially when it involves state agents: either it does not move forward or it is delayed. In his account, justice is experienced as “a path of waiting and persistence,” where the feeling of abandonment is constant.

Juan Guerrero adds a key technical element: institutional revictimization during administrative and judicial proceedings, particularly by the National Police. He points out that he had to give a statement to the same institution that caused his mutilation, where the questions sought to justify the use of force: Were you throwing stones at the police officer at the time you say you



were attacked? Were you damaging private or public property at the time you were attacked? These are some of the questions he was asked during the internal investigation by the National Police, an investigation that sought to justify rather than investigate what happened, which he describes as humiliating. In addition, he denounces a pattern of “shifting the burden of proof”: the investigation ends up falling on the victim or his lawyer, when it should fall on the Prosecutor’s Office.

Cristian Rodríguez offers the clearest example of partial progress in Colombia, precisely because he distinguishes three paths. In his case, there was significant progress in administrative redress: Administrative Court 33 of the Bogotá Circuit convicted the Colombian State and the Ministry of Defense for the injury caused by an ESMAD agent during a protest. Cristian interprets this ruling as institutional and symbolic recognition, and as a collective victory. However, the limits are clear in his own narrative: there has been no progress in the criminal proceedings, no investigation has been opened, and the person directly responsible has not been identified. He even anticipates that he will probably never know the officer who shot him.

Daniel Jaimes recounts a particularly violent judicial process in terms of institutional treatment. He describes a pattern of intimidating questioning: “What were you doing?”, “Why were you there?”, “Whose fault was it?”, as if he had to “prove he was a victim.” He also reports persecution and harassment: police officers coming to his home, following him, recording him, and entering the premises where he worked, under the pretext of investigation. His account can be summarized as: criminalization of the victim within the process, harassment, and persistent fear, which impacts his ability to pursue legal action. The idea that sums up his experience is powerful: in Colombia, being a victim can mean being treated as a suspect.

Johan Suárez mentions that he did not report the crime at the time because he did not know how the judicial system worked. When he decided to proceed with the complaint, according to him, “it was too late” because he did not receive legal or psychosocial support. It is important to mention that no one expects these things to happen to them and, therefore, they generally do not have sufficient legal tools to deal with such events.

Carolina Bautista is in the same boat, but with historical context: she never reported it, not because she didn’t want to, but because of fear and the lack of institutional mechanisms in 2003. She raises a central question: how can she report to the police the same institution that assaulted



her? A lawyer told her that the case was “winnable,” but the political context (the beginning of the Uribe administration) and the lack of options led her to give up. Carolina insists on a key finding: impunity is not the fault of the victims, but of the judicial system, which does not offer safe channels or support.

There is also a frequent pattern of abandonment by legal representatives. One survivor points out that he had a lawyer, but that over time he abandoned the process; he wrote periodically to ask questions and stopped receiving answers. He felt “thrown by the wayside.” This introduces a key element, the continuity of legal representation and the lawyer’s desertion as a cause of stagnation. Alejandro reinforces the idea of extreme slowness: almost six years and only a second hearing; his lawyers anticipate that they could lose because the justice system protects state interests and revictimizes victims. In addition, he describes an institutional narrative strategy: presenting the event as an accident or street fight, and even insinuating that protesters provoke injuries to themselves in order to obtain benefits.

Outside Colombia and Spain, the responses in the interviews reflect comparable patterns: abundant evidence that is not enough, closures with weak arguments, and “compensation” as a substitute for justice. In Chile, Gustavo Quinteros recounts that his case was closed without anyone being held responsible and sums up the absurdity of the evidence with irony: “the wind shot me.” He had two cases (one personal and one human rights) and both were shelved; he was never called or asked to testify. Only a civil lawsuit remains, which could result in compensation, but not justice. Gustavo concludes: “in the end, they silence you with money,” emphasizing the difference between compensation and responsibility. Pablo Montiel describes how the police officer was not identified, even though it was proven that the bullet was fired by the police; he reports that the videos from the cameras that proved guilt were deleted, as well as the transfer of the case to senior officers still on trial, but with no expectation of justice. He adds a key regulatory factor: the Naín–Retamal Law, which retroactively protects police officers and broadens the scope of justification for “self-defense.”

In Peru, Atoq presents a case with strong evidentiary support: her lawyer found photographic and documentary evidence of the operation; the images even show officers aiming and firing, with details of the units. The lawyer argued two violations: personal integrity and freedom of expression (as a journalist), and raised the existence of an unofficial police group dedicated to



shooting at the body and face. Despite this, the judge closed the case on the grounds of insufficient evidence and suggested that the projectile could have been fired by protesters. Atoq appealed, but due to emotional exhaustion, abandoned the process. This case demonstrates how the justice system seeks to delay proceedings until the complainant is exhausted and subsequently withdraws the complaint, that is, a justice system that does not seek to clarify the facts, but rather seems designed to protect at all costs the image of the police forces as pillars of morality.

In Brazil, Sergio describes a court ruling that he describes as political: compensation was denied and the court found him guilty “for being there,” exempting the state from liability. Despite more than ten years having passed, he continues to pursue a lawsuit seeking redress and recognition of police responsibility. He claims to have evidence (witnesses, images, even testimonies from police officers about the disorder of the operation), although there is no image of the exact impact. His case allows us to deduce: an unfavorable ruling blaming the victim, persistence in long-term litigation, and evidentiary dispute over the standard of proof.

In the United States, Soren Stevenson describes the difference between civil and criminal proceedings: criminal proceedings are almost impossible; he won a civil lawsuit and reached a financial settlement with the Minneapolis City Council in 2022, but the officer who fired the shot remains on active duty without disciplinary action. This pattern is relevant: civil success (settlement) without criminal/disciplinary consequences, revealing structural impunity. Muhaimin (Bangladesh) expresses dissatisfaction with slow, confusing, and politicized justice, but maintains hope for accountability “before history and the people,” a transformative justice that goes beyond the courtroom.



Conclusions

To conclude, and in line with Muhaimin’s aspiration for comprehensive justice, we insist on the need to look beyond the wound to understand the roots and impacts of ocular violence and to accompany the individuals and communities affected by it. Based on three main sources—namely, the accounts of survivors of eye injury from around the world, the expert insights of human rights defenders from different disciplines, and existing documentation of the practices of grassroots social organizations this report defined, characterized, and denounced ocular violence as a systematic act of torture with a complex set of post-traumatic impacts on survivors and negative effects on democratic processes. More specifically, it delved into the post-traumatic impacts of an injury that affects not only the victim, but also their close networks and the broader exercise of political participation through social protest. By connecting these concrete effects with the historical and ideological roots underlying the responses to social demonstrations around the world, it was possible to clarify in practice how the notions of the internal enemy and exemplary punishment materialize.



Bibliography

Amnistía Internacional & Omega Research Foundation. (2023). *My Eye Exploded: The Global Abuse of Kinetic Impact Projectiles*. Disponible en: <https://omegaresearchfoundation.org/storage/2024/02/My-Eye-Exploded-English.pdf>

Buriticá, D. (2024). *Estrategia de intervención psicológica en personas sobrevivientes de lesiones oculares en protesta social*. Tesis de maestría. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/88057>

Calamati, S. (2002). *The Trouble We've Seen: Women's Stories from the North of Ireland. Belfast: Beyond the Pale*.

Casas Ramírez, D. A. (2019). Esmad, seguridad y posacuerdo: perspectivas sobre la protesta en Colombia. *Ciencias Sociales y Educación*, 8(16), pp. 73–89.

Cruz, E. (2016). *Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia*. Bogotá, Colombia: Ediciones desde abajo

CSPP, CDLAT, MOCAO, & CAPS. (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia. Disponible en: <https://reaccionrevistadigital.com/wpcontent/uploads/2023/02/Represion-en-la-mira.-Inf-LesionesOculares.pdf>

Curtis, L. (1982). *They Shoot Children: The use of rubber and plastic bullets in the North of Ireland*.

Cohen, M. A. (1985). Plastic bullet injuries of the face and jaws. *South African Medical Journal*, 68(12), 849–852.

Dymond, A. (2022). *Electric-Shock Weapons, Tasers and Policing: Myths and Realities*. Routledge.

Guerrero Rivière, L. (2025). *Sights of struggle and wounded eyes: narratives of ocular maiming in Colombia*. Tesis doctoral. Universidad de Exeter.

Guerrero Rivière, L. & Obermaier, L. (2026). Transnational maiming: ocular mutilation in Palestine and Colombia. En Sheikh, M., Mendes, S. M., & Fraga, V. (Eds.) *Globalized Injustice: Relational Contexts and Modalities of Resistance*. Cambridge Scholars. pp. 82–103.

Guerrero Rubiano, A. J., Bernal Martínez, D. A., & Fonseca, J. P. (2024). The Movement in Resistance against Eye Aggressions by MOCAO as a social movement for justice, reparation and the right to peace and freedom in Colombia. *Torture*, 34(1), p. 83–88.

Hawwa, O., Azizi, S., MSallam, M., et al. (2025). Ophthalmology during conflict: a vitreoretinal surgeon's journey in Gaza. *Eye*, 39, pp. 1657–1658.



Jaouni, Z. M., & O'Shea, J. G. (1997). Surgical management of ophthalmic trauma due to the Palestinian Intifada. *Eye*, 11(3), pp. 392–397.

Osorio-Rozo, D. G. y Olarte-Cancino, H. (2023). Obediencia a través del dolor: La violencia estatal en el contexto de la protesta social (Bogotá, Colombia, 2019–2022). *Antípoda*, 53: pp. 135–160.

PAIIS, Temblores, y Amnistía Internacional. (2021). *Tiros a la Vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional*.

Planas, R. (2026, enero 17). “US federal forces blind two protesters shot in face with ‘less-lethal’ munitions”. *The Guardian*. Disponible en: <http://theguardian.com/us-news/2026/jan/17/protesters-blind-us-federal-agents>

Puar, J. K. (2017). *The Right to Maim*. Durham: Duke University Press.

Rincón Oñate, C. A. (2019). La construcción del enemigo interno. Una política pública del odio. *Desde el Jardín de Freud*, 19. pp. 249–262.

Rocher, P. (2021). *Gasear, Mutilar, Someter: la política de las armas no letales*. Katacrak.

Romero, S. R. (2022). *El Retumbar de Mayo a Media Tarde*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Tamayo Gomez, C. (2022). Recognition as transitional justice ‘from below’: Analysing victims’ grassroots activism in postconflict Colombia. *International Journal of Transitional Justice*, 16(3), 314–330.

Tomlin, J. (2011, diciembre 18). “How eyepatches became a symbol of Egypt’s revolution”. *The Guardian*. Disponible en: <https://www.theguardian.com/world/shortcuts/2011/dec/18/eyepatches-egypt>

Velásquez Valenzuela, J., Fernández Carter, C., y Reynhout, S. A. (2021). ¿No letales? Un análisis criminológico, criminalístico y jurídico sobre los peligros de los proyectiles de impacto de energía cinética. *Política Criminal*, 16(32), 524–556.

Velásquez Valenzuela, J., Guerrero Rivière, L., & González, F. (2024). Obediencia mediante el dolor, discapacidad y tortura: Lecciones sobre el empleo y los efectos de las armas menos letales desde Chile y Colombia. *Anuario de Derechos Humanos*, 20(2), pp. 327–354.



Collection of surviving key phrases

Johan Suárez (Colombia):

- 1. After the attack, I lost my innocence. The feeling of being whole. I feel broken, and there is no possible repair for this. Almost six years have passed, and I am still the same. I smile, but I struggle every day to be able to do so.
- 2. I only ask for dignity, stability, and mental health.

Gustavo Quinteros:

- 3. Justice without humanity is useless.
- Although the process is long and painful, I have learned to transform anger into strength.
- 4. I am not looking for money, I am looking for truth, recognition, and real justice, even if it is with only one eye.

Atoq (Peru)

- 5. The Peruvian judicial system is complicit in impunity; it covers up, delays, and protects those responsible.
- 6. I do not believe in institutional justice, but I do believe in symbolic and collective justice.
- 7. Through art, photography, and culture, we can keep memories alive, imagine other possible futures, and give voice to those who were silenced.
- 8. We may not see the change, but new generations will have more tools to transform what seems impossible today.

Rodrigo Langarini (Chile)

- 9. I feel that this lack of mental health that this person has is also precisely that, like individualism and lack of empathy, which I don't know if it's only in Chile or worldwide.

Narem Rodríguez

- 10. They can give me money, but that can't repair the trauma my sister, my daughter, and my family have suffered. The money will run out, and it won't repair my eye.

Alvaro Lopez:

- 11. Don't look at us as strangers or as guilty.

- 12. We are not criminals or “guerrillas” for having lost an eye in a demonstration.
- 13. Before all this, we were also your friends, your neighbors, your colleagues.
- 14. We only ask for respect and humanity.

Juan Guerrero:

- 15. The loss of an eye is not just physical mutilation; it is a social, emotional, and political mark.
- 16. Slow justice, institutional impunity, and state indifference deepen the trauma.
- 17. That is why, beyond financial compensation, what truly heals is truth, memory, and dignity for the victims.

Cristian Rodríguez

- 18. This experience changed my life completely.
- 19. What was an attack intended to silence ended up generating awareness, unity, and organization.
- 20. State justice may be slow and limited, but collective reparation through memory and political action is a form of resistance and dignity.

Daniel Jaimés – Colombia

- 21. Being a victim of ocular violence leaves not only a physical wound, but also a mark of identity.
- 22. I have learned that true justice lies in preventing it from happening again, in transforming fear into dignity, and in continuing to resist through memory.
- 23. I am not seeking revenge. I want people to understand that behind every patch there is a story of life, struggle, and strength.Survivor – Colombia
- 24. After all, I understood that reparation is not measured in money.
- 25. True reparation lies in solidarity, dignity, and memory.
- 26. The state does not respond, but the people do.
- 27. It is we, our comrades, friends, and communities who keep hope and resistance alive.

Alejandro Hernández

- 28. I have lived with this injury since I was 19, and I will continue to live with it for the rest of my life.
- 29. True reparation is not a payment or a conviction, but the recognition of the damage and the genuine forgiveness of those who committed it.

30. I don't want to be remembered as just another victim, but as a voice that denounced injustice and demanded dignity for victims.

Carolina Bautista – Colombia

31. Institutional justice continues to fail, but recognition, solidarity, and collective memory have become forms of reparation.
32. My case was a lonely journey, but today I know that we are not alone.
33. We, the victims of ocular violence, have managed to transform pain into resistance and dignity.

Gustavo Quintero

34. I have learned that justice without humanity is useless.
35. I am not looking for money, I am looking for truth, recognition, and real justice.
36. May the state and those responsible pay for what they did, and may no young person ever again lose their eyes for demanding dignity.
37. Although the process has been long and painful, I have learned to transform anger into strength.
38. My wife and son are my driving force, my family, and my reason for carrying on. Thanks to them, I continue to look—even if with only one eye—toward a future where there is memory and justice.

Muhamin Pulok

39. I am not satisfied with how things have been handled. Justice has been slow, confusing, and politically manipulated.
41. I have survived an attack that changed my life, but I am still standing.
42. My hope is that one day those responsible—from the officers who fired the shots to those who gave the orders—will be held accountable before history and before the people of Bangladesh.

Cesar Galloso

43. Everyone's injury is different. We must stop having such negative feelings, because in the long run that is what causes psychological problems. With the victims, I feel understood and comprehended. And in the long run, the feelings are very similar, with a social sense, with a sense of justice.



Sergio Silva

45. Where is the danger that I posed to society or to that police officer?
46. The judge made a political decision, a wrong and false one, which denies the reality of the facts and continues to harm me to this day.
47. It is my job to inform society, but it absolves the police of blame for firing indiscriminately at unarmed people.

Raul Muñoz

48. I have had good friends and also abandonment.
49. I have learned to value resilience and not to hold grudges.
50. I decided to create an Art, Memory, and Human Rights Foundation. I started by doing mask-making workshops with my neighbors and communities. Art saved me: I teach children to make masks as therapy and resistance.

Will Sands (USA)

51. There are hundreds, if not thousands, of us around the world. Connecting with each other is vital; sharing the experience helps us heal.
- 52. Losing your sight, even partially, is a deeply intimate and devastating experience. But together we are strong. That collective strength, that network of solidarity, is what really keeps us going.

Soren Stevenson

53. Every morning I wake up and still wipe blood from my eye.
54. I know that many of you still have your eye, but suffer from double vision, dizziness, constant pain, or vertigo. I want to tell you that you are not alone.
55. We cannot erase the wound, but we can accompany each other with empathy and solidarity.
56. We may not be together physically, but we are united spiritually, thinking of each other.

Pablo Montiel – Chile

57. Many colleagues became depressed or fell into addiction. Others continue to try to explain, talking to people to break down prejudices, even though it can be exhausting at times. Personally, I try to confront them, to tell my story. Some react with empathy, others do not. It does not make me cry, but it does cause discomfort to hear how they insult us without knowing.



Acknowledgments

We thank everyone who made the production of this report possible. We want to express our deep recognition to the survivors of ocular violence, whose resistance inspires us — as survivors as well — to continue this work.

Likewise, we extend our gratitude to the organizations that have accompanied us with their expertise and training, including the Centro de Atención Psicosocial –CAPS– and the Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP–, whose contributions have been fundamental in our process as survivors and in consolidating a political project aimed at the defense of human rights.

This report belongs to all of you. We hope it continues to strengthen collective efforts to eradicate this type of police violence in States.



VER MÁS ALLÁ DE LA HERIDA : IMPACTOS POSTRAUMÁTICOS DE LA VIOLENCIA OCULAR

“La violencia ocular no termina con el disparo; comienza ahí. Cada mañana, para quienes perdimos un ojo, el espejo es un recordatorio involuntario de lo que ocurrió, una herida que no se cierra con el paso del tiempo. El rostro cambia, y con él se desacomoda el mundo: la manera de movernos, de mirar a los demás, de habitar la vida y de confiar en ella. Basta una mirada fugaz a nuestra propia imagen para revivir no solo el momento del impacto, sino la certeza de lo que un ser humano, y sobre todo un Estado, puede llegar a hacerle a otro, sin importar su vida, su historia o su humanidad.”

“Andrés Juan Guerrero”

ISBN: 978-628-97528-1-6

